



Al distinguido jurista consultor amigo,
Sr. Carlos Delgado.

En suyo

[Signature]

Junio 20 de 1913







REPÚBLICA ARGENTINA

PROYECTO DE CÓDIGO

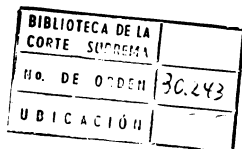
— DE —

PROCEDIMIENTOS EN LO CRIMINAL

PARA LA JUSTICIA FEDERAL,
LA DE LA CAPITAL Y LA DE LOS TERRITORIOS.

Presentado por la Comisión
compuesta de los Doctores Ramón Méndez, M. A. Montes de Oca,
Pedro F. Agote y Secretario José Luis Duffy.

PUBLICACIÓN OFICIAL

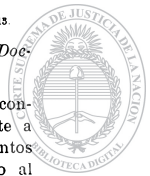


BUENOS AIRES
TALLERES GRÁFICOS DE LA PENITENCIARIA NACIONAL

1913



Señor Ministro de Justicia e Instrucción Pública, Doctor Juan M. Garro.



En cumplimiento de la misión que nos fué confiada por el P. E., presentamos oportunamente a su estudio un proyecto de código de procedimientos civiles y comerciales, que fué más tarde remitido al H. Congreso, de cuyas deliberaciones pende en la actualidad; y ahora, dando término a nuestro mandato, tenemos el honor de someter a la consideración de V. E. un proyecto de código de procedimientos en lo criminal para la justicia federal, la ordinaria de la capital de la República y la de los territorios nacionales.

La experiencia ha demostrado que la legislación vigente de enjuiciamiento penal no armoniza con ideas fundamentales que se han abierto camino en las últimas décadas, pro hijadas por escuelas y jurisprudencias contemporáneas e incorporadas al derecho positivo de muchas naciones.

En pocas ramas de las ciencias jurídicas, las viejas doctrinas han experimentado tan hondos cambios como en el procedimiento penal; en pocas se palpa, con tanta intensidad como en esta, la necesidad de revisar y aquilatar antiguos apotegmas, que aparecían antes inconcusos y han sido hoy, en parte al menos, relegados a la condición de reglas transitorias, cuando no han caído a la categoría de principios arcaicos, reemplazados ya con normas impuestas por la civilización del siglo.



La reforma legislativa en esta materia tiene que ser, por lo tanto, amplia y comprensiva. Las fórmulas coloniales, sustentadas, hasta hace comparativamente pocos años, como las más previsoras y las más sabias, inspiran la economía de las leyes de la República: el procedimiento inquisitorial y escrito es su base. Las fórmulas generalizadas en nuestros días entrañan, empero, propósitos opuestos: el procedimiento público y oral es la conclusión más irrevocable de las especulaciones teóricas y la tendencia más uniforme de las sanciones prácticas.

Creemos, sin embargo, que no es posible adoptar de improviso las ideas nuevas y abandonar las antiguas por un acto de mera autoridad. Son verdades triviales de política y de derecho, que las leyes deben modelarse en los hábitos del pueblo donde van a regir; que para revestirlas del prestigio moral, que es su condición de eficiencia, deben adaptarse a la idiosincracia de la sociedad; que no es prudente producir sacudimientos súbitos y transformaciones repentinas, sin acrisolar con cautela si los beneficios probables de la implantación de nuevas orientaciones, compensan el perjuicio real de abandonar el caudal de enseñanzas acumuladas; y, por último, que los cambios, como regla general, deben ser graduales, combinando el pasado con el presente y las influencias recíprocas de las costumbres sobre las leyes y de las leyes sobre las costumbres, en forma que la evolución se realice sin tropiezos, lógicamente, siguiendo con método las etapas naturales.

Estas enunciaciones, siempre repetidas, pero con frecuencia descuidadas en un país como el nuestro que se desenvuelve a saltos y que anhela experimentar de inmediato las nuevas teorías y los preceptos nuevos, son exactas: ora se las aplique a la legislación substantiva ora se trate de la legislación adjeti-



va; pero parecería que en las leyes de forma son aún más decisivos que en las de fondo el imperio de los hábitos y el influjo de los usos tradicionales. Tanto es así que, a pesar de que la Constitución Nacional ha copiado, casi a la letra, las cláusulas eminentemente sajonas de la constitución de Estados Unidos relativas a la organización judicial y a las normas directrices de los procesos, los tribunales de la nación no han perdido su fisonomía latina, ni en sus costumbres, ni en su manera de actuar, ni en el espíritu que informa sus resoluciones. Las modalidades de la raza han predominado sobre la letra de la ley.

La misma Constitución, que ha creído en la influencia educadora de las leyes, ha conceptuado que las diferencias locales no son tan graves ni tan serias como para impedir la uniformidad de los códigos civil, comercial, penal y de minería, que el Congreso Federal dicta para todo el territorio de la República; pero ha considerado, también, que esas diferencias, descuidadas por grandes motivos de política y de gobierno a los fines de la legislación de fondo, eran capitales a los fines de la legislación de forma, y para que las provincias puedan consultar al respecto las exigencias de su particularismo, se les ha dejado, entre las facultades autonómicas, la de sancionar sus códigos procesales.

Penetrados de estos antecedentes, convencidos de que, las leyes de procedimientos no son cristalizaciones perennes de principios abstractos sino normas graduales de un constante desarrollo, hemos procurado en nuestro proyecto, corregir principalmente los defectos de mayor entidad y orientar las reformas en las tendencias modernas, llevando a efecto solo aquellas que hemos reputado posibles dentro del criterio, de las costumbres y de los sentimientos jurídicos argentinos predominantes en la actualidad,

sin asumir actitudes revolucionarias ni pretender arrasar las instituciones existentes para suplantarlas por las que aconseja la razón pura.

Una consideración más nos ha obligado a ser parcos en transformaciones radicales. El proyecto de código, si fuese sancionado, regiría en toda la extensión del país, pues a toda alcanza la justicia nacional; regiría en la ciudad de Buenos Aires, en las provincias, en los territorios, en ciudades de civilización sólidamente cimentada y en centros de formación reciente, donde una población movediza, disgregada aún, empieza apenas a estrecharse en núcleos conexos. Las modalidades de una región, densamente habitada pueden permitir, tal vez, el ensayo de ciertas instituciones, que otra región repudiaría, sin duda, por falta absoluta de elementos adecuados para infundirles vitalidad o por no hallarse en consonancia con el grado de sus progresos. Aquí, la prensa puede ejercer con autoridad su alta misión de vigilancia y, además, el foro, ilustrado y numeroso, se halla en aptitud de suplir vacíos obligados de instituciones avanzadas; allá, en cambio, la prensa incipiente y el foro escaso aconsejan mayores precauciones y alejan la posibilidad de ensayos liberales, ya que faltan las bases ineludibles para su adopción, la crítica serena y el profesional versado; falta el ambiente de la opinión y el ambiente de la ciencia. La uniformidad de las reglas procesales nos impide adoptar medidas y providencias que, en algunas zonas, podrían, y aun deberían, tener vigencia inmediata, y nos compele a abandonar los espejismos seductores de la teoría para limitar las reformas a lo que es dable concordar con las costumbres diferentes y la abigarrada cultura del país.





El primer problema relativo a los procedimientos criminales es el del juicio por jurados. Se requiere abordarlo y resolverlo, ya que ha sido objeto de preocupaciones pertinaces de los constituyentes de todas las épocas.

Figura en nuestros códigos políticos como una aspiración de justicia recta desde 1819. La Constitución de ese año (art. 114) y la de 1826 (art. 164) encargan al cuerpo legislativo el cuidado «de preparar y poner en planta el establecimiento del juicio por jurados, en cuanto lo permitan las circunstancias.» «La Constitución vigente señala, con insistencia, idéntico propósito. Estatuye, en el art. 24: «El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos y el establecimiento del juicio por jurados»; en el inc. 11, art. 67: «corresponde al Congreso....dictar....las (leyes) que requiera el establecimiento del juicio por jurados;» y en el art. 102: «todos los juicios criminales ordinarios que no se deriven del derecho de acusación concedido a la Cámara de Diputados se terminarán por jurados, luego que se establezca en la República esta institución.» Las constituciones locales, han repetido uniformemente el mismo anhelo, que aparece así consagrado por el derecho público de la nación y el de las provincias.

La aspiración se ha traducido muchas veces en proyectos, en escritos, en folletos de propaganda, y ha tenido, también, principio de aplicación, aunque solo con referencia a una especie particular de delitos.

La ley de Buenos Aires de Junio 1.º de 1828, disponía en su art. 7: «El juicio y castigo del abuso de libertad de imprenta en primera y segunda instancia, corresponde a un *jury* compuesto de cinco ciudadanos sacados a la suerte del modo que se previene en los



artículos 3, 4 y 6 de la ley de 10 de Octubre de 1822.» Dejada sin efecto por el tiránico decreto que suprimió la libertad de la prensa, en febrero 1.º de 1832 fué restablecida, a raíz de Caseros, por resolución de febrero 28 de 1852.

Desde entonces el jurado popular entendió en los delitos de imprenta en la ciudad y provincia de Buenos Aires, hasta el 15 de septiembre de 1857, en que se dictó una ley, cuyo artículo único dió competencia para conocer de ellos, a los jueces ordinarios. Mitre, Elizalde, Frías en la Cámara de Diputados (Sesión del 29 de Julio); Sarmiento, Alsina, Gamboa, Carreras en el Senado (Sesión del 15 de Septiembre) expresaron la causa de la reforma en términos análogos. Pueden considerarse como una síntesis los expuestos por Frías. «Si en este país,» dijo, «el jurado hubiera correspondido a las esperanzas que se fundaron en él, indudablemente este proyecto sería contrario a todas las garantías que favorecen la libertad de imprenta; pero el jurado no existe, es una institución muerta; el espíritu público no ha correspondido a la esperanza del legislador».

El fracaso de la institución fué, pues, evidente. La planta exótica no pudo arraigar en nuestro suelo ni siquiera en un ensayo circunscripto, en las condiciones más propicias para aclimatarla.

Es verdad que la ley de 1857 cayó en desuso; es verdad que, al amparo de preceptos de dudosa vigencia contenidos en la ley de 1828 y, después, invocándose cláusulas de la Constitución local de 1873, (arts. 174 y sigtes.) se reunieron algunos jurados de imprenta con teatral aparatosidad; pero también es verdad que sucumbieron como consecuencia fatal de su propio desprestigio y como resultado de las resoluciones de los tribunales organizados a raíz de la federalización de Buenos Aires, que definieron la com-

petencia de los jueces ordinarios para juzgar esas infracciones (Fallos de la Cámara de lo Criminal, Correccional y Comercial, tomo 1.º, págs. 241, t. 3, pág. 499; t. 6, pág. 311; etc.).

En el orden nacional, todas las iniciativas han sido frustráneas.

Por ley de octubre 6 de 1871 el Congreso dispuso que el P. E. nombrara «una comisión de dos personas idóneas que proyecten la ley de organización del jurado y la de enjuiciamiento en las causas criminales ordinarias de jurisdicción federal». Designados a ese fin, por decreto de noviembre 16 de 1871, los Drs. Florentino González y Victorino de la Plaza, presentaron el resultado de sus trabajos en abril 23 de 1873, en un amplio proyecto, precedido de un extenso y erudito informe explicativo. Enviado inmediatamente a la Cámara de Diputados no ha salido de las carpetas de sus comisiones, a pesar de algunas indicaciones para llevarlo al debate y darle vida (moción del diputado Gilbert, Diario de Sesiones, 1896, t. I. pág. 137).

En 1886, el P. E. proyectó una ley de imprenta que establecía el jurado para los delitos cometidos por intermedio de ella. El Senado la acogió con simpatía y le prestó su aprobación creyendo, quizás, con Del Valle, que «la escuela moderna no admite otra forma legítima de castigar los delitos de imprenta que sometiéndolos al juicio del jurado, porque el jurado representa la opinión y la conciencia pública» (Diario de Sesiones, 1886, pág. 346). La otra rama del parlamento, sin embargo, no dió jamás trascendencia al propósito y, lejos de éso, adelantó los estudios de otros proyectos contrarios al que preconizaba la justicia popular.

Como consecuencia, fué sancionada en 1888 la ley N.º 2372 que puso en vigencia, desde el 1.º de enero





de 1889, «el proyecto de código de procedimientos en materia penal presentado por la comisión revisora del formulado por el doctor don Manuel Obarrio, con las modificaciones introducidas por la comisión de códigos de la H. Cámara de Diputados, en su dictamen de fecha 18 de agosto de 1888».

Esta sanción envuelve un acto de voluntad en cuanto al jurado popular. El código sancionado lo desecha, previa madura reflexión. El ilustrado autor del proyecto originario, Doctor Obarrio, destina varias páginas de su informe, de julio 15 de 1882, a demostrar, con gran acopio de datos y observaciones acertadas, la impracticabilidad de la institución en la República. La comisión revisora, compuesta de los Dres. Leguizamón, Barra y Posse, nada objetó a esas conclusiones en su exposición de julio 28 de 1884, y las comisiones de las cámaras y las cámaras mismas, aceptaron implícitamente la idea de prescindir del jurado, al sentar las reglas del enjuiciamiento penal, no obstante las prevenciones y advertencias de algunos partidarios entusiastas, como el Doctor José Domínguez, quien publicó en 1884 su folleto «Del juicio por jurado en materia criminal,» con un proyecto de ley para su establecimiento en la capital de la República, y el Dr. Martín Ruiz Moreno, cuyo trabajo, editado en 1887, es una síntesis de las ventajas atribuidas a la institución, ilustradas con precedentes europeos y americanos.

Después de la sanción del código, jurisconsultos y magistrados han apuntado sus deficiencias,—tanto más explicables cuanto que ha sido preparado con criterios y por comisiones distintas,—pero no se ha condensado nunca una opinión tendiente a defender el jurado. Así lo reconocen sus preconizadores más diligentes. El Dr. Julián L. Aguirre, cuyo folleto de propaganda («El jurado en materia criminal,» mayo



de 1910) encierra multitud de antecedentes ilustrativos, confiesa, empero: «Al término del primer centenario de la emancipación colonial y bajo el régimen de gobierno adoptado, sorprende, en verdad, una opinión persistente de indiferencia y displicencia contra la bondad de los mandatos constitucionales, declarándose dogmáticamente la incapacidad e ineptitud del pueblo argentino para el ejercicio de una función democrática que es viviente y justamente apreciada en las actuales monarquías europeas y hasta en otros países y gobiernos rayanos con el despotismo».

*
* *

La necesidad de la reforma del código actual, sentida y proclamada en el foro, en la cátedra, en la prensa, en los estrados mismos de la judicatura, no tiene, pues, relación alguna con el juicio por jurados, y hasta podría decirse, por eso, que nuestra misión es, por lo tanto, extraña a esa institución, máxime si se tiene en cuenta que no se nos ha encomendado la revisión de las leyes orgánicas de los tribunales.

El hecho mismo de que el proyecto deba ser redactado en concepto de aplicarse a la justicia nacional de todo el país, excluye la posibilidad del jurado, pues no es discutible, siquiera, que las poblaciones incipientes de las campañas y los centros urbanos, harto reducidos, de los territorios, carecen de las condiciones indispensables para que pueda establecerse el sistema. El Dr. Domínguez, no obstante sus entusiasmos, no prohijaría el jurado en toda la nación. Ha escrito (pág. 9): «Solo grandes dificultades de ejecución, podrían justificar esa inobservancia (de las cláusulas constitucionales). Pero si ha podido retroceder, si todos nos hemos detenido ante las que indica el autor del proyecto de Código, cuando antes de ahora se



ha tratado la cuestión (el jurado) con referencia a la provincia de Buenos Aires, con sus campos inmensos escasamente poblados, con sus medios de comunicación y de transporte lentos y difíciles, no debe suceder lo mismo cuando se trata de legislar para la capital de la República, etc.»; y, en otra parte (pág. 18), agrega: «No es el caso de hacer aquí un estudio detenido del proyecto de 1873, para señalar sus inconvenientes. Pero hay uno que llama desde el primer momento la atención y que a mi juicio es fundamental. Sin hallarse establecido el sistema en ninguna provincia para las causas de jurisdicción local, ese proyecto lo implanta en todas ellas para las causas de jurisdicción federal».

Aunque esta simple consideración basta para justificar nuestra prescindencia de un régimen que no puede tener, por la naturaleza de las cosas y la fuerza incoercible de los hechos, la amplitud y generalidad exigidas por el código que se nos ha encomendado proyectar, creemos que no debemos ocultar a V. E. nuestra convicción íntima de que los anhelos constitucionales, en esta materia, no encuadran dentro de las exigencias científicas del juicio criminal.

El jurado ha recorrido el mundo con el prestigio de las ideas democráticas y las libertades populares. Se le reputa la garantía más eficaz de los derechos del individuo contra las asechanzas del poder, y de ahí que tenga defensores entusiastas, creyentes convencidos de que en su aplicación radica la efectividad de las prerrogativas primarias del hombre y del ciudadano.

Cualquiera que sea su origen remoto, adquirió, verdaderos contornos institucionales en Inglaterra, donde fué implantado, por una sucesión de hábitos y prácticas, como un baluarte de los débiles contra los fuertes, de los vasallos contra los monarcas, de los sub-

ditos contra el soberano que «es a la vez, jefe del poder ejecutivo, una de las partes esenciales y constitutivas del parlamento y la fuente de la justicia» (Franqueville, *Le système judiciaire de la Grande Bretagne*, 1893, t. 1, pág. 19).

Ha desempeñado, sin duda, un papel de trascendencia en la historia de las instituciones libres de los pueblos, pero hoy, del punto de vista político, carece de significado. Fué un arma de combate de otras épocas, que ha dejado de tener eficacia. El respeto hacia su misión en el desarrollo de los derechos individuales puede aún excitar las imaginaciones, pero no excluye el examen frío del sistema que, analizado en su acción real, no garantiza derechos, ni privilegios ni prerrogativas.

Los tribunales de justicia no son hoy prolongaciones de la potestad monárquica, a pesar de lo que pudieran hacer pensar las liturgias externas que rodean a algunos regímenes políticos. Los tribunales de justicia tienen, en las sociedades civilizadas, el prestigio mayor a que pueden alcanzar las instituciones humanas y parece contrario a dogmas y principios contraponer, por un lado, la judicatura oficial, temible, sombría, adusta, peligrosa, a la judicatura popular por el otro, escudo y salvaguarda de la propiedad, del honor y de la vida.

El progreso de nuestro siglo no admite esas diferencias, explicables antaño, y el jurado no induce relación ni con el grado de las libertades individuales, ni con su realidad práctica, ni con el sistema de gobierno adoptado. El jurado existe por igual en los estados de la unión americana y en la monarquía de Prusia, en los cantones de la democracia helvética y en el imperio absoluto de los czares.

Como encarnación de la justicia popular, la magistratura electiva está más en la índole del régimen



republicano. Los jurados, en verdad, no se reclutan entre la masa, ni depende su designación de la voluntad de los sufragantes: se forma previamente una lista de aptos y capaces y de entre ellos se nombran unos pocos, al azar. «La justicia criminal» como dice Carrara, «se convierte en una lotería». Se quita la balanza de sus manos para sustituirla con una urna» (Ferri, Sociología criminal, versión de Soto y Hernández, t. 2., pág. 237. nota).

Se explica, entonces, que los entusiasmos por una institución que políticamente hizo su época, se amortigüen ante el análisis; y se explica también que el número de los admiradores disminuya hasta en las falanges universitarias, cultoras siempre de las ideas generosas y de las normas democráticas e igualitarias. Las dos últimas tesis de alguna importancia presentadas sobre esta materia a la Facultad nacional de la capital critican el jurado con crudeza y con inconmovibles razonamientos de fondo (Alejandro Lucadamo El jurado, 1895; Perfecto Araya, El jurado—Su exposición y crítica, 1896. Este último ha insistido más tarde en las mismas reflexiones en su «Comentario a la Constitución,» 908, pág. 319 y siguientes.)

Si en el orden político, sólo se le sustenta en la actualidad por efecto de ilusiones y fantasías, en el orden científico, dentro de las tendencias modernas del proceso criminal, no tiene bases sólidas en que apoyarse.

El cuerpo amorfo que constituye un *jury* carece de competencia para pronunciarse sobre los delitos, en las múltiples variedades que sugiere la vida contemporánea. Sus miembros, ajenos a la misión judicial al convertirse por un instante en representantes de la ley y paladines del orden social, sufren verdaderas torturas si pretenden fallar con criterio propio y si tienen conciencia de su misión o, lo que es





mas frecuente, se dejan arrastrar por los fáciles impresionismos de la ignorancia para pronunciar verdictos inverosímiles. Su voto lego, irresponsable, por razón de ineptitud, decide sobre los informes periciales más complejos y abstrusos. ¿Y con qué objeto se destartalan en forma tan desconsoladora las reglas de la razón y de la lógica? Con ninguno real; simplemente en atención al papel que otrora desempeñó la institución y que se supone continuará desempeñando, aunque varíen las circunstancias y aunque la experiencia revele su inutilidad como régimen de trascendencia gubernamental.

Para hacer viable el sistema ha habido necesidad de descomponer el delito en dos facetas, absolutamente delimitadas, la de hecho y la de derecho, pues el simple buen sentido se rebela ante la idea de someter cuestiones jurídicas al criterio de legos; pero esa descomposición que, extremada, es absurda, pues pretende separar elementos indivisibles, pugna con la esencia íntima de las cosas. Hay infracciones en que no es dable decidir sobre la responsabilidad penal sin desentrañar múltiples cuestiones de derecho, a veces arduas, en que el mismo juez avezado duda sobre las conclusiones. ¿Qué respeto y qué fe merece la decisión de los supuestos *omes buenos* en esas causas enmarañadas y complejas? ¿Queda satisfecha la justicia en una decisión improvisada a la ventura?

Aramburu y Zuloaga ha escrito un libro (La nueva ciencia penal, 1887) en que expone la doctrina de la escuela positiva y rebate sus conclusiones. Al hablar del jurado sintetiza los ataques de esa escuela en los siguientes términos, de elocuencia indiscutible (pág. 287): «con el planteamiento del jurado se contradice el sentido general del progreso moderno, que crea las especialidades y pregonar los maravillosos resultados de la división del trabajo; se llama a decidir sobre



casos difíciles e intrincados a personas que nunca han reflexionado acerca de la materia, y a estas personas incultas, indoctas, sin antecedentes ni hábitos que den garantías de acierto a sus juicios, se les capacita para resolver sobre informes periciales diversos».... «Sobre el ánimo de aquellos ciudadanos que desde el taller o el mostrador han subido momentáneamente a los escaños del tribunal, influye mucho el aparato oratorio de los que les hablan; la brillantez retórica los ofusca, la sonoridad del período los encanta, lo patético del discurso los conmueve y subyuga; que el representante de la ley sea un hombre elocuente y el abogado un hombre de palabra incorrecta o premiosa, y ya habrá ganado no poco la probabilidad del dictamen contrario al reo; que los términos se inviertan, y la absolución del procesado estará en alza. ¿Es balanza de justicia la que así pesa tropos y sensiblerías?».... «Con entrar por tanto la ignorancia y la preocupación en las injusticias del jurado, todavía existen otras causas de su desprestigio; el temor y la venalidad no son ajenos a la obra de los improvisados juzgadores. Cuando existen en un país asociaciones temibles, como la *camorra* y la *maffia* en Italia, no es el valor lo que a aquellos distingue y, en vez de desafiarse los riesgos de una sentencia justa, prefieren vivir tranquilos a costa de la justicia. Sería mucho pedir al particular que por accidente es llamado al desempeño de una alta función y no funda en el ejercicio de este cargo aleatorio su modo de vivir, su porvenir y su crédito, que sacrificase su reposo y el de su familia a una estoica rectitud».....

El jurado que distrae a hombres de labor de sus tareas ordinarias, durante horas y días, no podría extenderse a toda clase de infracciones, sin producir graves males y perjuicios infinitos en la actividad privada. La mayoría de los estados lo reservan, por

eso, para los delitos de mayor entidad. El proyecto de los Dres. González y Plaza le daba competencia para entender en los «delitos graves» (art. 1.º); el proyecto del Dr. Domínguez aludía a «toda causa por hecho calificado de crimen por la ley» (art. 1.º).

El sistema supone, pues, la coexistencia paralela de dos regímenes: el uno, de justicia popular, para los grandes criminales o sospechados de tales; el otro, de justicia togada, para los delincuentes de segundo grado y para los simples contraventores. La desigualdad rompe la uniformidad de criterio que debe ser objetivo de la legislación y la rompe con evidente falta de equidad. El tribunal adventicio, sujeto a los arrebatos pasionales, a los impulsos propios de la ignorancia, a las vacilaciones del temor, a los efectos de la venalidad; el tribunal irresponsable, sin espíritu de cuerpo, sin tradiciones que conservar, sin ambiciones de renombre; el tribunal heterogéneo, inclinado a la benignidad por las mil razones que destemplan la rigidez del juicio en quienes carecen de la noción real de sus funciones, ese tribunal juzga la responsabilidad de los reos más peligrosos; mientras que el juez de derecho, apegado a la ley, adusto por razón de su cargo, con el sentimiento y la conciencia de sus deberes, falla las causas de importancia secundaria. La red procesal, en esa forma, aprisiona a los infractores de menor cuantía y deja libres a los realmente temibles. Hace algunos años, Milán se escandalizaba porque contemporáneamente se decretó, por veredicto de un jurado, la absolución de ladrones que habían defraudado millones de liras y, por sentencia de una corte, la condena a tres años de una pobre mujer, convicta de un hurto pequeño en la campaña. El recuerdo del hecho provoca esta exclamación de Buccellati: «O abolid el jurado o extendedlo indistintamente a todos los delitos: pero no establezcáis



un privilegio inicuo en provecho de la mayor delincuencia» (Instituzioni di diritto e procedura penale, 1884, pág. 500).

La orientación del derecho penal en nuestra época es netamente científica y tiende a profundizar el estudio del criminal tanto, por lo menos, como del delito mismo. El elemento subjetivo se impone, cada día con más vigor, a la consideración de legisladores y hombres de estado. Su apreciación, sin embargo, escapa al criterio de los miembros accidentales de un tribunal de ocasión, que actúa a impulsos de impresiones y sentimientos. Las naciones donde el jurado impera, ofrecen, de este punto de mira, una saliente antinomia. Mientras la legislación de fondo, en su propósito de garantizar eficazmente el orden social, procura escrutar las normas de la delincuencia y señalar las medidas de represión, de prevención y de defensa que armonicen con las complejas modalidades combinadas de la infracción y del infractor, del hecho externo y del fenómeno humano, la legislación de forma abandona ese norte, para rendir un homenaje de ilusiones a vetustos sistemas que tuvieron trascendencia en otros tiempos, en otra atmósfera política, en otras necesidades de garantías individuales, con otros temores de arrebatos por parte de los gobernantes, con otros medios de hacer prevalecer los dictados de la justicia y de la verdad, de los que presenta, en todas las latitudes, el siglo en que vivimos, y, en los países republicanos, el principio de que la base de los poderes, el judicial inclusive, radica, directa o indirectamente en el pueblo, fuente y origen de la soberanía nacional.

Son, pues, palmarias las dificultades e incongruencias del sistema. La aspiración constitucional por eso, explicable, quizás, en 1853, ha caído en la indiferencia pública. Creemos, con el Dr. Obarrio, que el



parlamento no ha incurrido al respecto en «una inacción culpable»; su silencio importa una manifestación consciente en contra del jurado, sino por completo acerca de su inconveniencia, al menos, siquiera, sobre su inoportunidad.



Para utilizar las ventajas atribuidas al jurado y eludir sus graves e incuestionables defectos; para acelerar la tramitación de los procesos y concluir con las apelaciones, quizás el mejor temperamento podría haber sido el de organizar tribunales colegiados de única instancia, compuestos de jueces de derecho, y que importarían algo así como un jury calificado. Los beneficios de esta organización han sido detenidamente analizados por el Dr. Rivarola. (La justicia en lo criminal, 1899, págs. 197 y siguientes) y, en realidad, es ella teóricamente insuperable.

Sin embargo, y no obstante nuestra convicción de que los tribunales individuales y el régimen de las apelaciones son perfectibles, no nos ha sido dado adoptar la reforma, con la cual estamos de completo acuerdo.

Para implantarla, hubiera sido necesario transformar fundamentalmente la organización de la judicatoria nacional y ni el proyecto hubiera encuadrado dentro de la misión que nos encomendó el P. E., ni es prudente hacer depender las enmiendas imposterables de las leyes adjetivas, de un cambio orgánico, casi revolucionario, en la magistratura federal, en la de los territorios y en la ordinaria de la capital de la Nación.

Si los progresos del enjuiciamiento han de producirse sin tropiezos, es lo repetimos, a condición de ser paulatinos y no es dado pretender la realización inme-





diata de ideales que alteran, desde sus bases, el orden de cosas establecido.

Por lo demás, la reforma, posible, tal vez, en la capital, no lo es en todos los centros del país. En muchos falta foro, opinión, medios para un organismo que requiere abundancia de elementos. Hubiera sido aventurado crear esos tribunales en las vastas soledades de los territorios; que si han incorporado sus fuentes de producción a la riqueza pública, no tienen todavía medios de llenar los fines del gobierno, ni de atender por sí las exigencias de la administración.

La aplicación de la idea ha sido proyectada en la provincia de Buenos Aires (Proyecto de ley sobre organización y atribuciones de la administración de justicia, por los doctores Salvador de la Colina y Rodolfo Rivarola, arts. 30, 31, etc.), pero aun así, circunscripta, ha tropezado con dificultades financieras y de orden práctico (Véase el folleto del Dr. Enrique B. Prack, Observaciones al proyecto de ley orgánica de los tribunales, 1911). El Dr. Veyga, partidario de la idea y defensor de lo que denomina «jurado letrado permanente», a pesar de explicar la manera en que podía extenderse a todo el país, habla únicamente de la «practicabilidad inmediata de la reforma en la capital federal» (La reforma de la justicia argentina, 1910, pág. 25).

Son estas las consideraciones que nos han aconsejado partir del hecho existente de la actual organización de los tribunales, para indicar las enmiendas procesales más urgentemente requeridas por la experiencia, y hacer posible su adopción, sin obstáculos serios ni resistencias, a veces insalvables.

••

La práctica ha señalado en nuestro derecho procesal múltiples inconvenientes de detalle, que, en par-



te, han sido atenuados por las decisiones de los tribunales y que, en otra parte, reclaman una impostergable reforma legislativa porque escapan al poder de una jurisprudencia progresista: y ha señalado también la necesidad de abordar, sin demora, el cambio de algunos rasgos de la instrucción criminal que son característicos en la República y que la crítica expone con singular uniformidad. Nos referimos a la ausencia del procedimiento oral, proscripto, puede decirse, de nuestro código; a las dificultades y trabas conexas con la indispensable publicidad de los debates en el plenario; al secreto del sumario, mantenido con un exceso que la ciencia jurídica no explica; a la intervención conjunta, en calidad de querellantes, del ministerio público y del ofendido; a la falta de reglamentación para el ejercicio de las acciones civiles; al sistema de someter a reglas y corolarios matemáticos la apreciación de las modalidades de la prueba; a las detenciones preventivas extendidas sin objeto y las excarcelaciones restringidas sin motivo; a la prescindencia de las condiciones del delincuente en la generalidad de los procesos.

En estos diversos tópicos radican, sin duda, las fallas más salientes de las leyes y a ellas, por lo tanto, hemos debido prestar nuestra atención preferente, sin descuidar otras reformas.

••

Quando se contraponen los términos «procedimiento escrito» y «procedimiento oral» no se procura dilucidar si debe o no dejarse, en un cuerpo de autos, constancia material de las diligencias de un proceso. Si fuere de esa faz que debiese encararse la cuestión tan debatida entre la forma oral y la escrita, han dicho los juriconsultos uruguayos Brito del Pino, Ra-



mírez, De María y Rodríguez, «habría que reconocer que es esta última la que ha debido predominar siempre, mientras no se invente un medio más cierto y duradero de perpetuar, al través del tiempo y del espacio, la expresión del pensamiento humano. Hay que partir, pues, del principio de que ningún procedimiento judicial puede prescindir de la escritura, como medio de conservar sin alteración y tales como se producen, los elementos destinados a formar la convicción determinante del fallo definitivo, ya se trate del procedimiento inquisitivo o acusatorio, de la instrucción del sumario o de la preparación de la prueba en el plenario» (Proyecto de un nuevo Código de procedimiento penal para la República O. del Uruguay por Alfredo Vázquez Acevedo, 1895. Informe de la Comisión Revisora, pág. XCIV.).

La oralidad del juicio es extraña a la circunstancia de que se consignen o no por escrito los pormenores de los trámites. Se refiere a la manera, al método en que el magistrado adquiere noticia de la causa y de sus detalles. En este orden de ideas, el procedimiento es escrito cuando el funcionario judicial tiene como base cardinal, sino única, de su estudio, las páginas de un expediente, donde sus auxiliares han hecho constar trámites practicados por delegación: el procedimiento es oral cuando el funcionario judicial interviene, por sí, directa y personalmente, en el enjuiciamiento, cuando es él quien dirige las encuestas, cuando es él quien preside las pruebas y escucha a las partes, a los peritos, a los testigos.

El procedimiento oral, en este sentido, no admite parangón con el procedimiento escrito. Solo con el primero, puede formarse, en realidad, la conciencia personal del juez, sin sugerencias extrañas, ni errores provenientes de secretarios o copistas.

Una de las peculiaridades que recomiendan al ju-

rado es que él es inseparable del procedimiento oral. Aplíquese el procedimiento oral a la judicatura togada; procúrese que ella esté en situación de apreciar debidamente las modalidades de la prueba, presenciando las declaraciones o informes, los acentos de convicción y de verdad que los acompañan y hasta el gesto de quienes los prestan o los producen, y se habrán añadido, a las ventajas científicas inestimables del juicio de letrados, las ventajas psicológicas palmarias de la ingerencia directa en los trámites.

Nuestro proyecto ha intensificado, en este orden de ideas, la obligación de la presencia del magistrado en las diligencias probatorias y ha determinado, abiertamente, el juicio oral en el plenario. Ha prescripto que los jueces de la capital y los de sección que tengan su sede en el lugar donde se perpetró el delito, deben tomar la dirección del sumario, actuando personalmente, dentro de ocho horas de recibir la comunicación que debe hacérseles por telégrafo y sin demora; que los demás jueces procederán, del mismo modo, una vez que reciban el sumario de prevención; que el juez no podrá delegar en circunstancia alguna la diligencia de recibir la declaración indagatoria del procesado; que el juez procurará comprobar las circunstancias personales del reo; que los testigos deben ser examinados personalmente por el juez en presencia del secretario bajo pena de nulidad; etc. Ha resuelto que, en el plenario, las pruebas se recibirán en una audiencia presidida por el juez, bajo pena de nulidad; que en ella se hallará el procesado detenido, quién, en todos los casos, será, invitado a que exponga lo que considere necesario, sin perjuicio de la defensa que se produzca en su favor; que terminada la prueba los interesados aducirán las consideraciones que sustenten sus ideas y el juez citará a las partes para sentencia.





Las prescripciones propuestas obedecen a principios muy difundidos en la actualidad, y concuerdan en su economía general, si bien no en su letra, con las del código de Bolivia de 1895, que ha incorporado notables progresos, y con las del proyecto citado de Vázquez Acevedo para la República O. del Uruguay, cuya comisión revisora sintetiza su alcance en estos términos: «Queda ya expuesto lo bastante para que se comprenda en qué sentido difiere fundamentalmente la forma oral de la escrita en el procedimiento del juicio criminal. Que la prueba se produzca, en cuanto ello sea posible, ante los mismos jueces encargados de fijar su valor jurídico y que, en su consecuencia, sea por ellos conocida antes o a medida que se hace constar por escrito. Que no suceda, como en el procedimiento penal vigente, que los jueces de sentencia toman conocimiento de los medios probatorios destinados a formar su convicción, mucho tiempo después que la prueba se ha producido por delegación ante otros funcionarios. Con excepción de las pruebas que por su naturaleza existen completas con independencia del proceso en tramitación, que es el caso de la prueba documental, todos los demás elementos de comprobación del delito que no existen preconstituídos, y muy especialmente la prueba testimonial, deben ser recibidos y diligenciados por los mismos jueces de fallo, sin intermediarios, a fin de que la veracidad del testigo y sus condiciones de inteligencia y probidad no se midan por sus condiciones genéricas, sino por las cualidades físicas, fisiológicas, intelectuales y morales características de su personalidad y que contribuyen a fijar conscientemente la fe del testimonio que prestan» (obra citada, pág. C).



El juicio oral hace desaparecer, como consecuencia inmediata, la falta de publicidad en los debates; pero, para que no haya al respecto la mínima duda, para que exista la vigilancia indispensable de la opinión en la marcha de los juicios, se ha estatuido, expresamente, que la audiencia, en la vista de la causa, será pública, siempre que por razones de decoro no se disponga lo contrario.

Con esta cláusula se evitarán los juicios a puerta cerrada que son el corolario fatal de las delegaciones ilegales y arbitrarias, tan comunes en el sistema actual y tan perjudiciales para la autoridad moral de la justicia.

* *

En cuanto al sumario en sí, el carácter de secreto ha sido dogma de fe en el enjuiciamiento nacional. «El sumario es secreto», ordena el art. 180 del código, «y no se admiten en él debates ni defensas». Sin embargo, ya las cláusulas de este código importan un paso hacia adelante,—tímido si se quiere, pero palpable,—sobre el régimen inquisitorial que les precedió. El doctor Obarrio, al fundarlas en su nota de remisión, expuso: «Pero el punto que ha dado lugar a mayores controversias, dividiendo a la legislación y a la doctrina y al cual debía prestar, por lo tanto, una atención preferente, es, sin duda alguna, el de la publicidad o el secreto del sumario. En favor de la primera se invocan las garantías individuales y se señalan los peligros que pueden ocurrir dejando al juez obrar libremente en el sigilo de una investigación inquisitorial. En favor del segundo se aducen razones de conveniencia general. La publicidad de las diligencias del sumario, poniendo al procesado en conocimiento de los antecedentes que se van acumu-



lando en su contra, lo coloca en condiciones de distraer la investigación, burlando sus propósitos, y de impedir la realización de diligencias que, practicadas, pudieran no sólo comprometer su inocencia, sino dejar plenamente establecida su participación en la ejecución del hecho criminoso. En este punto he adoptado también un sistema mixto, un término conciliatorio que, evitando los inconvenientes de uno y otro, ofrezca, sin embargo, todas las ventajas que la instrucción reporta del sumario secreto»... «Pero el acusado puede intervenir también por intermedio de su defensor en todas las actuaciones de la instrucción, salvo en la recepción de las declaraciones de testigos, por las ulteriores a que puedan dar nacimiento estas declaraciones: (Proyecto de código, etc., pág. XXVIII).

El secreto del sumario no es, pues, riguroso de acuerdo con los propósitos del autor del código, cuyos artículos originarios al respecto han sido, no obstante, modificados. No rige el secreto respecto a la prueba instrumental, ya que «los documentos que se presenten durante la instrucción o que de cualquier manera deban obrar en el proceso, se agregarán a este previa notificación de las partes» (art. 348); no rige, tampoco, respecto a la prueba pericial, desde que la designación de peritos «se notificará inmediatamente a las partes» (art. 330), quienes pueden nombrar también «peritos a su costa que acompañarán a los que el juez haya designado» (art. 336) y desde que «los peritos practicarán unidos la diligencia y las partes podrán asistir a ella» (art. 339).

Con todo, la reserva se mantiene estricta en cuanto a la prueba testimonial y, aunque en la práctica se la rompa, la verdad es que el sumario, en la forma en que está legislado, resulta rodeado de un velo espeso de misterio, que suscita desconfianzas y dificultades y que al dar al juez instructor las amplias fa-



cultades que son el cortejo forzoso de su misión, suprime el único contrapeso posible: la vigilancia de las partes y de la opinión, que morigera los excesos de atribuciones.

Las razones que aconsejan la publicidad del sumario son generales y de importancia trascendental, porque aluden a las garantías primarias del individuo; las razones que aconsejan el secreto del sumario son, entre tanto, especiales; sólo debe tenérselas en cuenta en los casos concretos en que la divulgación de las diligencias pueda ser fatal para los objetos de la instrucción.

En tales condiciones, la orientación de las ideas modernas conduce a quitar al proceso el aspecto sombrío e inquisitorial, conduce, en otras palabras, a establecer como regla que el sumario no es secreto; pero, al mismo tiempo, es indispensable conferir al juez las facultades adecuadas para impedir que se burle su acción en todos aquellos casos de delitos graves, en que maquinaciones hábiles o aviesas, podrían trabar las diligencias tendientes a fijar los caracteres del delito y descubrir sus autores. Nuestra convicción es tan arraigada en este punto que, tratándose de delitos leves, hemos preferido arrostrar los peligros de la publicidad antes de sancionar los perjuicios notorios de la reserva.

De acuerdo con estas ideas, hemos proyectado que, en materia correccional, el sumario nunca será secreto para las partes; que, en materia criminal lo será únicamente en los casos en que el juez así lo declare por considerar que la noticia de sus constancias pueda entorpecer sus objetos; que el secreto se mantendrá por un término de cinco días, el cual podrá ser extendido hasta quince, con autorización verbal del presidente de la cámara de apelación y que el secreto no reza con el ministerio público.

El Dr. Rivarola, haciendo la crítica del código, ex-



presa que «el secreto del sumario es riguroso para el acusado y para su defensor, aunque según todos los indicios no lo sea nunca para los reporters de la prensa, que lo publican diariamente en las notas sensacionales de los hechos policiales» (La justicia en lo criminal, pág. 48).

Con el fin de evitar el mal y con ocasión de publicaciones realizadas relativas a un crimen que conmovió a la sociedad, en 1894, por el hallazgo de un cadáver descuartizado, la cámara de apelaciones en lo criminal, correccional y comercial dictó un acuerdo (Fallos, tomo 52, pág. 559) en el que se lee: «Que algunos de los datos y referencias consignados en las publicaciones aludidas, (arts. 180 y 205 del código de procedimientos), no pueden haber sido obtenidos sino por la violación u olvido de esos preceptos, que obligan no solamente al juez instructor y empleados de su dependencia, sino también a todos los empleados y funcionarios de la policía. Que dado el sistema procesal adoptado por el código de procedimientos en lo criminal, la publicación de las constancias del sumario, es no sólo contraria al secreto que él mismo prescribe y cuya revelación por parte de los empleados que tengan conocimiento de él, por razón del cargo que ejerzan, constituye un delito previsto y penado en el art. 262 del código penal, sino que admitido el sistema inquisitivo, confiado a determinados funcionarios y abolida la acción popular para la persecución de los delitos, tales publicaciones deben legalmente presumirse perjudiciales al desenvolvimiento de la verdad, y por tanto, obstaculizadoras del curso de la justicia.... Por todo ello, resolvió: 1°. Se recomienda a los jueces de instrucción y jefe de policía la puntual observancia de las disposiciones citadas, que deberán recordar a los empleados de sus respectivas dependencias, como ya les fué advertido por acordada de 24 de noviembre de 1892»...



Podría pensarse que, cambiado el carácter del sumario, esta resolución sólo sería aplicable en el caso y durante la época en que el juez decidiera mantener el secreto de la instrucción. Para desvanecer esta posible hermenéutica, para acentuar los efectos de la acordada y darle mayor fuerza hemos creído conveniente establecer que «no podrán tomar conocimiento del sumario sino las partes que intervienen en él» y que «la violación de esta regla será corregida disciplinariamente por el juez o tribunal respectivo». Así se mantendrán los empleados dentro de la reserva que les compete y, de este punto de vista, se harán efectivos el respeto que merecen reputaciones individuales que pudieran ser afectadas por una causa iniciada, la secuela regular de los procesos y la autoridad moral con que es necesario rodear la administración de la justicia, alejándola de pequeñas pasiones y de comentarios extraños a su misión.

* *

Otra reforma substancial que hemos proyectado tiende a suprimir la intervención conjunta del ministerio público y del ofendido por el delito o sus herederos, «mezcla híbrida de las formas inquisitivas y acusatorias», según la frase del Dr. Jofré en una de las obras con que ha enriquecido la literatura jurídica criminal. (Procedimiento criminal argentino, 1909, pág. VI).

El art. 14 del código considera que las acciones son públicas «cuando debe ejercitarlas el ministerio fiscal, sin perjuicio del derecho de acusar o de intervenir como parte querellante en el juicio que incumbe a las personas ofendidas o damnificadas por el delito o a sus representantes legales».

El ofendido por el delito puede asumir, aun tra-



tándose de las acciones públicas, el papel de acusador para procurar que se imponga al ofensor las penas que las leyes prescriben. «No es posible», ha dicho el autor del proyecto originario, «desconocer en la persona damnificada el derecho de velar por el castigo del culpable y tanto más cuanto que el resultado del juicio criminal tiene una influencia decisiva respecto de las acciones civiles que nacen del delito».

En nuestro concepto, el castigo del culpable tiene por objeto único una razón superior de interés general, que excluye, en un todo, los intereses individuales y la satisfacción de sentimientos de venganza personal. «El fin primario de la pena», como lo ha puesto en transparencia Carrara, «es el restablecimiento del orden externo de la sociedad» (Programma, 1886, t. 2, pág. 93); y ese propósito se realiza por la acción social, con el criterio de sus representantes encargados de tutelar el equilibrio colectivo, y no por la acción privada, con el criterio de quienes se sienten perjudicados y procuran la represión para encalmar sus pasiones.

El delito hiere a la sociedad y hiere también al individuo que es su víctima directa. Hiere a la sociedad al conmover el imperio de la ley; hiere al individuo causándole un daño material. Las reacciones de la una y del otro se encaminan a fines diferentes. La sociedad, con el pensamiento fijo en las futuras actividades antijurídicas, procura restablecer el dominio de la ley; el individuo, con el pensamiento fijo en el perjuicio pasado, procura reparar su patrimonio amornado por la infracción.

Hay, sin embargo, una categoría de delitos que con generalidad se denominan privados, cuyo castigo, por razones especialísimas, no puede ser perseguido sino a instancia de la parte damnificada, como el adulterio, la calumnia y otros taxativamente determinados en los códigos penales. En cuanto a éstos, hay que



conservar la institución de la querella, porque circunstancias elementales de buen régimen procesal lo aconsejan en el estado actual de nuestras costumbres y en presencia de los mandatos de la legislación de fondo; pero en los demás casos, en los delitos que también con generalidad se denominan públicos, la acción debe quedar reservada a los representantes de la sociedad, a los agentes del ministerio fiscal, como la acción civil está reservada a los particulares, con la diferencia substancial de que la primera debe ejercitarse inexorablemente, dados los fundamentos de alto interés que la apoyan y la segunda, puede ejercitarse o no, ya que nada obsta a que las personas renuncien a los derechos patrimoniales y a los litigios para obtener su reconocimiento.

Motivos ocasionales han sido causa de que los jurisconsultos de la República Oriental estudien, con singular empeño, el problema relativo a la ingerencia de querellantes. El código de instrucción criminal no admite allí la acción individual sino en los casos en que sólo puede ejercitarse por la parte agraviada. La comisión revisora, compuesta por los Dres. Vázquez, Requena, Santurio, de Castro, Aguirre y Castellanos, expresó así los motivos: «Después de animados y frecuentes debates, prevaleció la opinión de limitar el derecho de acusar, sometiéndolo exclusivamente al ministerio fiscal, siempre que se trate de delito que pueda producir acción pública..... Por otra parte, la perpetración de ciertos atentados, que conmueven a la sociedad, que ponen en peligro sus más caras instituciones, no son ni pueden ser sino de su resorte; la acción privada se extingue allí donde la justicia tiene que resolver, no una contienda entre particulares, sino el desempeño del más alto privilegio, el poder absoluto de castigar y corregir, en nombre de las supremas exigencias de la con-



servación social. Debe, pues, someterse la apreciación del caso al funcionario encargado de representar a la comunidad en las funciones relativas al ejercicio de tales acciones, no a título de acusador público, no a título de la vindicta pública, sino en el nombre augusto de la ley y bajo los impulsos de la razón fría y serena».

El Doctor Laudelino Vázquez, autor del proyecto primitivo, no compartía esas conclusiones, y, si bien el código rigió desde marzo de 1879, no cesó de exponer sus ideas que alguna vez tuvieron eco simpático en una comisión de la Cámara de Representantes, compuesta por el mismo doctor Vázquez y por los Dres. Izcuza Barbat, Rodríguez, Melián Lafinur y Rodríguez Larreta. Esto no obstante, la doctrina nueva, que excluye los resabios atávicos de la noción de venganza como propulsores de las acciones penales, se ha mantenido en el «Proyecto del nuevo Código» del Dr. Alfredo Vázquez Acevedo, (art. 3) y ha sido robustecida por el informe citado de los Dres. Eduardo Brito Del Pino, Gonzalo Ramírez, Pablo De María y Antonio María Rodríguez (págs. XLVIII y sigtes.)

Entre nosotros, el Doctor Rodolfo Rivarola (La justicia en lo Criminal, págs. 219 y sigtes.) ha escrito páginas decisivas contra un sistema anticuado, trasunto de los odios y pasiones propias de las teorías represivas de otras épocas y fuente perenne de dificultades, nacidas de la intervención conjunta de dos entidades distintas que persiguen el castigo del mismo culpable, guiados por objetivos diferentes e impulsados por móviles diversos, antagónicos a veces. El doctor Jofré, por su parte (Procedimientos Criminal, pág. IX), escribe: «la intervención conjunta del ministerio público y de la víctima del delito es tan perjudicial, tan anómala, tan llena de inconvenientes, que uno no se explica cómo puede perdurar.»

* * *

La única observación substancial contra la supresión del querellante en los delitos públicos es la que, como hemos recordado, expresa el Dr. Obarrio al decir que «el resultado del juicio criminal tiene una influencia decisiva respecto de la existencia de las acciones civiles que nacen del delito.»

La influencia es evidente. Alguna vez, es verdad, los tribunales argentinos han resuelto que «la absolución del procesado ante la ley criminal, no basta para libertarlo de la responsabilidad que la ley civil le impone por aquellos actos ilícitos que, por su culpa o negligencia, hayan irrogado un perjuicio, sin que puedan calificarse como delitos previstos y penados por el código criminal» (Fallos de la cámara civil de la capital, tomo 11, pág. 99). Pero, aparte de esta regla, que rige un caso especial, la jurisprudencia generalizada en los tribunales del país, decide que «la sentencia absolutoria en el juicio criminal hace improcedente la reclamación civil de daños y perjuicios fundados en el mismo hecho» (Fallos de la cámara civil de la capital, tomo 125, pág. 432; tomo 137, pág. 242, etc.). El código civil, en su art. 1103 dispone, además: «Después de la absolución del acusado, no se podrá tampoco alegar en el juicio civil la existencia del hecho principal sobre el cual hubiera recaído la absolución.

¿Cómo, entonces, denegar al particular ofendido la ingerencia que el simple buen sentido aconseja en los procedimientos que van a resolver sobre la eficacia de la acción civil que le compete?

La supresión del querellante no importa negar al damnificado toda clase de ingerencia en el proceso; solo importa privarle del papel de acusador, a los efectos del castigo, dejando, en toda su integridad, el dere-





cho para seguir las incidencias de la causa en cuanto puedan afectar sus acciones patrimoniales.

En nuestro proyecto desaparece, por eso, el acusador particular en los delitos públicos, pero se concede al agraviado la facultad de intentar, ante los mismos tribunales del crimen, la acción civil por reparación de perjuicios y de proseguirla en todas sus etapas, con la mayor libertad y con eficaces garantías, cuidando solo de que ella no entorpezca la continuación metódica y correcta de la instrucción criminal.

La reacción del estado, ante un delito, debe considerar los dos aspectos que él presenta: la alarma pública producida por el temor de la repetición de hechos análogos, y el perjuicio material y moral causado al ofendido. La reacción del estado debe, pues, tender a disminuir, ya que es imposible aniquilar del todo, la posibilidad de la reincidencia y a reponer, en su estado anterior a la infracción, el patrimonio de la víctima. Si estas medidas nacen de una sola causa, si derivan de idénticas prerrogativas de los poderes públicos ¿por qué no propender a que se estudien conjuntamente, a que se rijan por análogos principios, mientras lo permita la naturaleza de las cosas, y a que se decidan por las mismas autoridades?

La idea no es nueva. Se la sustentaba aun en épocas en que imperaba la venganza como alma de la represión. Gregorio López, en su glosa 5.^a a la ley 9, tít. 14, Part. 7.^a, escribía que la acción puramente privada o civil puede ejercerse accesoriamente con la criminal, porque las dos traen su origen de una misma causa y las dos competen a un mismo actor y contra un mismo reo.

Muchos códigos extranjeros han adoptado la regla, cuyas ventajas prácticas están acentuadas por la experiencia universal. La siguen, entre otros, la Compilación reformada de las disposiciones vigentes sobre el



enjuiciamiento criminal español (art. 242), el código de instrucción penal de Ginebra (art. 5), el código de instrucción criminal de la República Oriental del Uruguay (art. 5), el código austriaco (art. 366), el código de instrucción criminal de Francia (art. 3), el código antiguo de procedimientos penal del reino de Italia (art. 14, etc.). El nuevo código italiano, presentado en 1912 a la Cámara de Diputados por el ministerio de gracia, justicia y culto, y sancionado el corriente año, reproduce el precepto en estos términos (art. 9): «La persona lesionada por el delito y, si ella ha muerto o se halla ausente, su cónyuge, sus descendientes, sus hermanos, sus hermanas y sus herederos, pueden ejercitar la acción civil que nace del delito ante el juez penal, conjuntamente con el ejercicio de la acción penal. El ejercicio de la acción civil se suspende ante el juez civil hasta la sentencia irrevocable del juez penal. Si la acción penal se extingue, la acción civil se ejercita ante el juez civil.»

Las escuelas criminalistas tienden hoy a evitar que la reparación de los daños causados por el delito sea una esperanza ilusoria para convertirse en una evidente realidad, y algunas de ellas procuran reformas radicales de fondo y de forma para lograr el propósito. Adoptarlas importaría, quizás, avanzar demasiado en el orden de doctrinas aun en debate, pero existe un consenso uniforme sobre el punto relativo a la competencia del juez penal en el conocimiento de la acción civil, para dar así facilidades a la actividad del ofendido y hacer más posible la indemnización real del mal ocasionado. No solo la legislación positiva se ha pronunciado al respecto, si no que esa tesis constituye una aspiración de congresos y de pensadores. En el congreso de antropología criminal, reunido en Roma durante el año 1885, Fioretti propuso, en la sesión del 17 de Noviembre, resolver que «la liquidación de los daños



e intereses causados por el delito es de la competencia del juez penal cuando se pronuncia sobre la pena.» Garofalo, en un estudio especial sobre esta importante materia, conceptúa que el primer principio que es necesario adoptar para no burlar las indemnizaciones debidas, cuya efectividad debe el estado garantizar, es esta: «Competencia del juez penal para la determinación del daño, salvo el caso de grave dificultad en el cual podría ordenarse el envío al juez civil, previa asignación de una suma provisoria.» (*Riparazione alle vittime del delitto*, 1887, pág. 60).

Un obstáculo aparente para la aplicación de estas teorías en la República nace de nuestro código civil. Su artículo 1096 estatuye: «La indemnización del daño causado por delito, solo puede ser demandada por acción civil, independiente de la acción criminal».

Esta disposición ha sido robustecida por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia Nacional en un caso, más político que civil, en que no se estudiaron a fondo las cuestiones que el artículo transcripto origina en nuestro régimen institucional.

A raíz de un movimiento subversivo en San Juan, fué arrestado don Manuel José Zaballa, autor presuntivo del hecho. El gobierno local dispuso, además, tras una declaratoria de estado de sitio, la expulsión del procesado del territorio de la provincia, confiando la ejecución de la orden al intendente de policía don José Domingo Astorga, quien lo condujo hasta las fronteras de la Rioja. Como consecuencia, el Sr. Zaballa dedujo contra el Sr. Astorga demanda criminal y civil: criminal, por abuso de autoridad; civil, por reparación del daño irrogado. La Corte, en definitiva, confirmó, por sus fundamentos, un fallo del juez de sección cuyo primer considerando dice textualmente: «Que en el presente caso no puede tomarse en consideración la acción civil por no haberse deducido en



forma legal, al venir acompañada con la criminal contra la terminante disposición del Art. 31, Cap. 4.º Tít. 8.º, Secc. 2.ª. Lib. 2 del código civil que dispone que la indemnización por causa de delitos debe ser demandada por acción civil independiente de la acción criminal.» (Fallos de la Suprema Corte, tomo 11, pág. 423).

Con posterioridad fué sancionado el código de procedimientos. Sus arts. 496, inc. 1 y 567, entre otros, aluden a la competencia de los tribunales del crimen para decidir sobre la acción civil al propio tiempo que resuelven la acción penal.

En presencia de esta evidente antinomia ¿a cuál de los preceptos debe acordarse primacía? ¿Al del código civil, dictado por los poderes nacionales para tener vigencia compulsiva en todo el país? ¿Al del código de procedimientos que el Congreso sancionó para la justicia federal y la ordinaria de la capital y de los territorios? En nuestra opinión, la duda no es posible. La forma de ejercitar las acciones y la competencia de los tribunales son materias ajenas al código civil y partes integrantes de la legislación de forma. En el conflicto debe primar la ley posterior, si ambas son nacionales, y si una emana del Congreso y la otra de una legislatura local, la prelación debe acordarse a la ley adjetiva porque, lo repetimos, las cuestiones de que tratamos son típicamente de su resorte.

Los tribunales así lo han decidido. En una de las sentencias, la doctrina aparece sintéticamente establecida y la transcripción de los párrafos pertinentes excusa todo ulterior comentario. Expuso en ella la cámara de lo comercial, criminal y correccional (Fallos, tomo 43, pág. 167): «Si bien el art. 1096, código civil, establece que la indemnización del daño causado por un delito solo puede ser demandado por acción civil, independientemente de la acción criminal



tal disposición no puede considerarse subsistente en presencia de leyes orgánicas o de procedimientos que estatuyan lo contrario, leyes cuya sanción corresponde a las provincias federales o al Congreso nacional como legislatura de la capital de la República, porque son leyes de esa especie las que determinan la competencia de los tribunales y la manera de hacer efectivos los derechos y acciones conferidos por las leyes de fondo. La distribución de la jurisdicción, dice el doctor Segovia en la nota 33 al citado art. 1096, es materia privativa de la ley de procedimientos..... No creemos que deba prohibirse la acumulación de las acciones penal y civil que nacen de un mismo delito, decían los Dres. Montes de Oca, Obarrio y Malaver, en la nota al art. 28 del código de procedimientos criminales para la provincia de Buenos Aires, como parece indicarlo el art. 1096 del Código Civil. Siendo esta materia del procedimiento, cuya legislación está reservada a las provincias, hemos creído poder apartarnos de su disposición.»

En realidad, pues, la posibilidad de acumular las dos acciones ante el juez del crimen se encuentra sancionada por las leyes que hoy rigen y está amparada por la jurisprudencia.

Con todo, la acción civil se ventila solo por excepción ante los tribunales encargados de juzgar el delito a pesar de las facilidades que comporta este sistema que, en otras épocas, ha tenido extensa aplicación (Tejedor, Curso de Derecho Criminal, 1860, tomo 2, pág. 20). Es que las disposiciones del código son tímidas, deshilvanadas y sin método. Se resienten de la diferencia de criterios a que responde ese cuerpo de leyes.

El Dr. Obarrio en el proyecto originario (art. 27) había establecido claramente: «la acción civil *puede* ser ejercida ante el mismo juez y al mismo tiempo



que la acción penal.» La Comisión de los Dres. Filemón Posse, Juan E. Barra y Onésimo Leguizamón, nombrada por el P. E. para estudiar ese proyecto, alteró el concepto al estatuir en el art. 21: «La acción civil y la penal *deben* establecerse conjuntamente. Si se entabla una sola, la otra se entiende renunciada. Esta disposición comprende también al ministerio público». El pensamiento que informa la enmienda, aparece en la nota de remisión. «Para evitar en lo posible», dice, «la multiplicidad de juicios que tanto dificulta y enardece la discusión de las causas criminales, la comisión ha creído conveniente hacer obligatorio para el acusador, el ejercicio conjunto de la acción penal y civil. si quiere gozar de sus ventajas, de modo que, si ejercita una sola, se tiene por renunciada la otra. Naciendo ambas acciones del mismo delito, la restricción impuesta a la acusación no viola ningún derecho legítimo y consulta la brevedad y sencillez del juicio» (Proyecto de código de procedimientos en materia penal, redactado por la Comisión revisora del formulado por el Dr. D. Manuel Obarrio, 1885, pág. 6).

La Comisión de la Cámara de Diputados rechazó los artículos transcritos de uno y otro proyecto, y suprimió varias disposiciones concordantes, pero dejó huellas nítidas de la idea que los informa, en los arts. 178, inc. 4, 378, 379, 392, 394, 411, 425, 495, inc. 4, 496, 567, etc., del Código vigente. Pero estas reglas han quedado dispersas y sin cohesión. Carecen de plan y de método. Son trozos aislados, desprendidos de un conjunto armónico, que solo sirven como jalones de una idea, pero que no ilustran sobre el modo de ejercitar con eficacia el mismo derecho que consagran.

Esta es, quizás, una de las deficiencias más singulares del Código, y que solo se explica, porque los preceptos son trasuntos de tres tendencias diferentes: la del Dr. Obarrio, la de la Comisión del P. E. y la de la Comisión de la Cámara de Diputados.

Para salvarla, hemos abrazado la reforma en toda su amplitud; hemos proyectado que la persona damnificada, que no haya promovido acción por reparación de perjuicios ante la jurisdicción civil, puede promoverla ante la criminal, presentándose como parte en el proceso respectivo, antes de la conclusión del sumario; que siempre que el proceso se paralice por causa legal o termine por cualquier medio que no sea absolución o condena, la acción civil no continuará ante la jurisdicción criminal, pero podrá promoverse ante la que corresponda; y que la acción civil se substanciará conjuntamente y por los mismos trámites de la acción criminal; hemos cuidado de dar al damnificado la intervención, concordante con el objetivo que lo guía, en las fases diversas del proceso; hemos procurado dar a la víctima las mayores facilidades para lograr la reparación del daño sufrido; y hemos puesto especial cuidado en evitar que, como consecuencia, la prosecución regular del proceso sufra entorpecimientos o demoras.

Queda, entonces, suprimido el querellante en los delitos públicos, borrándose así un resabio de doctrinas añejas, y queda consagrado el derecho del particular ofendido para seguir las incidencias de la causa, siempre que circunscriba su propósito al único que puede guiarlo: la reintegración de su patrimonio, la reparación del agravio moral y material recibido. Tiene, pues, todos los medios de dilucidar sus pretensiones, bajo la garantía del Estado que llena, al prestarla, una misión inexcusable, pero sin consentirle que, dando pábulo a pasiones vindicativas aparezca mezclado en el objetivo social de tutelar, con la aplicación de la pena, intereses elevados de carácter colectivo.





La prueba, en general, procura que los jueces encargados de aplicar la ley, adquieran certidumbre sobre los hechos. En el procedimiento criminal, ha existido una vieja controversia para definir las facultades del magistrado en la apreciación de los medios de convicción. Una teoría exalta la conciencia del juez, y no le pide cuenta de los medios utilizados para formar su criterio; la otra precisa esos medios, aquilata su valor respectivo, señala las modalidades que deben revestir, y determina reglas, más o menos inflexibles, de que el juez no puede separarse. Ambas han tenido sostenedores entusiastas, y han sido vigorizadas por preceptos legislativos. El sistema de las «pruebas morales», es inseparable de la institución del jurado; el sistema de las «pruebas legales», muy difundido en la edad media, se ha mantenido hasta hoy, si bien con atenuaciones, en los países de justicia togada y procedimiento escrito.

Sin embargo, a medida que la civilización avanza y se hacen más científicos los estudios de derecho penal, pierde terreno el régimen de la prueba legal, que pretende sujetar a reglas fijas el valor probatorio de las presunciones o de las declaraciones testimoniales, y lo pierde con independencia del jurado y aun aplicado a los tribunales de derecho.

El elocuente profesor español Joaquín Francisco Pacheco, en sus siempre recordadas lecciones del Ateneo de Madrid, expuso, no obstante su disidencia con la justicia popular: «Cuando la ley quiso intervenir en los juicios, y fijó minuciosamente sus fórmulas y determinó que todo se escribiese, y fué aglomerando pliegos de papel para que sirvieran de base a la sentencia, fué también natural que considerando los medios de justificación que podían presentarse, tratase de fijar de antemano su importancia y de prescribir reglas a los jueces sobre el grado de valor que



debían dar a cada una. Este fué el momento en que huyendo de la arbitrariedad se arrojaron los hombres en brazos del arreglo. El deseo de fijarlo todo, de prevenirlo todo por medio de las leyes, sin dejar nada al capricho humano, fué la idea y aun la necesidad de aquellos instantes, y así como para cada delito se señaló la pena oportuna, así se dispuso y se anunció como un axioma el valor de cada justificación... El resultado fué separar completamente la verdad legal de la verdad real, y hacerlas en la mayor parte de los casos contradictorias» (Estudios de derecho penal, 1877, pág. 358).

Ferri, cuya oposición al jurado formo uno de sus mejores capítulos de «las reformas prácticas», repudia el sistema que pretende reducir al juez, en punto a hechos, al papel mecánico de un autómatas. Escribe en este sentido: «Que el sistema de las pruebas no sea tampoco aceptable, es una cosa en absoluto incontestable. Aceptamos por ello que la fuente única de certeza para todo juez, es la convicción moral recogida en las pruebas de todas clases producidas y discutidas en el curso del procedimiento penal» (Sociología criminal, versión de Soto y Hernández, t. 2, pág. 243).

El conocido caso de Wilkes exhibe en cruda transparencia los absurdos de la prueba legal. El repertorio de jurisprudencia de Dalloz (v. «*preuve*», N.º 79), lo relata en estos términos, aduciendo las autoridades en que se apoya: «Bonnier, p. 99, presenta como el bello ideal del sistema legal la referencia que hace Dumont (nota sobre el libro 1, cap. 3, de las pruebas de Bentham) de un incidente de que fué testigo en el tribunal del Banco del Rey, en Inglaterra. «El célebre Wilkes, después de haberse sustraído por algún tiempo a la sentencia que le esperaba, se presentó de improviso a recibirla. Las formas exigían, no que vinie-



ra por sí mismo, sino que apareciera enviado por el sherif; y en ausencia de esa formalidad, los embarrasos de la justicia tuvieron ribetes de comedia. Al fin uno de los jueces le dijo: «Señor, deseo creer, en cuanto a mí, particularmente, que Vd. se encuentra ahí, porque Vd. lo afirma y porque yo lo veo; pero no hay ejemplo de que el tribunal en asunto semejante haya creído deber confiarse en sus propios ojos; por lo tanto, nada tiene que comunicar a Vd.» Practicada así, agrega Bonnier, la justicia se transforma, según la espiritual definición de Bentham, en el arte de ignorar metódicamente lo que es conocido por todo el mundo.

La prueba legal en su vieja estrictez, al menos cede terreno, y no obstante el vuelo que le dió Alemania, y no obstante la autoridad con que la defendió Mittermaier (Tratado de la prueba en materia criminal, 1857, pág. 56 y sigtes.), los inconvenientes son tantos y tan graves, que los estados modernos que la adoptan, la reducen a diario, y la circunscriben, más y más, dentro de límites estrechos.

Las ventajas reales que ofrece el jurado sobre la justicia letrada, son el procedimiento oral por una parte, y el hecho, por la otra, de que la verdad puede imponerse en todo su vigor, libremente, por la sola virtualidad de la evidencia, y sin recurrir a reglas de lógica sacramental, establecidas a priori, para medir con ellas el grado a que debe alcanzar la convicción del magistrado. Pero así como la justicia letrada no rechaza el procedimiento oral, así tampoco puede decirse que excluya la «prueba moral», la «prueba libre», la «prueba íntima», con las particularidades consiguientes a la naturaleza de las cosas.

El funcionario a quien la sociedad encarga la misión de tutelarla con la aplicación de las leyes penales, adquiere una experiencia de las circunstancias que rodean un hecho delictuoso, de las pasiones hu-



manas, de la psicología de los testigos, que le permite apreciar, con mejor criterio que 'un jurado de ocasión, la prueba que emerge de los testimonios de todo género, y que le permite discernir, con mayor certidumbre, la apariencia, de la realidad, el artificio para burlar la ley, de la verdad descarnada.

Parece, entonces, más acorde con la razón y con la lógica, conferir al juez las atribuciones y amplitud de criterio de los jurados, adoptando, sin embargo, las medidas de garantía general de publicidad, de vigilancia de los interesados y de la opinión y aun de legislación indispensables para asegurar la rectitud de los juicios. Parece, en otros términos, más acorde con la razón y con la lógica, permitir al juez que aprecie con sus medios, con su conciencia y con su ciencia, las incidencias probatorias, sin pretender estatuir pautas fijas, para resolver, de conformidad con sus mandatos, el grado exacto de la convicción adquirida con un procedimiento matemático, a la manera que se haría en presencia de una tarifa o de una tabla de logaritmos.

El Código actual no permite al juez que le merezca fe el dicho de testigos «afectados por tachas o inhabilidades legales, justificadas en forma» (art. 307, inc. 4). Los acreedores, deudores o parientes no pueden decir verdad, según esa regla. Que el testimonio de alguna persona sea sospechoso por razón de posible parcialidad, es perfectamente explicable; pero que en el juicio criminal, donde los medios de comprobación no siempre abundan, se repudie, en forma categórica y por causa de esa simple sospecha, la declaración de quien demuestra con acentos de inconfundible probidad, que se ajusta a la realidad de los hechos, es, en la teoría, poner en duda la aptitud judicial en cuestiones para las que debe tener capacidad incuestionada, y es, en la práctica, poner trabas a la acción de la justicia.



Por nuestra parte, hemos sentado la regla opuesta. Los jueces, al dictar pronunciamiento, establecemos, apreciarán, según las reglas de la sana crítica, la fuerza probatoria de las declaraciones, teniendo en cuenta las condiciones personales de los testigos, su vinculación de parentesco o negocio con el procesado, así como el grado de amistad o enemistad y demás circunstancias que puedan influir en su ánimo.

Tratando de la confesión, el Código ordena que la que revista diversas circunstancias, prolijamente expresadas, «prueba acabadamente el delito» (art. 321). Nosotros hemos suprimido el precepto. Creemos que la confesión, como la experiencia universal lo revela, puede no probar acabadamente nada y, por lo tanto, pensamos que debemos dejar librada a la rectitud y al criterio de los jueces, la apreciación exacta del valor de este medio probatorio.

Las presunciones o indicios, según el Código, hacen plena prueba cuando reúnen una serie de recaudos enumerados en el art. 358. Sin embargo, las presunciones, por la variedad infinita de sus matices, por las modalidades de que están revestidas, por la compleja combinación de circunstancias que les dan origen, escapan a toda reglamentación precisa, y deben ser apreciadas por el magistrado, sin imponerle reglas teóricas cuya eficacia real es ilusoria, y son fuentes perennes de debates y disquisiciones curiales interminables. En nuestro proyecto, la fuerza probatoria de las presunciones será apreciada por el juez, conforme a las reglas de la sana crítica.

En suma: hemos indicado los medios de prueba, rechazado algunos, sentado reglas sobre las formalidades relativas a su producción, aceptando, de ese punto de vista, lo que podría considerarse como un resto científico del antiguo sistema de la prueba legal; pero, al propio tiempo, hemos procurado supri-

mir los grillos que sujetaban la conciencia del juez, para lograr así que ella se forme, no por virtud de los mandatos de prescripciones litúrgicas, sino por la combinación de elementos subjetivos que se enlazan hasta arraigar una certidumbre. La sana crítica es, al respecto, la única regla de criterio.



..

La detención preventiva es una exigencia imperiosa del orden público; pero como afecta derechos primarios del individuo, debe restringírsela dentro de los límites señalados por la necesidad que le da origen.

No es fácil demarcar con nitidez la línea que separa el derecho a la detención preventiva y el exceso de la detención, como no es fácil, por regla general, trazarla entre los dos principios que gobiernan la vida política de los pueblos: el orden y la libertad.

Las dificultades aumentan en países jóvenes y extensos como el nuestro, habitados por una población cosmopolita, movediza y un tanto nómada, pues recorre el territorio buscando las zonas en que la demanda de brazos es más premiosa; un país donde los centros urbanos, sedes de las autoridades judiciales, están esparcidos a enormes distancias los unos de los otros, y donde los funcionarios de policía, hasta los más humildes, requieren tener prerrogativas para contener la criminalidad. La facultad de ordenar la detención preventiva, concedida con amplitud, es una fuente probable de abusos, y restringida en demasía, es causa segura de delincuencia fácil, de impunidades, de crímenes y de evasiones.

«La legislación argentina», se ha observado con verdad, «autoriza, mejor dicho, ordena la detención del autor de un delito por insignificante que éste sea.



Por más que las disposiciones legales establecen que dentro del término de veinticuatro horas el detenido debe ser puesto a disposición del juez competente, la práctica diaria ha demostrado que ese plazo es angustioso en los procesos correccionales. Generalmente, recién a las cuarenta y ocho horas, el juez toma conocimiento de la causa y, procediendo con toda rapidez, el encausado podrá obtener la libertad provisional bajo fianza, a los tres días de haber sido detenido ¿Es justo que por delitos tan leves se prive de la libertad a los acusados? El abate Mably ha escrito que las leyes son viciosas o bárbaras, si la prisión verificada para asegurarse de la persona de un ciudadano, de quien se sospecha no sea inocente, comienza por ser un verdadero castigo. Y ante el buen criterio, es una verdadera pena la detención de los sospechados, aunque sea por breve tiempo, cuando termina con una resolución que desecha los motivos que la provocaron» (José Luis Duffy, Estudios de Derecho Penal, 1904, pág. 356).

La reforma, sin embargo, se presenta llena de dificultades. En la capital de la República y aun en las ciudades todas que sirven de asiento a los juzgados federales, podría restringirse, sin peligro, la facultad policial de detención; pero las mismas reglas aplicadas a las campañas de los territorios envolverían riesgos evidentes para la seguridad pública y, sin embargo, sería anómalo ensayar doctrinas liberales en los centros urbanos, donde el temor de excesos y de abusos se aminora por la acción vigilante de la opinión pública y mantener el régimen actual en las zonas casi despobladas, donde los frenos de esa opinión no existen y donde, por consiguiente, son más exigidos los frenos de la ley.

En estas condiciones y después de estudiar los sistemas vigentes en las naciones extranjeras y los



preconizados entre nosotros, especialmente por el Dr. Jofré (Procedimiento criminal argentino, 1909, arts. 213, su nota, y 214) nos hemos decidido, consecuentes con nuestro programa de enmiendas graduales, por el régimen que proponemos, y que importa encauzar la legislación dentro de las orientaciones contemporáneas, sin llegar aún a soluciones radicales que no armonizan con nuestra idiosincrasia, con nuestros hábitos y con las peculiaridades territoriales de la nación.

Hemos suavizado los inconvenientes de la detención preventiva, tomando en consideración el delito, las garantías de la rápida intervención judicial y la persona del delincuente.

En cuanto al delito, pensamos que sólo puede dar lugar a la detención un hecho que traiga aparejada pena de privación de libertad, y hemos proyectado, además, que cuando la falta o contravención tenga pena de multa, no podrá ser privado de libertad el infractor que la satisface.

En cuanto a las garantías, hemos acortado y precisado los plazos y términos del Código, estableciendo:

1.º Que la detención de personas hecha con el fin de auxiliar a la justicia, «sólo podrá durar el tiempo absolutamente indispensable para practicarse la diligencia que la motiva y no podrá exceder de veinticuatro horas»;

2.º Que el juez podrá en cualquier momento dejar sin efecto la detención, si considera que no hay motivo para mantenerla;

3.º Que los funcionarios de policía deben «poner en conocimiento del juez competente, por telégrafo, inmediatamente después de recibidas, las denuncias o informaciones sobre delitos»;

4.º Que los jueces de la capital y los de sección que funcionen en el lugar donde se perpetró el deli-



to, deben tomar la dirección del sumario, actuando personalmente, dentro de ocho horas de recibir la comunicación referida, y que los demás jueces procederán del mismo modo, una vez que reciban el sumario de prevención; y

5.º Que concluidas las diligencias urgentes del sumario de prevención, será remitido en el día al juez competente, si éste no tuviese el asiento de su juzgado en el lugar donde se inicie el proceso, en cuyo caso, de acuerdo con las prescripciones indicadas, no debe esperar a que esas diligencias terminen.

En cuanto a la persona de los delincuentes, hemos proyectado un artículo que, aplicado con criterio, evitará, sin duda alguna, males y perjuicios graves que hoy se originan y que es indispensable prevenir. Dice así: El juez podrá disponer: 1.º Que los menores de diez y ocho años cumplan la detención o prisión preventiva en los domicilios de sus padres o tutores o en institutos de reforma oficiales o particulares; y 2.º Que las mujeres honestas o en estado de preñez, o con hijos en la edad de la lactancia, y los ancianos o enfermos, la cumplan en sus respectivos domicilios.

El desarrollo, siempre creciente, de la criminalidad infantil, es un fenómeno harto generalizado en el mundo, para que sea necesario demostrarlo en la República, donde no han repercutido aún, sino débilmente, los esfuerzos perseverantes realizados en otras partes para defender a los menores, en sus primeros pasos, contra las asechanzas y atractivos del vicio, de la vagancia, del delito.

La tutela del Estado sobre la infancia, extiende a diario los límites de su acción. El interés común que la preside, la necesidad de plasmar el carácter de los ciudadanos futuros, de alejarles tentaciones, de estimularles virtudes, ha compelido a los poderes públicos a reformar las reglas romanas inflexibles so-



bre la patria potestad, y a tender su protección franca, a quienes *se defendere nequit* en la atmósfera deletérea que los rodea.

En materia penal, la ciencia de nuestros días ha dado impulsos a una institución, cuyas raíces ahondan a medida que se comprueba su saludable eficiencia: el tribunal especial para los procesos de adolescentes. La práctica continuada en el ejercicio de idénticas funciones, les hace adquirir experiencia y facilidades y aptitudes para penetrar el espíritu de la infancia, y señalar rumbos acordes con su psicología. Chicago en 1899 tomó la iniciativa de estos tribunales en los Estados Unidos, que fué seguida por Nueva York en 1902, por Boston en 1906 y que se ha difundido hoy por la inmensa mayoría de los estados de la Unión Americana, con el aplauso de los congresos de delegados criminalistas reunidos en Cincinnati en 1909 y en Washington en 1910.

Procedimientos especiales existen, desde tiempo atrás en Holanda, en Bélgica y en Francia, tendientes a evitar a los menores las vergüenzas del juicio público, que los envilece y deprime, cuando aun hay esperanzas de enmienda, y a alejar, sobre todo, el contagio morboso de las prisiones para naturalezas en formación (Riviére, *Exposé comparatif des méthodes adoptées a l'étranger pour la défense des enfants traduits en justice*, en la *Révue pénitentiaire*, Mayo 1899, p. 766).

Mientras llegamos a estas instituciones y damos los pasos decisivos que suponen proyectos tutelares de la niñez que han ocupado la atención parlamentaria, es posible desde ya cicatrizar, en parte al menos, una llaga social.

Lombroso ha demostrado (Sull' incremento del delitto in Italia e sui mezzi per arrestarlo, 1879, págs. 43 y sigtes.) que las prisiones, cuando no impera en



ellas un régimen celular previsor, son causas fatales de delincuencia. «El primer origen de la camorra», dice, «está en las cárceles. Al principio solo de ellas se enseñoreaba; pero cuando bajo el rey Fernando, en 1830, muchos presidiarios obtuvieron libertad por indulto regio, pensaron transportar a la vida libre, el tráfico y las costumbres de las cárceles, a que se hallaban habituados (Monnier, pág. 58). Y hace pocos años la camorra elegía sus jefes entre los encarcelados de la Vicaria, y los camorristas libres no tomaban deliberaciones importantes sin haberse entendido con aquellos.....La misma palabra *maffia* es un producto de las prisiones. En Palermo, escribe un agudo observador (Locatelli), los malhechores de acción se forman en las cárceles y solo utilizan nuevos elementos cuando no pueden menos que hacerlo para empresas determinadas. La mayoría de los afiliados a la banda que robó al Monte de Piedad de Palermo provenía de las prisiones».

La cárcel de detenidos, que no llena las condiciones de construcción impuestas por un sistema penitenciario racional, es siempre un peligro. Las malas pasiones de delinquentes puestos en contacto fermentan, por decirlo así, y forman una atmósfera malsana, en que fácilmente se inficionan los que se ven arrastrados a respirarla impelidos por circunstancias ocasionales. Y si esto es verdad en general, el peligro adquiere contornos de gravedad cuando se cierne sobre un adolescente, cuyo espíritu no está aún formado y se amolda, sin gran esfuerzo, al medio y al ambiente.

Para la infancia, las prisiones pueden ser, entonces, una escuela de depravación y de delito; la sociedad, interesada en desviar tendencias criminosas y en hacer de sus miembros elementos útiles para sus progresos, debe procurar que las inflexibilidades de la



ley no compelan al magistrado, a pretexto del orden y de la seguridad pública del momento, a conspirar contra el orden y la seguridad pública del futuro, exacerbando posibles inclinaciones morbosas que, cortadas a tiempo, hubieran quizás desaparecido del todo. Es necesario que, siquiera tratándose de los menores de diez y ocho años, pueda el juez aquilatar sus condiciones y decidir si es preferible dejarlos durante el proceso en el hogar paterno o en establecimientos adecuados, a pesar de los temores de una evasión, o si conviene más encerrarlos en una cárcel, a pesar de los temores de contagios morales.

Razones análogas explican los demás casos del artículo. La recta administración de la justicia no sufre porque el magistrado disponga, cuando su criterio no le haga entrever riesgos y tropiezos, que las mujeres honestas o en estado de preñez o con hijos en la edad de la lactancia y los ancianos y enfermos cumplan la detención provisional en sus domicilios respectivos. En cambio, la falta de atribuciones del magistrado para dictar estas medidas, lo coloca en el dilema de adoptarlas, no obstante la ley, lo que priva a sus actos de autoridad moral, o de rehusarse a ellas, no obstante exigencias imperiosas, lo que redundará en perjuicio de la judicatura, cuyas decisiones serían, a veces, de una inflexibilidad absurda y hasta despótica.

*
* *

Para mitigar más, todavía, los inconvenientes aparejados a la detención preventiva, y aun a la prisión, hemos creído indispensable dictar principios más liberales que los del Código en vigor, en materia de libertad provisional, procurando así disminuir el número de los encarcelados y los agravios y los perjuicios

inútiles consiguientes a medidas que puedan resultar injustificadas.

El criterio de los códigos de instrucción criminal, para otorgar la libertad provisoria, varía dentro de límites muy distantes. El de la capital (art. 376) sienta esta regla: «Cuando el hecho que motive la prisión del procesado tenga sólo pena pecuniaria o corporal cuyo «*máximum*» no exceda de dos años de prisión, o una y otra conjuntamente, podrá decretarse su libertad provisoria, siempre que preste alguna de las cauciones determinadas en el presente título.» La ley 3508, de 22 de septiembre de 1897, al cambiar la palabra «*maximum*» del texto transcrito por la palabra «*promedio*», extendió los casos de libertad provisional. Con todo, la disposición queda muy atrás de la del código francés, por ejemplo, cuyo art. 113 establece: «En toda materia, el juez de instrucción podrá, a petición del inculcado y con las conclusiones del procurador de la república, ordenar que el inculcado sea puesto provisoriamente en libertad, con cargo, para éste, de volverse a presentar a todos los actos del procedimiento y para la ejecución del juicio así que sea requerido. En materia correccional, la libertad corresponde de pleno derecho, cinco días después del interrogatorio, en favor del prevenido domiciliado, cuando el *máximum* de la pena pronunciada por la ley sea inferior a dos años de prisión.» Queda también atrás del código italiano de 1913, que establece, en su art. 397: «En los delitos por los cuales la ley autoriza el mandato de captura y que no comporten la pena de presidio, puede concederse al imputado la libertad provisional.»

Estas diferencias se acentúan si se consultan otros códigos extranjeros; pero, en realidad, se nota una relativa uniformidad de principios en cuanto a decidir que la libertad provisional es un derecho perfecto





del procesado, que puede ejercitar, sujetándose a las formalidades establecidas, cuando el delito reviste un carácter correccional. En las demás eventualidades, la libertad depende del juez; él la concede o no según las circunstancias; y es, por lo que hace a la extensión de sus atribuciones, que las leyes de los distintos países varían y se diversifican. Puede afirmarse, sin embargo, que la amplia latitud del código francés no ha sido generalmente seguida, y que Bélgica, que lo adoptó, ha sentido después la necesidad de enmendarlo en este punto. «La libertad provisoria», ha estado en el art. 113, «no podrá acordarse jamás al prevenido cuando el título de la acusación se refiere a una pena afflictiva o infamante».

El arbitrarismo judicial para dictar la libertad provisional tratándose de delitos graves sólo puede ser útil para casos excepcionales; mientras que, en el curso ordinario de la instrucción criminal, no se percibe su objeto.

Si a la lenidad característica de la raza latina en la aplicación de la pena, se agrega esta posibilidad de la libertad provisional facultativa, acordada en previsión de casos anómalos y extraordinarios, se llega irremisiblemente al ejercicio excesivo de esa atribución que no ha dado los resultados cifrados en ella.

El punto trascendental en esta materia no es tanto la concesión potestativa de la libertad, en circunstancias de excepción, las cuales por lo demás, hemos tenido en debida cuenta, según lo hemos expuesto en el párrafo anterior. El punto trascendental es la libertad provisional en los casos comunes, que alcance a todos, que beneficie a todos y que morijere, no con declaraciones abstractas, sino con resoluciones concretas, positivas, de adopción constante, los males de la detención o de la prisión preventiva.

Dentro de esta tendencia, hemos proyectado una



legislación prudente que, sin embargo de facilitar la obtención de la libertad, no entraña peligros de excesos ni de abusos y armoniza con nuestro estado social, no tan sólo en la ciudad de Buenos Aires sino también en todos los centros donde el proyectado código tendría vigencia si el P. E. y el H. Congreso le prestaran su aprobación.

Hacemos diferencia, desde luego, entre la libertad provisional simple y la libertad provisional bajo caución.

La primera *puede* decretarla el juez, de oficio o a solicitud de parte, cuando la pena correspondiente al delito cometido o imputado no exceda de un año de privación de libertad y cuando el inculcado no fuese reincidente o notoriamente inmoral, etc. Si el magistrado no ejercita esta potestad, el procesado tiene expedito su derecho a la libertad bajo caución. Sin embargo, la libertad provisional simple se decretará inexcusablemente, sin recaudos ni limitaciones, cualquiera que sea la entidad del delito y la condición del reo, cuando se hubiese sobreseído en la causa o el procesado fuese absuelto en primera instancia.

Es de suponer que, al poner en acción la prerrogativa acordada a los jueces, se convertirá en regla ordinaria la libertad provisional simple, en los casos en que procede, y que solo se denegará respecto de procesados cuyos antecedentes o medios de vivir no ofrezcan garantías eficaces de comparecer, cuando se les cite, ante los estrados del tribunal. Los jueces tendrán, sin duda, presente una observación de López Moreno (Principios fundamentales del procedimiento civil y criminal, tomo II, pág. 606), reproducida por Duffy (obra citada pág. 357). «La fuga del culpable», dice, supone privaciones terribles, sacrificios extraordinarios: la ausencia del lugar donde habitualmente se ha vivido; del centro donde se cultivaron las rela-



ciones todas de la vida, donde radican acaso los bienes poseídos; quizás el voluntario extrañamiento de la patria; la pérdida de la tranquilidad por el continuo temor de ser perseguido y capturado; infinidad de contratiempos, dificultades y angustias, que en la mayoría de los casos exceden con mucho a la gravedad de la pena que hubiera de sufrirse y a los inconvenientes que son su natural consecuencia».

La libertad bajo caución se concederá, a solicitud de parte, cuando, por razón del hecho que se impute al procesado, le corresponda pena de privación de libertad que no exceda de tres años, cualesquiera que sean las otras accesorias. Hemos aceptado las excepciones del código, pero las hemos aclarado y completado, estatuyendo que no corresponde la libertad bajo caución cuando el procesado sea reincidente, siempre que la condena anterior no haya sido por culpa o negligencia y cuando, con esta misma salvedad, medie reiteración o concurrencia de delitos; y que el juez podrá también negarla cuando el procesado tuviere otra causa pendiente o cuando, en un juicio anterior, hubiese recaído auto de sobreseimiento provisional.

Abrigamos la esperanza de que, con la aplicación de estos principios, se lograrán suavizar las asperezas que la experiencia ha demostrado en la legislación, y se afirmarán las prerrogativas y los derechos del individuo, en el uso de sus garantías primarias, en frente a las prerrogativas y los derechos de la colectividad, en el uso de los medios indispensables para mantener su integridad y el orden público.

* *

Los códigos de todas las naciones señalan una proporción entre el delito y la pena. Han aceptado la



vieja máxima *pena debet commensurari delicto* que Rossi repite en estos términos: «la medida de la pena no debe exceder la medida del delito» (Traité de Droit Pénal, 1863, tomo 2, pág. 186.)

La represión, sin embargo, lo hemos recordado antes, no es el castigo de una culpa sino, simplemente, un medio de defensa social. Procura prevenir los males conexos con la infracción y reviste el triple aspecto que los jurisconsultos alemanes le atribuyen. Entraña una prevención *especial*, contra la posible repetición de ataques de parte del mismo malhechor; una prevención *general* contra la tendencia a imitar el delito, por quienes tengan propensiones a delinquir; y una prevención *indirecta*, como estímulo a los ciudadanos honestos y manera de avivar su aversión al crimen.

El autor del delito, con su acto injusto y dañoso, turba directamente el sentimiento de la seguridad pública y hace nacer en la sociedad el derecho de evitar un estado de cosas contrario a su bienestar, el cual consiste, a este respecto, en su tranquilidad, libre de peligros. El delincuente es, pues, un individuo de quien la sociedad tiene un explicable temor (Poletti, Il sentimento e la persona giuridica nella scienza del diritto penale, 1887, pág. 94).

Partiendo de estas bases, Garofalo ha desenvuelto su conocido sistema de la temibilidad. «Lo que importa medir,» escribe, «no es, por consiguiente, tanto la intensidad del impulso criminoso cuanto la fuerza de resistencia a tal impulso, es decir, en otros términos, el sentido moral del delincuente: este análisis hará conocer lo que de él presuntivamente se debe temer. Si ello es posible, se habrá dado un gran paso en la solución del problema. No quedaría más que adaptar el medio de prevención a la especie de temibilidad» (Criminologia, 1885, pág. 247).



La tesis no se ha abierto camino en las legislaciones positivas de los pueblos, pero tanto ella como otras análogas han intensificado, en todas las escuelas, el estudio del delincuente mismo, de cuyas condiciones no es dable prescindir en la aplicación de la pena.

Hoy, en los procesos que llaman la atención pública, se aquilata la vida pasada del delincuente, se analizan las enfermedades psíquicas que lo aquejan, se indaga su filiación y el carácter de sus padres, se pone en evidencia el medio en que ha nacido y se ha desarrollado, se comprueban las circunstancias personales y reales que lo han impulsado a cometer el crimen. Pero estas medidas, aunque aconsejadas por la ciencia, tienden más, en los casos excepcionales en que se adoptan, a dar ribetes romancescos a una causa que a satisfacer exigencias de la ley. En la mayoría de los procesos se prescinde de muchos de esos pormenores que son, empero, de trascendencia suma, y el silencio de las prescripciones escritas es tan anómalo, que es posible, en el derecho argentino, que un tribunal aplique al reo la pena capital, pronuncie contra él la sentencia extrema, que si bien conduce a la eliminación absoluta de un malhechor, arrebatada, también, la existencia a un hombre, sin haberlo tenido jamás delante de sí, ni haber conocido, por ciencia propia no ya su carácter moral pero, ni siquiera, su apariencia física.

De acuerdo con estas premisas, hemos propuesto que todo procesado será sometido a examen médico para comprobar el estado de sus facultades y que, mientras no exista en los establecimientos de detención número suficiente de médicos, solo será obligatorio el examen, cuando se trate de determinar el grado de discernimiento de los menores, de acuerdo con el código penal o de los mayores de se-



tenta años, cuando los procesados ofrezcan indicios de alteración en sus facultades mentales, cuando se trate de sordomudos, o cuando lo solicitase el defensor o el ministerio fiscal.

Hemos proyectado, también, dentro del mismo criterio, la presencia obligatoria del reo en la vista de la causa, en primera instancia, y la necesidad del tribunal de apelación de escucharlo en los casos en que, no proceder así, sería, en realidad, un error fundamental de práctica judicial.

Son éstas, indispensables garantías del procesado, quien, no por serlo, pierde las prerrogativas que la Constitución nacional y la civilización del mundo acuerdan al hombre y al ciudadano. Encierra, sin duda, un concepto científico la reflexión de Hélie, que considera a la ley de procedimiento criminal como el complemento necesario de las libertades públicas (*Traité de l'instruction criminelle*, 1858, t. 1, pág. 9).

••

Una de las mayores deficiencias de nuestra instrucción penal es la morosidad desesperante de los procesos, resultado fatal de hábitos y costumbres tradicionales, más que de fallas verdaderas del código.

No es fácil, sin duda, hallar el justo medio entre el principio que exige celeridad para que la represión siga inmediatamente al delito y alcance la pena todo el poder ejemplar que a ella se atribuye, por una parte y, por la otra, el principio que demanda amplitud de trámites para no sofocar, con detalles procesales, el derecho primordial de la defensa.

Aguilera de Paz (Comentarios a la ley española de enjuiciamiento criminal, 1912, t. 1, pág. 8) escribe sobre este punto: «Al hacerse la reforma hubieron de solicitar la preferencia de sus autores las dos tenden-



cias ya indicadas: la de la brevedad en el procedimiento como medio de conseguir la más pronta y eficaz ejemplaridad de la pena, y la escuela contraria que entendía, como dijo Bonnier, que sólo un espíritu de exagerada reacción contra la complicación de las formas procesales podía adoptar por divisa la regla repetidísima, como norma recomendable en la organización de los juicios, «de celeridad en la marcha y economía en los gastos», alegando en su impugnación que, si ese fuera el tipo de un buen sistema procesal, la justicia grosera de los pueblos bárbaros sería la mejor de todas».

Estas disquisiciones son más teóricas que prácticas en nuestro medio, donde la morosidad del proceso no sólo excede las exigencias de la defensa más amplia, sino que ha llegado, a veces, a extremos inconciliables con los respetos debidos a la justicia. Esos procesos que se complican y eslabonan, que pasan de juez a juez y de fiscal a fiscal, que hacen desfilar una serie de peritos divididos en sus dictámenes que se arrastran pesadamente durante meses y años, son, en realidad, inconciliables con los caracteres de la pena y los fundamentos filosóficos que la apoyan.

Para evitar su repetición, dentro de lo posible, hemos proyectado multitud de reformas, distribuidas, puede decirse, en todo el proceso y de algunas al menos, esperamos resultados positivos en este punto fundamental.

La supresión del querellante en los delitos públicos, al eliminar tropiezos, plazos, gestiones y recursos conexos con su intervención, contribuirá, de un modo eficaz, a acelerar la marcha de las causas.

El código vigente no computa, dentro de los plazos para terminar el sumario, «las demoras por articulaciones maliciosas del procesado o por diligencia-

miento de oficios o exhortos, cuando el retardo fuese independiente de la voluntad del juzgado» (art. 442). Las articulaciones maliciosas, los oficios y los exhortos se convierten así, con la tolerancia de la ley, en un medio fatal, inevitable, de prolongar los procesos, malgrado la voluntad de los jueces y a pesar de su empeño de presidir, con diligencia, el desarrollo de la instrucción.

Para evitar los males consiguientes a este precepto, que importa una barrera para magistrados activos y puede servir de escudo a los poco diligentes, hemos establecido que «la clausura del sumario tendrá también lugar, aun cuando haya diligencias pendientes, siempre que el juez no las repute indispensables para los fines de la instrucción o se trate de medidas relativas a la reparación civil, que puedan solicitarse en el plenario».

Las reformas adoptadas como consecuencia del procedimiento oral, acelerarán también el juicio. El mismo auto de clausura del sumario dispondrá que la causa pase en vista al ministerio fiscal y con la acusación queda en estado de plenario, recibándose a prueba sin más substanciación.

Hemos procurado proveer a las distintas eventualidades e hipótesis del proceso, pero sin apartarnos del propósito de abreviar los trámites. La prueba rendida en un solo día, el de la vista de la causa, al par que resuelve los trascendentales problemas a que esa institución responde en primer término, y que hemos tenido oportunidad de expresar, servirá, sin duda alguna, para cortar muchas de las dilaciones originadas por el sistema, ya arcaico, del procedimiento escrito. Y terminada la prueba, «se concederá la palabra al fiscal o acusador o damnificado en su caso, para que aleguen sobre el mérito de aquella y al defensor para que formule la defensa; mientras no ha-





ya taquígrafos se permitirá al defensor que presente dentro de tercero día un memorial que la contenga; en la misma audiencia se citará a las partes para sentencia, sin perjuicio de las diligencias que pueda ordenar el juez para mejor proveer».

Entendemos que así perderá nuestro procedimiento penal ese aspecto letárgico que forma uno de los rasgos más salientes de su fisonomía actual.

Siempre con el propósito de acelerar los trámites, algunos códigos han señalado un término máximo dentro del cual deben desenvolverse los procesos. El Dr. Jofré, en este orden de ideas, ha proyectado en su art. 51: «Las causas criminales seguidas contra algún detenido quedarán terminadas a más tardar: 1. A los cinco meses en primera instancia; 2. A los cuatro en segunda. Para las causas correccionales se reduce a la mitad los términos fijados».

A pesar de que hemos tenido la preocupación constante de imprimir a los trámites toda la rapidez compatible con la correcta administración de la justicia, dentro de nuestro medio y de nuestros hábitos judiciales, no hemos incorporado a nuestro proyecto un precepto análogo.

Entraña, en verdad una aspiración y un propósito sano, pero es inadecuado al objeto. En primer lugar, del propio punto de vista teórico es forzoso admitir la existencia posible de casos en que sea indispensable prorrogar, por razón de diligencias pesadas o que deban llenarse en el extranjero, los plazos establecidos. Las excepciones abundan y se imponen; por entre sus resquicios se escapan todos los procesos demorados, y la demora adquiere, de esta manera, contornos de legalidad. En segundo lugar, un plazo general no obliga a un determinado funcionario. Si él ha transcurrido, en su mayor extensión, durante la primera instancia, no podrá exigirse a las cámaras de



apelación que acorten los términos indispensables señalados en la ley para cada una de las incidencias procesales. Sería necesario, entonces, descomponer el plazo, subdividirlo, para proporcionarlo a las diversas etapas de la causa, y es eso, precisamente, lo que hacen todos los códigos que rechazan el plazo de conjunto.

La experiencia nacional demuestra que el precepto ha sido de una desesperante inutilidad. La comisión de legislación de la cámara de diputados lo agregó al código proyectado por el Dr. Obarrio, como artículo final: «Toda causa deberá terminarse completamente», dice, «en el término de dos años, no computándose las demoras a que se refiere el art. 442». Las causas se han retardado, sin embargo, más de los dos años, computándose o no tales demoras. La cláusula absolutamente innocua ofrece el inconveniente serio de todas las que no se cumplen y que restan, por ese motivo, autoridad a las leyes y a los códigos.

Con arreglo a estas ideas, hemos dado mayor fuerza al recurso de retardada justicia, poniendo al alcance de los interesados un medio práctico, eficaz, para obtener la solución de las causas en 1.^a Instancia, que, es en realidad, donde la práctica revela que se producen las mayores dilaciones. Los jueces que sean morosos en el despacho incurrirán en serias responsabilidades pudiendo llegar la reincidencia a comprometer la estabilidad de su posición oficial.

*
* *

Hemos proyectado modificaciones, por de pronto limitadas, pero orientadas siempre en un objetivo de enmienda substancial, en el libro IV del Código, que se ocupa de los juicios y procedimientos especiales.



El proceso correccional ha sido legislado en forma que no responde a los propósitos alimentados al instituirlo. Se ha querido una justicia rápida para delitos menores y se ha creado, en realidad, un complicado engranaje de juicios y audiencias encadenadas, con una trabazón, a veces inextricable, de diligencias inútiles y superpuestas. No se ha logrado la celeridad de los trámites y se han aminorado, sin duda alguna, las garantías indispensables de la defensa.

El Dr. Rivarola, adversario decidido de la justicia correccional, ha podido aducir en su contra, además de las consideraciones teóricas que desenvuelve (La justicia en lo criminal, pág. 101 y siguientes), la circunstancia práctica de la deficiencia de nuestra legislación, que ha ideado un proceso *sui géneris*, cuyas bases son distintas y hasta opuestas a las sentadas para los procesos criminales.

Por nuestra parte, hemos mantenido el juicio correccional pero, al mismo tiempo, lo hemos sujetado a reglas fundamentalmente análogas a las de los otros juicios, para que el Código se inspire, en su integridad, en idénticas tendencias.

Hemos mantenido el juicio correccional, no obstante las razones invocadas por el Dr. Rivarola para sustentar su supresión, porque, según hemos tenido oportunidad de expresarlo, nos ha sido forzoso partir de la actual organización de la judicatura, cuya enmienda no ha entrado en las miras del P. Ejecutivo al designarnos en comisión encargada de estudiar los códigos de forma.

Por lo demás, el juicio correccional, por sí mismo, no ha producido dificultades prácticas en los países donde existe. En Francia tiene un viejo abolengo. Data de la ley de 19 de Julio de 1791 y se ha conservado al través de las mil vicisitudes ocurridas en la vida agitada de ese pueblo. El ejemplo francés ha si-



do seguido en muchos países del continente y aun puede decirse que en Inglaterra, si bien con fisonomía distinta, existe el juicio correccional. Todo acusado, cualquiera que sea la infracción, es sometido a un tribunal de jurisdicción sumaria. Esta corte, enseña Franqueville (*Le système judiciaire de la Grande Bretagne*, t. 2, pág. 285) «desempeña el papel de tamiz inicial: juzga los casos menos graves, es decir los más numerosos, envía a las sesiones trimestrales los de una gravedad media y a las cortes de asises los que parecen completamente graves.»

Entre nosotros la justicia correccional se ha difundido por el país. «Ella fué creada», dice el Dr. Jofré, «en la provincia de Buenos Aires por ley de Octubre 5 de 1857 y, durante el largo tiempo que ha vivido, ha prestado servicios que la hacen acreedora a que perdure. También existe un procedimiento especial para los delitos correccionales en los códigos de Salta, art. 524 y sigtes; de Santiago del Estero, arts. 403 y sigtes; de Jujuy, arts. 396 a 412; de Entre Ríos, arts. 795 a 812; de Corrientes, arts. 574 a 593; de la capital de la república, art. 569 y de Buenos Aires, art. 751».

Los ataques dirigidos contra la justicia correccional pierden gran parte de su eficacia si, al establecer la diferencia entre ella y la justicia criminal, se sancionan procedimientos análogos para ambas y se cuida de no aminorar las garantías esenciales de la defensa y de no dejar de lado los recaudos con que se procura asegurar la rectitud del criterio judicial. Con estas normas directrices, los inconvenientes disminuyen y aparecen solo las ventajas reales que resultan de dividir el trabajo, de crear especialidades entre los funcionarios encargados de administrar justicia, de lograr la celeridad relativa de las actuaciones tratándose de delitos menores, que deben resol-



verse con prontitud y en la inmensa mayoría de los cuales el delincuente obtiene, con fianza o sin ella, la libertad provisional.

Hemos proyectado que el juicio correccional se substancie por los mismos trámites del juicio criminal, con las modificaciones, limitadas principalmente a hacer más breves los plazos, que el título respectivo señala.

Suprimimos, de ese modo la falacia del procedimiento actuado que hoy existe, inaplicable, si se mantiene con estrictez, y fuente, por lo tanto, de simulaciones múltiples; respetamos hábitos arraigados sin graves tropiezos; no relacionamos la reforma del código procesal con otra reforma de la ley orgánica de los tribunales; damos orientación uniforme a todos los juicios; salvamos incongruencias indiscutibles y, al propio tiempo, evitamos que a infractores de menor cuantía, reos de delitos sencillos, fácilmente conocidos y aquilatados, se les sujete a términos y plazos que han tenido en cuenta las complejidades consiguientes a los delitos de mayor gravedad.

*
* *

La ciencia jurídica argentina no ha logrado aún proteger el honor, la fama, la reputación de las personas contra los embates de la pasión. Los delitos de calumnia e injuria se difunden e intensifican, exacerbados por diferencias políticas o intereses privados en pugna y, sin embargo, la garantía del patrimonio moral es débil, vacilante, meticulosa.

La filosofía penal condena con dureza semejante estado de cosas que amengua hasta la libertad individual. No todos se sienten con la fortaleza de espíritu necesaria para arrostrar las consecuencias de una difamación alevosa, que no es dable contrarrestar eficazmente con medios legales. La deficiencia jurídica,



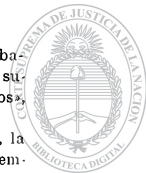
a tal respeto, conduce a dar solución a las contiendas nacidas de libelos por expedientes reñidos con la civilización del siglo, como el duelo, que no ha sido dado desterrar de los hábitos de las sociedades latinas. Pero, en verdad, si falta la defensa social contra el escándalo, la reacción personal del ofendido es la única valla opuesta a los desbordes de quienes recurren al denuesto para dar expansión a sentimientos de venganza y aun para procurarse medios de subsistencia con la explotación de bajos sentimientos de algunas gentes.

Los procesos de calumnias o injurias en los tribunales argentinos se arrastran pesadamente y terminan, por regla general, con resoluciones indecisas. La ley de forma favorece la lentitud de los trámites; la ley de fondo dificulta la aplicación de la pena.

El código de procedimientos deja tantos resquicios, que las maniobras y habilidades de los reos, empeñados en torcer el curso de la justicia, encuentran en ellos fáciles instrumentos para demorar la litis y agotar la paciencia de las autoridades y las partes.

Y cuando, tras la larga travesía, llega la contienda al estado de sentencia, la pena aparece, a los ojos mismos de quienes deben aplicarla, exagerada y poco ejemplar.

Existe, tal vez, un consenso tácito sobre la falta de equidad que envolvería aplicar hasta tres años de penitenciaría, como lo autoriza la ley N.º 4182, a quien imputa falsamente a otro la comisión de un delito, y, como consecuencia, se ha venido formando un criterio judicial adverso a la condenación del reo. Deficiencias legislativas en la definición de las infracciones han cooperado, igualmente, a que se afiance esa jurisprudencia. Los interesados, por su parte, en el anhelo de escapar a las sanciones legales, aparentan explicaciones, analizan las locuciones injuriosas, pro-



curan darles un carácter inofensivo de inocencia, barren silogismos, dilemas y entinemas, y llegan a sustituir tanto que consiguen «dividir un pelo en dos», según la gráfica frase sajona.

Al favor de las obscuridades de los códigos, la dialéctica se abre paso y se recurre a ella para atemperar el rigorismo legal, porque se supone menos agravante a los preceptos de justicia, optar por eludir toda pena antes que aplicar la que se reputa excesiva e inadecuada para la naturaleza de la infracción.

No nos ha sido posible, dentro de los límites de un código de procedimientos, salvar estos obstáculos contra la protección eficiente de la personalidad moral; hubiéramos tenido que invadir la esfera propia del código penal, cuya reforma está a estudio de los poderes públicos.

Con todo, en nuestra acción circumscripita, hemos procurado trazar las reglas de los procesos de calumnia e injuria en forma de cortar los artificios empleados para prolongar indefinidamente la duración de los juicios. Siquiera de este punto de vista, habremos contribuido a que se dé un paso hacia adelante en esta materia, de modo que mañana, cuando la ley de fondo llene los vacíos actuales y se protejan las reputaciones, se hallará expedita la vía procesal, exenta ya de las tortuosas enérucijadas de las actuales tramitaciones.

*
* *

Bajo el rubro «del modo de proceder en los casos de detención, arresto o prisión ilegal de personas», el código contiene disposiciones concernientes al auto de *habeas corpus*, tomadas, «con ligeras variantes», según lo ha expresado su autor, «del proyecto formulado por Livingstone para el estado de Luisiana y de la ley respectiva del estado de Nueva York».

Los preceptos revelan, en realidad, su origen. Tienen fisonomía sajona y su redacción se resiente de la ampulosidad y tautología peculiar a las leyes inglesas o norteamericanas.

Nos hemos preocupado, en consecuencia, de aclarar y sintetizar los términos, para armonizarlos con el estilo y el espíritu de la legislación nacional y de suprimir artículos o incisos que han sido causa de confusiones y de interpretaciones equivocadas.

El recurso de amparo de libertad es el medio práctico de hacer efectiva la garantía constitucional según la cual el arresto debe ser hecho únicamente en virtud de orden escrita de autoridad competente: es el *habeas corpus ad subjiciendum* de la clasificación de Blackstone.

Hemos aceptado la limitación que, por regla general, se establece a su respecto y hemos dicho que se otorga «contra toda orden o procedimiento de un funcionario que restrinja, *sin facultades*, la libertad de una persona». Surge, entonces, con toda evidencia que el recurso no procede cuando la orden de arresto emana de quien tiene competencia para dictarla, y no es, por lo tanto, necesario repetirlo, como lo hace el código, agregando aún que los magistrados a quienes se atribuye su conocimiento no entenderán de él cuando la orden de detención, arresto o prisión emanase de un superior en el orden judicial, o cuando fuese expedida por alguno de los jueces correccionales o del crimen de la capital en ejercicio de sus funciones.

Sentada la regla, en los términos que lo hemos hecho, de conformidad—lo repetimos—con las doctrinas corrientes en la materia, las consecuencias que de ella derivan aparecen sin esfuerzo. Es en esa virtud que hemos conceptuado igualmente superfluo hacer enumeraciones casuistas, más propias de la juris-





prudencia que de la ley, ya que, con la definición adoptada, se sancionan por implicancia las resoluciones de la Suprema Corte disponiendo que la prerrogativa no es extensiva a los militares presos como bomberos del enemigo (tomo 9, pág. 529), ni a los militares prisioneros de guerra (tomo 9, pág. 531), ni a los desertores (tomo 23, pág. 452), ni a los dementes (tomo 35, pág. 92), ni a los enganchados (tomo 55, pág. 362), ni a los oficiales de marina arrestados por orden del jefe del estado mayor de la armada (tomo 48, pág. 92), ni a los presos por orden de un comandante de buque con bandera extranjera, por delitos cometidos en alta mar (tomo 62, pág. 60), como se sanciona la improcedencia en todas las hipótesis y circunstancias en que la Constitución o las leyes otorgan, a la autoridad que dicta el arresto, las facultades indispensables a ese fin.

Nuestra legislación, siguiendo a la de Estados Unidos, ha extendido el *hábeas corpus* a algunos casos que no hacen a la naturaleza misma del recurso, pero que obligan a esta solución, en mérito de consideraciones políticas nacidas de nuestro régimen de gobierno. En este orden de ideas, hemos establecido que procede igualmente el recurso de amparo, cuando una autoridad provincial, competente o no para dictar órdenes de arresto, haya restringido la libertad de personas que gocen de inmunidades o que hayan realizado el acto que se les incrimina cumpliendo una comisión especial o en carácter de empleados del gobierno federal.

No es para eventualidades de este género que se ha creado el *hábeas corpus*, pero nada impide que se le utilice como medio de seguridad en los casos indicados. Lo hacía ya el art. 20 de la ley n.º 48, de 14 de septiembre de 1863, y lo ha incorporado a sus mandatos el código vigente (art. 617).



La experiencia nacional ha demostrado que las pasiones suscitadas por nuestras luchas partidistas hacían prudente la sanción de esa regla que, también en los Estados Unidos, ha protegido a los miembros de los poderes centrales contra los ataques, a veces violentos, de la política local, dirigidos desde los estrados de las cortes de justicia. Huelga recordar, como fundamento de la aplicación extensiva del recurso, la prisión hecha en Córdoba del senador suplente don Luis Cáceres, que cesó por efecto de un *habeas corpus* (Fallos de la Suprema Corte, tomo 1, pág. 228); la del senador por Mendoza General Ortega, también liberado por el mismo procedimiento (tomo 41, pág. 405); la del senador por Santiago del Estero, don Pedro García, con idéntico resultado (tomo 59, pág. 435), etc.

La ley de 1863 acordaba competencia en el recurso de amparo de libertad a «la Corte Suprema o los jueces de sección», según lo estatuye a la letra el art. 20. Como consecuencia, se entendió, durante un largo transcurso de tiempo, que la Corte tenía jurisdicción originaria en las causas de *habeas corpus*. Así sucedió, por ejemplo, en las iniciadas por los Sres. Juan V. Montaña (tomo 9, pág. 382), Diógenes Mantero (tomo 9, pág. 528), Pedro Romero (tomo 9, pág. 529), José M. Crispín (tomo 9, pág. 531), Coronel Patricio Rodríguez (tomo 10, pág. 55), José J. Mantero (tomo 12, pág. 394), Lino de la Torre (tomo 19, págs. 191 y 231), etc.

En 1885, el Senado dictó orden de prisión contra don Eliseo Acevedo, quien inmediata y directamente interpuso el recurso ante la Corte Suprema. El tribunal desconoció, en esa circunstancia, las facultades de las cámaras parlamentarias para castigar por desacato, pero uno de los ministros, el Dr. Frías, expresó su opinión de que la Corte solo podía conocer originariamente en los casos taxativamente enumerados en el art. 101 de la Constitución y, como no se halla com-



prendido en él el recurso de amparo, carecía de facultades para pronunciarse sobre el punto, salvo que le llegara por vía de apelación (tomo 28, págs. 406 y 463).

Poco tiempo después, el 4 de septiembre de 1887, la Cámara de Diputados dictó orden de prisión contra don Eduardo Sojo, quien, siguiendo el ejemplo de Acevedo, compareció directamente ante la Corte interponiendo el recurso. En esta oportunidad el debate se hizo con toda amplitud y primó, por tres votos contra dos, la teoría que niega al alto tribunal jurisdicción originaria para entender del *habeas corpus*, no obstante lo determinado por la ley de 1863 (tomo 32, pág. 120).

El código de procedimientos, promulgado en 1888, prescribió que los jueces federales, del crimen de la capital y los de los territorios conocieran de las órdenes de detención emanadas de autoridades incompetentes, pero, entre las excepciones que enumera (art. 618), figura la relativa a la hipótesis de que la orden «emane de alguna de las cámaras del Congreso».

La ley, en consecuencia, priva a los jueces de primera instancia del conocimiento del recurso en estos casos, y la Corte, no obstante este precepto y de conformidad a lo dispuesto en el art. 101 de la Constitución, ha persistido, con razón sobrada a nuestro juicio, en considerar que carece de jurisdicción originaria (tomo 40, pág. 386; tomo 44, pág. 375; tomo 62, pág. 239).

Estas incidencias, de orden secundario, originan, en nuestra legislación, un verdadero vacío. El viejo apotegma de las garantías individuales «donde hay un mal hay un remedio» (*where there is a wrong there is a remedy*) sufre una eclipse en este caso, ya que, por falta de concordancia en los términos legales, se ha dejado sin tribunal competente un recurso que debe ser fácil y corriente, cualquiera que sea la autoridad que, sin tener facultades para hacerlo, haya restringido la libertad de las personas.



No es dable imaginar, por otra parte, que por medios indirectos y combinaciones de trabas procesales haya querido resolverse la ardua cuestión de los privilegios parlamentarios, que escapa, por su propia naturaleza, a la acción de un código de procedimientos.

La cláusula del art. 618 es, pues, un inconveniente de trámite, que es indispensable suprimir para que, cada vez que la cuestión se origine, pueda debatirse ante los jueces, sin estos tropiezos de detalle, que enervan, a veces, las instituciones mejor concebidas.

Hemos suprimido la excepción del código actual respecto a las órdenes de arresto impartidas por las ramas del parlamento. De esa suerte, el camino de la posible reparación queda expedito, para ser seguido ante la judicatura por sus trámites especiales y en todas las instancias.

Si primara la tesis según lo cual las cámaras, como consecuencia de privilegios implícitos, indispensables, para ejercer sus funciones y mantener su decoro y su prestigio, tienen atribuciones suficientes para decretar penas contra quienes violan sus prerrogativas, el recurso carecerá de significado porque él tiene por base la incompetencia de la autoridad que restringe la libertad de las personas.

Si primara la tesis opuesta; si se decide que prácticas extranjeras no pueden sobreponerse a preceptos nacionales, que privilegios implícitos e hipotéticos de las cámaras no destruyen privilegios explícitos y reales de los habitantes; que una resolución parlamentaria no puede desconocer el principio constitucional según el cual ningún habitante de la nación puede ser obligado a hacer lo que la ley no le manda ni puede ser privado de lo que ella no le prohíbe; si se resuelve que, aun contra la salas del Congreso, rige la cláusula que estatuye que nadie puede ser penado sino en virtud de una ley anterior al hecho del pro-



ceso; que, en realidad de verdad, nadie puede ser sacado de sus jueces naturales o juzgado por comisiones especiales o por jueces que no sean los determinados por la ley antes del hecho del proceso; si se acepta la jurisprudencia que, de acuerdo con la corriente indudable de la opinión de nuestros días, han sentado los tribunales argentinos en los últimos juicios ventados ante ellos; si las ideas liberales se consolidan a este respecto, más indispensable es, todavía, hacer posible el debate judicial, sin trabas que lo cohiban ni incongruencias de minucias procesales que pueden llegar hasta impedirlo por completo.

* *

La extradición de los delinquentes que, según la frase de Mancini, se cataloga «entre los institutos sociales que contribuyen más eficazmente al incremento de la civilidad entre las naciones y a la educación moral de la humanidad», ha sido estudiada con cautela en la República. País de inmigración, cuyo desarrollo y cuya vida misma reclaman la afluencia de brazos, en cantidades siempre crecientes, se ve expuesto a que, entre los miles de extranjeros que arriban a sus playas a labrar las industrias y aportar su contingente de trabajo, se deslicen malhechores que se refugian en su suelo, huyendo a la persecución de la justicia. Los pedidos de extradición se han hecho siempre y se hacen en la actualidad con suma frecuencia y, con tal motivo, se han presentado múltiples ocasiones para analizar el tema, de todos los puntos de vista prácticos y teóricos que es dado imaginar.

El código actual de procedimientos ha dedicado a la extradición un largo capítulo en que se involucran disposiciones de fondo y de forma, entremezcladas en detrimento del método y de la corrección legislativa.



Cuando el Dr. Obarrio lo proyectó, en 1882, se habían celebrado tratados con diversas potencias y, en cuanto a ellos, había necesidad de respetarlos, como se respetaron en realidad; pero no existían pautas directrices del criterio judicial, para los casos de extradiciones solicitadas por países que no habían definido derechos y obligaciones por pactos internacionales. El codificador se creyó, por lo tanto, en la necesidad de suplir la falta de la legislación substantiva y se ocupó de tópicos que escapan a la esfera de las leyes procesales

Pero cuando se puso en vigencia el código en el año 1888, era ya ley de la República la n.º 1612, de agosto 25 de 1885, y por lo tanto hubiera sido necesario concordar ambos cuerpos de preceptos, lo que no se hizo, y evitar que se ingiriesen en aquél disposiciones que correspondían exclusivamente a ésta. lo que tampoco se hizo, dando así lugar a las antinomias e incongruencias fatales en esas circunstancias.

En la actualidad, la extradición en cuanto a su procedencia y reglas que la informan, está legislada:

1.º Por los tratados que sobre la materia, la República ha concluido con Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Países Bajos, Paraguay, Portugal, República Oriental, Suiza y quizá alguna otra nación; y

2.º Por la ley de 1885, que se dictó, según se dijo en el debate, «para que el P. E. pueda cumplir los tratados de extradición que tenga la nación; para que el mismo gobierno encuentre en esa ley los principios generales que profesa la nación argentina y a los cuales debe ajustar los tratados que celebre en lo sucesivo; y finalmente, para que, aun sin tratados, el P. E. tenga facultad para entregar los criminales reclamados por otros países a título de reciprocidad» (Diario de Sesiones del Senado, 1885, pág. 48).



Las teorías de extradición se encuentran, pues, establecidas por preceptos federales, de manera que el código procesal debe circunscribir su acción a las formalidades y trámites extrínsecos que surgen de la especialidad del caso.

Nuestra norma de criterio ha debido ser, en consecuencia, la de eliminar toda disposición que pudiera considerarse propia de la ley substantiva. Además, no podíamos dejar de lado el hecho de que algunos tratados no solo deciden las reglas fundamentales sobre entrega recíproca de delinquentes, sino que descendiendo a los pormenores, prescriben además pautas de enjuiciamiento. En consecuencia hemos sentado que el procedimiento de la extradición, sea que se solicite por la República o que deba otorgarse por ella a solicitud de otra nación, se regirá por los convenios internacionales y, en su defecto, por los preceptos del Código.

Fijadas estas premisas, la reglamentación del juicio ha sido fácil sobre la base de las mismas prescripciones actuales.

Entre los juicios especiales de nuestro proyecto no figuran los de «falsificación de documentos públicos y privados» y de «fuga de presos», que aparecen en el código.

El procedimiento en los casos de falsificación es el procedimiento común. Tiene, sin duda, las modalidades propias derivadas de la naturaleza del delito, como las tienen los trámites conexos con cada una de las infracciones; pero así como no se ha creído necesario, y en verdad no lo es, crear un juicio especial para el homicidio o para el robo, así tampoco cabe un juicio especial para la falsificación. Es esto tan



exacto que las disposiciones pertinentes del código no son sino repeticiones, ampliaciones o explicaciones de las relativas al sumario en general y tienden, principalmente a comprobar el hecho. El título destinado a la «instrucción» puede decirse que las comprende todas.

En cuanto a la «fuga de presos» tampoco demanda una tramitación *sui generis*. Puede ser o no un delito, según los criterios y las legislaciones. El código penal no incrimina la evasión del reo ni la complicidad; reprime únicamente la connivencia del guardián del fugitivo. El proyecto de los Dres. Piñero, Rivarola y Matienzo, siguiendo al código italiano, castiga «la evasión acompañada de violencia en las personas o de fuerza en las cosas y toda connivencia en cualquier clase de evasión» (véase pág. 211 de la exposición de motivos, y arts. 326 y 327). Si el hecho constituye delito, se seguirán en cuanto a él los procedimientos comunes; si no lo constituye, no habrá más que la acción policial tendiente a capturar al evadido.



Hemos agregado un nuevo título sobre «acumulación de causas», a cuyo respecto el silencio de la ley ha dado margen a tropiezos graves y a controversias repetidas.

En sus arts. 37 a 42 inclusive el código define la jurisdicción y competencia de los magistrados en el caso de que «una misma persona hubiere cometido dos o más delitos», antes de iniciarse el proceso, pero no provee a la eventualidad de que el reo, pendiente la causa, realice otra infracción. ¿Deberá, en esta hipótesis, suspenderse el proceso, aunque la sentencia definitiva esté próxima, para dar lugar a que los trámites del nuevo, que debe iniciarse, lleguen a la altura en que el otro se halla? ¿O deberán proseguirse ambos independientemente?



El art. 85 del código penal preceptúa: «Si se ha reiterado el mismo delito contra varias personas o cosas, o si el mismo malhechor comete delitos de diferente especie por otras tantas acciones, la pena del uno se agregará a la del otro; pero si esta reunión fuese imposible por la naturaleza de las penas o por exceder del máximo legal la suma resultante de la acumulación, se aplicará la del delito mayor, agravándola con las adicionales que fuese posible. Si no fuese posible acumulación alguna por la diversa clase de las penas, el delito menos grave será circunstancia agravante del más grave».

El artículo legisla sobre un punto exclusivamente substantivo, la acumulación de penas, que es distinta de la acumulación de causas. Para llegar a la aplicación de ese precepto no es, teóricamente, indispensable reunir los procesos; puede obtenerse ese resultado con la tramitación aislada e independiente de ellos, con tal que, en último análisis, se disponga la revisión de la sentencia final recaída en cada uno. La posibilidad de este modo de proceder aparece clara en el proyecto citado de los Dres. Piñero, Rivarola y Matienzo, que, después de sentar diversas normas sobre la acumulación, resuelve en el art. 83: «las reglas precedentes se aplicarán en el caso en que, después de una condena pronunciada por sentencia firme, se deba juzgar a la misma persona por otro hecho cometido antes de la condenación.»

Se comprende sin esfuerzo que la falta de reglamentación precisa sobre la acumulación de las causas, por una parte, y la prescripción obligatoria de la acumulación de las penas, por la otra, haya dado motivo a vacilaciones y a estudios y a resoluciones de los tribunales, no siempre armónicas, especialmente las emanadas de cámaras de distinto fuero.

Alguna vez, un acusado de calumnia ha logrado de-



tener el curso de una querella, próxima a sentencia, simulando una nueva acusación, cuyos trámites debían proseguirse con premeditada lentitud, después de haber obtenido que se incorporara a la primera, para que el juez se pronunciase conjuntamente sobre ambas; alguna otra vez, se siguieron con total independencia dos procesos contra el mismo reo, por quiebra fraudulenta el uno y por incendio el otro. Fallado en definitiva el que primero se encontró en estado, surgió la dificultad, insuperable dentro de la legislación vigente, de poder cumplir el art. 85 citado del código penal, sin violar el sello de la cosa juzgada y sin crear una revisión de sentencia, que ningún precepto de derecho positivo autoriza.

En 1909, la cámara de apelaciones en lo criminal examinó detenidamente las doctrinas sobre acumulación de causas, en uno de los tantos casos sometidos a su decisión. Un procesado por lesiones, pendiente el juicio, perpetró un delito cuya pena no alcanzaba a un año de privación de libertad. El juez correccional remitió las actuaciones al del crimen, a los efectos de la acumulación, pero éste se declaró incompetente y suscitó así una contienda negativa. La cámara, al pronunciarse, resolvió que cada proceso se substanciasse por separado, y sentó, entre otras, las siguientes reglas de interpretación y de doctrina:

1.ª «La disposición del artículo 85 del código penal no puede entenderse en el sentido de que siempre y en todos los casos de reiteración de delitos, deba seguirse la regla que sanciona, sino cuando el conocimiento de ellos correspondiese al mismo juez y hubieren sido materia de la acusación y se hubieran perpetrado con anterioridad a ella».

2.ª «Una interpretación más lata.....podría conducir a conclusiones inconstitucionales y hasta absurdas, porque si hubiera de entenderse el artículo 85 en sentido



de que nunca podrían imponerse diferentes condenas a un reo de diversos delitos no juzgados aún, sino que en todo caso, una deberá ser la sentencia en que se acumulen las penas o se agrave la del delito mayor, por la del menor,—el código penal habría invadido las facultades que la Constitución nacional reserva a las provincias para determinar los límites de la jurisdicción y organización de su administración de justicia, o bien quedarían por ello impunes aquellos delitos que no cayeran bajo la jurisdicción del juez a quien corresponde el juzgamiento del más grave.»

3.^a «Los arts. 37 a 42 del código de procedimientos en lo criminal prevén los casos en que un mismo delincuente cometa delitos cuyo conocimiento corresponda a distintas jurisdicciones y fijan las reglas que han de seguirse, para juzgarlos, en términos tales que la aplicación del art. 85 sería imposible».

4.^a «Si bien el artículo 40 prevé el caso de que todos ellos correspondan a los jueces que ejercen la jurisdicción ordinaria de la capital o territorios nacionales, estableciendo que deberá conocer de ellos el juez a quien corresponda el conocimiento del más grave, tal disposición no es de aplicarse sino en aquellos casos en que la causa no ha quedado definitivamente radicada ante el juez que conoce de ella».

5.^a «Una interpretación contraria conduciría al caos y a la prolongación indefinida de los procesos, puesto que una causa que estuviera ya substanciada por todos sus trámites legales ante el juez competente, podría ser paralizada y sacada del poder de dicho juez para serle llevada a otro a quien correspondiera el conocimiento de un nuevo delito más grave cometido por el mismo delincuente». (Puede verse el texto de la sentencia en Malagarriga y Sasso, Procedimiento Penal Argentino, t. 2, págs. 313 y sigtes.).

Las observaciones y principios que informan este



fallo son el resultado fatal de la ausencia de una reglamentación precisa sobre un punto de práctica judicial que tiene trascendencia suma, por su relación íntima con las leyes de fondo y por las doctrinas de legislación adjetiva que compromete.

Al formular los preceptos pertinentes, nos hemos visto en la necesidad de prescindir de disquisiciones teóricas para amoldarlos a las exigencias sentidas en la magistratura argentina.

Hemos dejado de lado el caso en que los delitos deban juzgarse en distintas jurisdicciones,—la general y la local.—porque la ordenación de los trámites y juicios, en tales casos, no puede ser impuesta compulsivamente ni por el congreso federal a las provincias, ni por las legislaturas de estado a la nación. Nos hemos limitado, en consecuencia, a la hipótesis de que las causas hayan de ventilarse ante autoridades con relación a las cuales el proyecto, si fuera aprobado, tendría vigencia, de conformidad con nuestro sistema de gobierno; y, sobre esa base, hemos indicado las siguientes normas de solución:

1.^a Si durante el sumario, el encausado cometiese otros delitos, se acumularán los respectivos procesos ante el juez que corresponde de acuerdo con las reglas de competencia que el proyecto determina. Cuando la causa se encuentra aún en estado de sumario, las notorias ventajas de la acumulación compensan holgadamente el pequeño tropiezo de la breve demostra que, a ese fin, es indispensable y que jamás podrá exceder de unos pocos días.

2.^a Si la causa estuviera en plenario, continuará el procedimiento hasta la citación para sentencia y se acumularán los procesos cuando ambos se encuentren en el mismo estado. De este modo, no se obstaculizarán recíprocamente y seguirán la marcha paralela que les corresponde, hasta el instante de la sentencia



que debe, necesariamente, tener en cuenta a los dos desde que la pena debe ser única, según la expresa disposición recordada del código penal. En el deseo, no obstante, de evitar causas calculadas para impedir que se dicte sentencia en un proceso pendiente por delito grave, hemos indicado, como excepción a la regla establecida, que no se suspenderá el procedimiento de la primera causa cuando en ella la acusación hubiera solicitado pena de diez años de privación de libertad por lo menos, y la segunda lo fuese por delito que merezca pena que no exceda de tres años. No hemos proyectado otra excepción para el caso, ya ocurrido, de un querellado por calumnia que pretenda trabar la sentencia final con nuevas acusaciones, porque pensamos que, si la segunda querrela es real, la acumulación será de rigor por mandato irrefragable de la ley y que, si es simulada, el recurso a ella entraña uno de los tantos artificios para burlar a la justicia, por los cuales sus autores se hacen pasibles de las penas disciplinarias que los tribunales tienen el derecho y el deber de aplicar, para mantener el decoro y buen orden en los juicios.

3.ª Si la primera causa se hallare en segunda instancia o si se tratara de la excepción apuntada, el procedimiento no se suspenderá, pero la sentencia que recayere quedará sujeta a revisión por el mismo tribunal, para el caso en que hubiera condena en la segunda causa, a fin de aplicar una sola pena por todos los delitos cometidos. Esta posibilidad de la revisión, cuya falta ha sido fuente de contradicciones y perplejidades, es, en realidad, un verdadero deber en las circunstancias en que procede. La sentencia dictada queda firme, en todas sus partes, menos en cuanto a la pena, que podrá ser aumentada —nunca disminuída— si las conclusiones del nuevo proceso así lo aconsejan. Es, pues, una revisión parcial, circumscripta al



objeto que la aconseja, como incidencia, única posible, para armonizar, en esta materia abstrusa, las exigencias combinadas de la doctrina y de la práctica.

4.^a No serán acumuladas las causas cuando en una o en ambas hubiera más de un procesado y no se tratase de delitos conexos, porque los perjuicios de la acumulación serían entonces superiores a los beneficios, especialmente respecto al reo que sólo figura en uno de los procesos; pero, de todos modos, la sentencia que se dicte quedará sujeta a revisión, siempre con la mira de obtener la unidad represiva, preconizada de consuno por la doctrina universal y por el código vigente en la República.

5.^a Cuando las causas se ventilen ante jurisdicciones distintas, en los casos en que, según las normas indicadas, no corresponda la acumulación, la pena definitiva será fijada por el tribunal de última instancia de la jurisdicción a que hubiera correspondido el conocimiento de todos los juicios, aun cuando no hubiese sido apelada ninguna de las sentencias.

Abrigamos la esperanza de que, con la aplicación de estas pautas, derivadas de la experiencia nacional, se habrá solucionado el problema de la acumulación de los procesos, encarado con frecuencia por magistrados y legisladores.

* *

Sin desconocer que contrariamos ideas aceptadas sobre forma de redacción de los preceptos legales, hemos apuntado, algunas veces, la conveniencia de adoptar procedimientos o conceptos que no hemos podido abordar directamente, por hallarse fuera de nuestro cometido. En el art. 34, por ejemplo, aludimos a posibles tratados entre la nación y las provincias para resolver los conflictos jurisdiccionales, en caso de



pluralidad de delitos; en el art. 438 nos referimos a la formación del registro de reincidentes, etc. Aunque los dos tópicos parecen inconexos, la verdad es que los conflictos jurisdiccionales nacen de nuestra forma de gobierno, por la falta de acuerdo entre los poderes centrales y los locales, y que el registro de reincidentes no se ha llevado a cabo, también por causa de nuestra forma de gobierno y también porque, al efecto, ha faltado acuerdo entre los poderes locales y los centrales.

No sólo corresponde a las provincias la legislación de forma sino que, como es sabido, la facultad de dictar el código penal no altera la jurisdicción local, «correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones», de conformidad a la enmienda propuesta en la convención de Buenos Aires, de 1860, por el doctor Vélez Sársfield e incorporada al art. 67, inc. 11 de la Constitución.

En caso, entonces, de concurrencia de delitos, cuando uno deba ser juzgado por tribunales de la nación y otro por tribunales de provincia, se produce una dificultad seria: o se resuelve, por ley nacional, la acumulación de penas y la acumulación de causas, lo que envuelve un desconocimiento de la prescripción constitucional citada; o no se acumulan las causas, ni las penas, lo que envuelve una flagrante desigualdad en la aplicación de las medidas represivas y vulnera, por lo tanto, otra prescripción constitucional.

Ante los términos de este dilema, nos hemos decidido, transitoriamente, por la uniformidad de la pena, apuntando, sin embargo, el medio de allanar las incertidumbres y de echar los cimientos de la futura legislación al respecto.

Las provincias, que conservan todo el poder no



delegado al gobierno federal (art. 104 de la Constitución), pueden (art. 107) «celebrar tratados parciales para fines de administración de justicia» y pueden, por lo tanto, realizar las medidas que harían desaparecer infinitos tropiezos, no sólo de instrucción criminal, sino de práctica judicial, en todas las ramas de la legislación.

Este resorte no ha sido utilizado desde la vigencia de la Constitución: se ha preferido, alguna vez, dictar leyes concordantes sobre un tópico cualquiera, impuestas por coacción indirecta o acordadas en vista de recíprocas ventajas. Sin que pretendamos eliminar este camino hacia el mismo resultado final, entendemos que sólo debemos aludir al medio fácil, ostensible, que deriva de la letra y del espíritu de nuestro código político y cuya adopción contribuirá a afirmar los dogmas que gobiernan las relaciones entre el núcleo federal y los centros seccionales de poder.

De todos modos, sólo con la concurrencia armónica de la voluntad nacional y de las voluntades provinciales desaparecerán por completo, sin herir cláusulas constitucionales, los conflictos de jurisdicción en caso de que el mismo reo haya cometido delitos en varias jurisdicciones.

En cuanto al registro de reincidentes, su necesidad se impone de tal manera, que apenas se concibe su falta en la República.

El derecho penal propende a la disminución de los delitos. Las especulaciones abstractas de los filósofos sobre el modo de ejercitar el magisterio represivo pueden servir de base para el criterio del legislador, a condición de que suministren al estado un arma bastante poderosa como para tutelar la vida y derechos del individuo. La represión, de acuerdo con cualquier sistema, debe tender a cortar las tendencias criminosas de quienes ya las han demostrado y de



quienes pueden sentirse arrastrados a imitarlos; debe tender a combatir las reincidencias y a intimidar futuros malhechores.

¿Cuál es el resultado de esta misión tutelar entre nosotros? No es fácil indicarlo con certidumbre. Las estadísticas argentinas en esta materia no tienen, siquiera, la fijeza relativa que han alcanzado en otras, a tal punto que cualquier cálculo sobre el número aproximado de reincidentes carece de consistencia.

La reincidencia, por otra parte, es un elemento capital que la doctrina y la ley toman en consideración para aquilatar la responsabilidad del delincuente y su grado de perversidad. La repetición del delito denuncia una inclinación al mal que los magistrados deben pesar, como dato individual irremplazable, para decidir la pena que debe infligir al reo. La legislación argentina se ha preocupado de este prisma a cuyo través debe estudiarse al delincuente, y, además de los arts. 84, inc. 20, y 85 a 88 inclusive del código penal, y 15 de la ley de reformas n.º 4189, se ha dictado la n.º 3335, según la cual «las penas correccionales o de prisión que los jueces de la capital y territorios federales impongan a los reincidentes, por segunda vez, serán cumplidas en los territorios nacionales del sud que el P. E. designe al efecto».

Todas estas medidas y las teorías que las sustentan no tienen, empero, más que una aplicación parcial. El juez, para saber quien es reincidente, sólo dispone de los datos, siempre locales y, por tanto, incompletos de las reparticiones de policía y de las pruebas aleatorias e inciertas que puedan surgir en el proceso, a pesar de los empeños del reo en ocultar el hábito de delinquir que, hasta por intuición, sabe que debe ser perjudicial a su perenne objetivo de eludir la aplicación de las leyes.

Las sentencias de los jueces locales del crimen no



se comunican a ninguna autoridad única; nadie toma nota de todas ellas: el reo de Buenos Aires, convicto, confeso y sentenciado por sus tribunales puede simular patente limpia en Tucumán y, de ese modo, el delincuente que añade a los peligros de la reincidencia los de su habilidad para burlar la justicia, escapa a menudo a las prescripciones de códigos y de leyes, tan correctamente concebidas como defectuosamente aplicadas.

Cuando el registro de reincidentes sea un hecho cuando se anoten en sus fojas los nombres de los condenados en el país por todos los jueces, de todas las jurisdicciones, sin diferencias de localidades ni de circunscripciones políticas o administrativas, la judicatura se hallará en situación de conocer, con mayor exactitud, a los profesionales del delito y de descargar contra ellos, con mejor criterio y mayor conciencia, el peso de las responsabilidades en que han incurrido y el de la represión eficaz.

Independientemente de las reformas legislativas en trámite, debe abrirse, sin demora, el registro, con la concurrencia, fácil de obtener, de la nación y de las provincias, interesadas todas en contener la delincuencia, cuyo desarrollo, en el universo entero, la reviste de caracteres cada día más graves, que constituyen la creciente preocupación de sociólogos y estadistas.

* * *

En esta exposición, sólo nos hemos propuesto indicar la orientación general de las reformas y explicar el alcance de las más importantes. No encuadra, dentro de tal marco, el análisis de cada una de las disposiciones que el proyecto contiene, por mucho que ellas entrañen alguna innovación en las reglas prevalentes de derecho procesal. Bastan, a nuestro juicio, las ideas

desenvueltas para aquilatar los detalles y coordinarlos con la tendencia general adoptada.

No debemos, sin embargo, dar fin a esta nota, sin dejar constancia en ella de que el secretario de la comisión, don José Luis Duffy, cuya preparación especial en derecho penal es conocida, ha sido un colaborador eficaz en nuestras tareas.

Saludamos a V. E. con nuestra consideración más distinguida.

*Pedro F. Agote.—Ramón Méndez.—M. A.
Montes de Oca.*







PROYECTO DE CÓDIGO
- DE -
PROCEDIMIENTOS EN LO CRIMINAL





PROYECTO
DE
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN LO CRIMINAL

LIBRO PRIMERO

DISPOSICIONES COMUNES

TÍTULO I

REGLAS GENERALES

Art. 1. No podrán iniciarse juicios criminales sino en virtud de actos u omisiones calificados de delitos por una ley anterior, ni proseguirse y terminarse ante otros jueces que los del fuero respectivo.

Art. 2. Nadie puede ser constituido en prisión preventiva sin orden escrita de juez competente, dictada como consecuencia de un delito que merezca pena de privación de libertad.

Art. 3. Inmediatamente de detenido el presunto culpable y puesto a disposición del juez, éste procederá a practicar las diligencias necesarias para decretar su prisión preventiva o su libertad.

Art. 4. Nadie puede ser procesado ni castigado sino una sola vez por la misma infracción.

Art. 5. En ningún caso podrán hacerse al procesado cargos y reconvenciones tendientes a obtener la confesión de su culpabilidad.





Art. 6. El procesado podrá defenderse personalmente; pero si su defensa obstase a la buena tramitación de la causa o fuera perjudicial para el presunto delincuente, el juez le ordenará que designe un defensor letrado, bajo apercibimiento de nombrárselo de oficio.

Art. 7. La fuga o locura sobreviniente de los procesados, no paralizará las diligencias del sumario; pero terminado éste, la causa se suspenderá hasta que el prófugo sea habido, o hasta que el loco recupere el uso de su razón.

Art. 8. La pena de muerte sólo podrá imponerse por unanimidad de votos del tribunal íntegro que conozca de la causa en última instancia, cuando su fallo fuese revocatorio del de primera. Si fuese confirmatorio, bastará la mayoría de dos tercios de votos.

Art. 9. Las leyes penales no podrán aplicarse por analogía, ni interpretarse extensivamente en contra del procesado.

Art. 10. En caso de duda deberá estarse a lo que sea más favorable al procesado.

Art. 11. Los términos son perentorios, salvo disposición en contrario.

Art. 12. Regirán para los juicios criminales las reglas establecidas en las leyes de procedimiento civil respecto a apoderados, días hábiles o inhábiles y constitución de domicilio, en cuanto no se hallen modificadas por el presente Código.

TÍTULO II

ACCIONES QUE NACEN DE LOS DELITOS

Art. 13. Las acciones que nacen de los delitos son penales y civiles. Las penales son públicas o privadas. Las públicas se ejercitan por el ministerio fiscal; las privadas, por las personas ofendidas.



Art. 14. La renuncia de la persona ofendida sólo extingue la acción privada y no afecta más que al renunciante;

Art. 15. La persona damnificada que no haya promovido acción por reparación de perjuicio ante la jurisdicción civil, puede promoverla ante la criminal, presentándose como parte en el proceso respectivo antes de la conclusión del sumario.

Art. 16. Siempre que el proceso se paralice por causa legal o termine por cualquier medio que no sea absolucíon o condena, la acción civil no continuará ante la jurisdicción criminal, pero podrá promoverse ante la que corresponda.

Art. 17. La acción civil se substanciará conjuntamente y por los mismos trámites de la acción criminal.

TÍTULO III

JURISDICCION Y COMPETENCIA

Art. 18. La jurisdicción criminal es improrrogable.

Art. 19. El conocimiento de los delitos del fuero federal, corresponde:

- 1.º A la Suprema Corte de Justicia Nacional;
- 2.º A las Cámaras Federales de Apelación;
- 3.º A los Jueces de Sección; y
- 4.º A los Jueces de los Territorios Nacionales.

Art. 20. La jurisdicción de estos tribunales se rige por las disposiciones de la Constitución Nacional y por las de las leyes sobre organización y competencia de la justicia federal, con la salvedad establecida en el inciso 4.º del artículo siguiente.

Art. 21. La jurisdicción criminal ordinaria o del fuero común en la Capital de la República será ejercida por jueces correccionales y del crimen y por una o más cámaras de apelación y se extiende:



- 1.º Al conocimiento de todos los delitos que no sean del fuero federal, cometidos en la Capital por nacionales o extranjeros;
- 2.º Al conocimiento de los delitos cometidos en el extranjero, en los casos determinados por las leyes;
- 3.º Al conocimiento de las causas por defraudación de las rentas municipales o de las fiscales provenientes de impuestos establecidos para Capital y Territorios; y
- 4.º Al conocimiento de las causas por delitos comunes cometidos en lugares o establecimientos ubicados en la Capital, aunque el Gobierno tenga en ellos absoluta y exclusiva jurisdicción.

Art. 22. La jurisdicción atribuída por esta ley a la justicia nacional, no altera la que corresponda a los tribunales militares.

Art. 23. La jurisdicción criminal ordinaria en los territorios nacionales será ejercida por los jueces letrados y cámaras federales de apelación.

Art. 24. El juzgamiento de las faltas o contravenciones a las ordenanzas de la municipalidad o de la policía corresponde respectivamente a cada una de estas reparticiones, cuando la pena no exceda de un mes de arresto o cien pesos de multa.

Art. 25. Los jueces de lo correccional conocerán en primera instancia:

- 1.º De las faltas o contravenciones municipales o de policía, cuya pena exceda de un mes de arresto o cien pesos de multa; y
- 2.º De los delitos que merezcan pena de privación de libertad que no exceda de un año, o de multa que no exceda de mil pesos cualesquiera que sean las penas accesorias que correspondan.

La acumulación de estas penas no altera la jurisdicción del juez correccional.



Art. 26. Los jueces de lo correccional conocerán en 2.^a y última instancia de los recursos interpuestos contra las resoluciones de la municipalidad o de la policía, cuando la pena impuesta exceda de cinco días de arresto o treinta pesos de multa.

Art. 27. Los jueces del crimen conocerán de todas las causas de homicidio y, además, de las mencionadas en el artículo 21, cuyo juzgamiento no compete a la justicia correccional.

Art. 28. Los jueces del crimen en la Capital serán de instrucción y de sentencia, correspondiendo a los primeros la formación del sumario, y a los segundos la substanciación del plenario y el pronunciamiento de la sentencia definitiva.

Art. 29. La cámara de apelación conocerá en última instancia:

- 1.º De los recursos contra las decisiones de los jueces del crimen y correccionales;
- 2.º De los recursos de queja por justicia retardada o denegada; y
- 3.º De las contiendas de competencia entre jueces del crimen y correccionales de la Capital.

Art. 30. Para determinar la competencia se tendrá en cuenta no sólo la naturaleza del delito, sino también las circunstancias especiales en que se haya producido, según puedan apreciarse *primera facie*.

Art. 31. El lugar en que se ha cometido el delito determina la competencia; si ese lugar fuere desconocido o dudoso, entenderá el juez que hubiese prevenido.

Art. 32. Cuando una misma persona hubiese cometido uno o más delitos cuyo juzgamiento corresponda a jueces del mismo fuero, será competente para conocer de todos los delitos el juez a quien correspondiere el conocimiento del más grave. En caso de que fueran igualmente graves, deberá intervenir el juez a



quien competa el conocimiento del de fecha más reciente. Igual regla se observará cuando el juzgamiento de uno de los delitos competa a la justicia ordinaria de la Capital y el de otro a la justicia de los territorios nacionales.

Art. 33. Si uno o más de los delitos correspondieran al fuero federal y el otro u otros a los jueces ordinarios de la Capital o a los de los territorios nacionales, los jueces de la Capital o de los territorios, según el caso, conocerán de todas las infracciones.

Art. 34. Mientras la Nación y las provincias no celebren tratados para resolver los conflictos jurisdiccionales, en caso de pluralidad de delitos, conocerán en primer término los jueces de la Nación ya sean federales, ordinarios de la Capital o de los territorios nacionales.

Art. 35. Las disposiciones precedentes se aplicarán también a los delitos conexos.

Art. 36. Los jueces que ejercen la jurisdicción criminal son competentes para resolver, al solo efecto de la represión, las cuestiones de carácter civil, prejudiciales o no, que surjan durante el proceso y tengan relación con el delito. Si fueren prejudiciales se resolverán en forma de artículo de previo y especial pronunciamiento.

TÍTULO IV

CUESTIONES DE COMPETENCIA

Art. 37. Las cuestiones de competencia pueden promoverse por inhibitoria o por declinatoria.

La inhibitoria se intentará ante el juez a quien se considere competente, pidiéndole que dirija oficio al que se repute no serlo, para que se inhíba y remita la causa.



La declinatoria se propondrá ante el juez o tribunal a quien se considere incompetente, pidiéndole que se separe del conocimiento de la causa y la remita al que sea tenido por competente.

Art. 38. Entre jueces del mismo fuero y jurisdicción de la Capital de la República no habrá contiendas de competencia, y toda dificultad sobre turno, prevención en el conocimiento, acumulación de autos o cualquier otra análoga, será resuelta sumariamente por la cámara de apelación respectiva.

Art. 39. El ministerio público, el procesado o su defensor y el que sea civilmente responsable, podrán proponer la inhibitoria o la declinatoria en cualquier estado del juicio, cuando se trate de jurisdicciones de diversa naturaleza. Tratándose de jurisdicciones idénticas, sólo podrán hacerlo en primera instancia hasta la fijación de la audiencia de prueba.

Art. 40. El que hubiere optado por uno de los medios autorizados en el artículo 37 para promover la competencia, no podrá abandonarlo y recurrir a otro, ni ejercitarlos simultánea o sucesivamente.

El simple aviso al juez que se tiene por incompetente de haberse interpuesto la inhibitoria, no importa el ejercicio simultáneo de ambas excepciones.

En el escrito de inhibitoria se expresará que no se ha empleado la declinatoria. Si resultare lo contrario, el recurrente será condenado en las costas, aunque se decida en su favor la competencia o aunque él la abandone en lo sucesivo.

Art. 41. Los jueces ante quienes se proponga la inhibitoria mandarán librar el oficio respectivo o lo denegarán en auto motivado, oyendo al ministerio fiscal, que se expedirá dentro de tercero día.

Art. 42. Los autos en que los jueces denegaren el requerimiento de inhibición serán apelables.

Art. 43. Con el oficio de inhibición se acompaña-



rá testimonio del escrito en que se haya pedido, do lo expuesto por el ministerio fiscal, de la providencia que se hubiere dictado y de las demás actuaciones que los jueces estimen conducentes para fundar su competencia.

Art. 44. El juez requerido dará vista al ministerio fiscal y traslado a las partes que intervengan, por el término de tres días comunes, transcurridos los cuales, admitirá o denegará el requerimiento. Si accediere, el auto sera apelable.

Art. 45. Consentida o ejecutoriada la sentencia en que el juez se hubiese inhibido del conocimiento de una causa, la remitirá al que hubiere propuesto la inhibitoria, con emplazamiento de las partes, y se pondrán a su disposición el proceso, las pruebas materiales del delito y los bienes embargados.

Art. 46. Si se negare la inhibición, se comunicará el auto al juez que la hubiese propuesto, con testimonios de los escritos de los interesados, del dictamen fiscal y de lo demás que se crea conveniente. En el oficio, el juez solicitará que se le conteste para continuar actuando si se reconoce su jurisdicción, o que se remita la causa a quien corresponda para que se decida la competencia.

Art. 47. Recibido el oficio expresado en el artículo anterior, el juez que haya propuesto la inhibitoria dictará auto desistiendo o sosteniendo su competencia sin más substanciación, dentro de tercero día. En el primer caso, la resolución será apelable.

Art. 48. Consentido o ejecutoriado el auto en que el juez desista de la inhibitoria, lo comunicará al competente, remitiéndole todo lo actuado.

Art. 49. Si el juez insistiere en la inhibitoria, remitirá los antecedentes al tribunal que deba resolver la contienda e invitará al otro juez para que proceda del mismo modo.



Art. 50. El tribunal dictará resolución en el primer acuerdo que celebre después de emitido el dictamen fiscal, y remitirá la causa al juez que declare competente, con citación de las partes.

Art. 51. En caso de ocurrir conflicto negativo, por declararse dos jueces incompetentes para conocer de un asunto, se observará el mismo procedimiento que en las contiendas positivas.

Art. 52. Las declinatorias se substanciarán por cuerda separada, como artículos de previo y especial pronunciamiento.

Art. 53. Las inhibitorias y declinatorias no suspenderán el curso del procedimiento, el cual se continuará hasta la citación para sentencia ante el juez que hubiese prevenido y, en caso de duda, ante el juez requerido de inhibitoria.

Art. 54. En el caso de competencia negativa entre la jurisdicción federal o la ordinaria de la Capital o territorios nacionales y otra especial, la federal u ordinaria empezará o continuará la causa.

Art. 55. Cuando la competencia fuera negativa entre jueces que ejerzan una misma clase de jurisdicción, empezará o continuará la causa el juez ante quien se hubiera presentado la denuncia o querrela, o a quien se hubieren remitido las diligencias de prevención.

Art. 56. Para la decisión de la competencia, el juez que deba continuar conociendo de la causa provisoriamente remitirá al superior testimonio de las actuaciones pertinentes. El juez que no deba continuar actuando remitirá original la causa, y si no la hubiere comenzado, las actuaciones relativas a la inhibitoria.

Art. 57. La Suprema Corte de Justicia Nacional dirimirá las contiendas de competencia entre las cámaras federales de apelación y entre jueces y tribunales de distinto fuero. La cámara federal que conozca en las apelaciones del juez que hubiere prevenido di-

rimirá las contiendas entre jueces de sección, entre jueces de territorios nacionales y entre éstos y aquéllos. La cámara de apelaciones de la Capital dirimirá las que se susciten entre jueces del fuero ordinario.



TÍTULO V

RECUSACIONES

Art. 58. Los jueces sólo podrán ser recusados por las causas siguientes:

- 1.^a El parentesco de consanguinidad o de afinidad dentro del cuarto grado con alguna de las partes o con su letrado, representante o defensor;
- 2.^a Ser o haber sido defensor, acusador o denunciador de alguna de las partes; haber intervenido en la causa como fiscal, perito o testigo; o haber dado recomendaciones, o emitido opinión acerca de la misma, antes o después de comenzada;
- 3.^a Haber sido denunciado o acusado antes de desempeñar el cargo judicial por alguna de las partes como autor, cómplice o encubridor de un delito;
- 4.^a Ser o haber sido denunciado por el recusante ante la Cámara de Diputados a los efectos del juicio político, siempre que la denuncia sea anterior al hecho que motiva el proceso o que, siendo posterior, la comisión respectiva hubiere aconsejado haber lugar a la formación de causa de conformidad con el artículo 45 de la Constitución;
- 5.^a Ser o haber sido tutor o curador, pupilo o curado de alguno que sea parte en la causa;
- 6.^a Tener el juez, su cónyuge o parientes en lí-



- nea recta pleito pendiente con el recusante;
- 7.^a Tener interés directo o indirecto en la causa;
 - 8.^a Tener sociedad o comunidad con alguna de las partes, excepto si la sociedad fuese anónima;
 - 9.^a Ser acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes;
 - 10.^a Amistad íntima o enemistad manifiesta;
 - 11.^a Haber recibido el juez beneficios de importancia en cualquier tiempo; o, después de iniciado el proceso, presentes o dádivas aunque sean de escaso valor; y
 - 12.^a Haber el recusante obtenido la aplicación al juez de multa por retardada justicia.

Art. 59. No serán causales de recusación las injurias de hecho, verbales o escritas contra el juez que estuviere interviniendo en el juicio.

Tampoco lo serán la relación, parentesco, vínculo o situación respectiva entre el juez y otros funcionarios que intervengan en cumplimiento de sus deberes.

Art. 60. Los secretarios de los jueces de 1.^a instancia y de los tribunales superiores serán recusables por las causas expresadas en el artículo 58.

Art. 61. No son recusables los demás empleados de la administración de justicia, pero deberán manifestar cualquier motivo de impedimento en que se encuentren y el juez o tribunal podrá darlos por separados designando los reemplazantes.

Art. 62. La recusación deberá ser deducida en el primer escrito, salvo que la causa sea sobreviniente; o dentro de tres días de tener el recusante noticia de ella, con el juramento de que sólo entonces ha llegado a su conocimiento, en cuyo caso podrá deducirla hasta la citación para sentencia.

En la Suprema Corte y cámaras de apelación la recusación deberá deducirse dentro de los tres días siguientes a la providencia de autos.



Art. 63. Si la recusación no fuese deducida en la oportunidad señalada o no fuere fundada en alguna de las causas legales, se desechará de plano.

Art. 64. Al deducirse la recusación deberá expresarse la causa en que se funde, indicándose los nombres de los testigos y su residencia, y acompañándose o mencionándose los documentos de que el recusante intente valerse. Los testigos no podrán ser más de seis para cada causal, ni el recusante podrá valerse de otros que los indicados al formular la recusación.

Art. 65. En los casos en que la recusación sea desestimada, el recusante será condenado, además de las costas, al pago de una multa de cincuenta a doscientos pesos a beneficio de la educación común.

Art. 66. Las recusaciones se substanciarán por cuerda separada sin que paralicen la causa, la cual será proseguida por el funcionario que deba reemplazar al recusado.

Art. 67. La recusación de uno o más miembros de los tribunales superiores será juzgada por los que queden hábiles, integrándose el tribunal sólo en caso necesario. Los reemplazantes podrán ser recusados dentro del tercero día de su designación.

Deducida la recusación será comunicada al recusado para que manifieste si son o no ciertos los hechos alegados. Si los reconociese como ciertos se le declarará separado del juicio; si los negare, se fijará audiencia para la recepción de la prueba y se dictará resolución en los tres días siguientes.

Art. 68. De la recusación de los jueces de cualquier fuero de la Capital, y de los jueces de sección que ejerzan sus funciones en la ciudad, donde tenga su sede una cámara federal de apelación, entenderá la cámara respectiva. De la de los demás jueces de sección conocerá el funcionario que deba reemplazarlos según las leyes orgánicas. De la de los jueces de los territorios, el juez de sección o de territorio más próximo.



Art. 69. Interpuesta la recusación, el juez pasará el incidente a quien deba conocer de él, con informe sobre los hechos que la funden y remitirá los autos al funcionario que deba reemplazarlo, para que continúe provisionalmente los procedimientos. Se observará el mismo trámite en caso de nuevas recusaciones.

La substanciación y resolución del incidente se regirá por lo dispuesto en el inciso final del artículo 67.

Art. 70. El auto de 1.ª instancia que deseche la recusación será apelable dentro de veinte y cuatro horas, y el recurso resuelto, sin más trámite, en el primer acuerdo que celebre el tribunal.

El auto que admita la recusación es inapelable.

Art. 71. La recusación de los secretarios será resuelta por el juez o tribunal respectivo, sin recurso alguno.

Art. 72. Las causas de recusación serán también de excusación, y el funcionario que se halle afectado por alguna de ellas deberá inhibirse.

Art. 73. Si el magistrado que se excusa fuese miembro de un tribunal, éste resolverá sin más trámite.

Si fuese juez de 1.ª instancia, pasará los autos a quien corresponda reemplazarlo, y éste, en caso de conceptuar que la excusación no procede, formará incidente que elevará para su resolución a la cámara de apelación respectiva, sin paralizar los procedimientos.

Art. 74. Aceptada la excusación o recusación, los autos quedarán radicados en el juzgado a que pasen aún cuando con posterioridad desaparezcan las causas que las originaron, salvo que el reemplazante no desempeñe funciones permanentes de juez.

Art. 75. Los jueces de cualquier jerarquía serán reemplazados en la forma que lo determinen las leyes orgánicas o los reglamentos que dicten los tribunales superiores. Los secretarios, por los otros secretarios ó empleados que designe el tribunal o el juez respectivo.



TÍTULO VI

MINISTERIO FISCAL

Art. 76. El ministerio fiscal será ejercido:

- 1.º En la Suprema Corte, por el procurador general;
- 2.º En las cámaras de apelación, por sus fiscales; y
- 3.º En los juzgados, por los agentes o procuradores fiscales.

Art. 77. Corresponde al procurador general:

- 1.º Intervenir en las causas que se ventilen ante la Suprema Corte; y
- 2.º Cuidar de que los demás funcionarios del ministerio fiscal del fuero federal y de los territorios nacionales promuevan las gestiones que les correspondan y cumplan los deberes de su cargo, y solicitar de la Suprema Corte las medidas disciplinarias pertinentes.

Art. 78. Corresponde a los fiscales de cámara intervenir en las causas que se ventilen ante sus respectivos tribunales en que hubiese sido parte en 1.ª instancia el agente o procurador fiscal. Los fiscales de cámara del fuero ordinario de la Capital de la República ejercerán, además, dentro de su jurisdicción las facultades conferidas al procurador general en el inciso 2.º del artículo precedente.

Art. 79. Corresponde a los agentes y procuradores fiscales:

- 1.º Promover ante los jueces de su fuero la averiguación y enjuiciamiento de los delitos cometidos en el distrito de sus funciones y que den lugar a la acción pública;
- 2.º Asistir a la indagatoria de los procesados y a las demás diligencias de la causa;



3.º Requerir el pronto despacho de los procesos y vigilar el cumplimiento de las leyes de fondo y forma; y

4.º Ejercer las demás facultades y cumplir los demás deberes que este Código señala.

Art. 80. En caso de impedimento de los representantes del ministerio fiscal serán reemplazados en la forma que lo determinen las leyes orgánicas o los reglamentos que dicten los tribunales superiores.

TÍTULO VII

NOTIFICACIONES, CITACIONES Y EMPLAZAMIENTOS

Art. 81. Los autos y providencias se notificarán dentro de veinticuatro horas de dictados, o en el término menor que el juez señale.

Art. 82. Las notificaciones se harán en la Suprema Corte y cámaras de apelación por los ujieres. En los juzgados, por los secretarios o empleados que el juez designe.

Art. 83. Cuando las notificaciones se hiciesen en la oficina, se extenderán en el expediente. El notificado puede sacar copia de la resolución.

Art. 84. La notificación será firmada por el funcionario que la practique y por el interesado. Si éste no supiere, no pudiere o no quisiera firmar, lo harán dos testigos requeridos al efecto por el notificador, no pudiendo servirse para ello de los dependientes de su oficina.

Art. 85. Si la notificación se hiciere a domicilio, el notificador llevará por duplicado una cédula en que esté transcrito el auto que va a notificar o su parte dispositiva, si fuere sentencia; entregará una de las copias al interesado, y al pie de la otra, que se agregará al expediente, pondrá constancia de la diligencia



con expresión del día, hora y lugar en que la hubiese practicado, observando respecto de la firma lo prescripto en el artículo precedente.

Art. 86. Cuando el notificador no encuentre a quien va a notificar, entregará la cédula a cualquier persona de la casa, empezando por la más caracterizada, y en su defecto a cualquier vecino que sepa leer, prefiriendo los más inmediatos, y procediendo en todos los casos en la misma forma del artículo anterior. Si el vecino requerido se negase a recibir la cédula, será ésta fijada en la puerta del domicilio del interesado, en presencia de dos testigos que firmarán la diligencia.

Art. 87. En la diligencia se hará constar la obligación del que recibiere la copia de la cédula de entregarla a quien debía ser notificado, inmediatamente que regrese a su domicilio, bajo apercibimiento de multa de veinte a cien pesos.

Art. 88. Los funcionarios judiciales serán notificados en su despacho, de acuerdo con las reglas precedentes.

Art. 89. Las notificaciones no se harán en días feriados, ni antes ni después de puesto el sol en los días hábiles, salvo los casos de habilitación de días u horas.

Art. 90. Ningún empleado podrá autorizar notificaciones que no hubiese practicado personalmente o en la cual tenga interés o lo tengan su esposa o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad.

Art. 91. Las citaciones a testigos y demás personas que no sean parte directa en el juicio se practicarán con las mismas formalidades establecidas para las notificaciones.

Deberá expresarse, además, en la cédula, el objeto de la citación, el apercibimiento y la pena en que incurrirá en caso de no comparecer sin comprobar justa causa. Salvo disposición especial, esa pena será de



cincuenta a doscientos pesos y, en su defecto, de tres a quince días de arresto, sin perjuicio de la facultad del juez para hacer conducir al citado a su presencia por medio de la fuerza pública.

Art. 92. La cédula del emplazamiento contendrá los requisitos establecidos en el artículo anterior para las citaciones, y además, el término dentro del cual ha de comparecer el emplazado. No se consignarán apercibimientos ni penas sino cuando este Código especialmente los establezca.

Art. 93. Si el que ha de ser notificado, citado o emplazado, se hallare ausente del lugar del juicio, pero dentro de la circunscripción del juzgado, la notificación o citación se hará por medio de oficio a la autoridad judicial o policial del lugar de su residencia. Si se hallare en otra jurisdicción, se verificará por exhorto.

Art 94. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos que deban practicarse en el extranjero se harán por los trámites prescriptos en los tratados y, en su defecto, se estará a los reglamentos diplomáticos al principio de la reciprocidad o a la práctica de las naciones.

Art. 95. Practicada la notificación, citación o emplazamiento, o hecha constar la causa que lo hubiere impedido, se unirá a los autos la cédula, el oficio o exhorto diligenciado.

Art. 96. Serán nulas las notificaciones, citaciones y emplazamientos que no se practiquen con arreglo a lo dispuesto en este Código. Serán igualmente nulas las actuaciones que se practiquen con posterioridad a la diligencia anulada, siempre que tengan con ella relación directa. Sin embargo, cuando la persona notificada, citada o emplazada, se hubiere dado por enterada en el juicio, de la providencia o mandato judicial que dió causa a la diligencia nula, surtirá ésta desde entonces sus efectos.



Art. 97. La citación por edictos procederá respecto del procesado cuyo paradero se ignore y que no ha podido ser notificado.

Los edictos se publicarán durante el término del emplazamiento en dos diarios o periódicos, y, en su defecto, se fijarán en los parajes públicos del lugar del delito, y contendrán:

- 1.º La designación del juez que conociere de la causa;
- 2.º El nombre y apellido del emplazado;
- 3.º El delito por el que se le procesa;
- 4.º El término dentro del cual deberá presentarse, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde;
- 5.º La fecha en que se expide; y
- 6.º La firma del secretario.

Art. 98. Un número de cada periódico en que se haga la publicación y los recibos expedidos por las imprentas respectivas serán agregados a los autos.

En la Capital de la República uno de los diarios será el Boletín Judicial.

Art. 99. El término del emplazamiento será de treinta días, contados desde la primera publicación.

Art. 100. El empleado que practique notificaciones, citaciones y emplazamientos, contra las disposiciones de este Código, a más de responder de los perjuicios que cause á las partes, incurrirá en una multa de cincuenta a doscientos pesos, salvo que la gravedad de la falta justifique la destitución, la cual deberá decretarse siempre en caso de reincidencia.

TÍTULO VIII

COSTAS PROCESALES

Art. 101. En todo auto o sentencia que ponga término á la causa, o a cualquiera de sus incidentes,



deberá resolverse sobre el pago de las costas, que serán siempre a cargo de la parte vencida.

Art. 102. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los representantes del ministerio fiscal, sólo serán condenados en costas en caso de notorio desconocimiento de las leyes. En el mismo caso serán condenados en costas los abogados que intervengan en los procesos.

Art. 103. Las costas consistirán en el pago de todos los gastos originados en el juicio a la parte vencedora.

Art. 104. La importancia de los honorarios de los abogados, procuradores, peritos y demás personas que hayan intervenido en las diligencias procesales, será determinada en la forma establecida por las leyes de procedimientos civiles, sin que ello paralice la prosecución de la causa.

TÍTULO IX.

REBELDÍA O CONTUMACIA

Art. 105. Será declarado rebelde el procesado:

- 1.º Si notificado en forma, no compareciere;
- 2.º Si fugare del establecimiento en que se halle preso; y
- 3.º Si hallándose en libertad provisoria, no concurriese al llamado judicial.

Art. 106. El juez, al declarar la rebeldía, ordenará la detención del procesado.

Art. 107. Ni la citación del procesado, ni su rebeldía paralizarán el sumario. Terminado éste o inmediatamente, si la rebeldía fuese declarada durante el plenario, se suspenderá, en cuanto a él, el curso de la causa, hasta su presentación o detención; pero continuará respecto de los demás procesados, si los hubiere.



LIBRO. SEGUNDO

SUMARIO

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 108. El sumario tiene por objeto:

- 1.º Comprobar la existencia de un hecho punible;
- 2.º Acumular las circunstancias que puedan influir en su calificación legal;
- 3.º Descubrir sus autores, cómplices y encubridores;
- 4.º Practicar las diligencias necesarias para la detención de los delincuentes; y
- 5.º Asegurar su responsabilidad pecuniaria y reunir elementos para apreciar la extensión del daño causado, cuando la reparación de éste se reclame ante el juez que lo instruye.

Art. 109. El sumario puede iniciarse:

- 1.º Por denuncia;
- 2.º Por querrella;
- 3.º Por prevención;
- 4.º Por excitación fiscal; y
- 5.º De oficio.

Art. 110. En la formación del sumario intervendrán el fiscal, el querellante, el procesado o su defensor, y el damnificado que ejerza la acción civil



quienes podrán hacer las indicaciones y proponer las diligencias que juzguen convenientes, aún en el caso y durante el tiempo en que el sumario se mantenga secreto. La negativa del juez a decretar dichas diligencias no dará lugar a recurso alguno.

También intervendrá, con las mismas facultades, el tercero civilmente responsable que haya sido citado o se haya hecho parte espontáneamente.

Art. 111. No podrán tomar conocimiento del sumario sino las partes que intervienen en él. La violación de esta regla será corregida disciplinariamente por el juez o tribunal respectivo.

Art. 112. El sumario será secreto para las partes, únicamente cuando el juez así lo declare, por considerar que la noticia de sus constancias pueda entorpecer sus objetos. El secreto se mantendrá por un término de cinco días, que podrá ser extendido hasta quince, con autorización verbal del presidente de la cámara de apelación. Esta autorización será anotada en los autos. Si no existiera cámara de apelación en el lugar donde se instruye el sumario, la prórroga podrá decretarse por el mismo juez en auto motivado. El sumario nunca será secreto para el fiscal.

Art. 113. Cuando se proceda por denuncia o que-rella, éstas servirán de base al procedimiento.

Cuando se proceda por prevención de los funcionarios de policía, el sumario comenzará con las actuaciones practicadas por ellos.

Cuando se proceda de oficio o a excitación del ministerio fiscal, formará respectivamente la cabeza del proceso, el auto que ordene la instrucción del sumario o la petición fiscal.



TÍTULO II

DENUNCIA

Art. 114. Toda persona que tuviere conocimiento de la perpetración de un delito que dé lugar a la acción pública, podrá denunciarlo:

- 1.º Al juez competente;
- 2.º A los funcionarios del ministerio fiscal; y
- 3.º A la policía.

Art. 115. La denuncia debe contener, en cuanto sea posible:

- 1.º La relación circunstanciada del hecho reputado criminoso, con expresión del lugar, tiempo y modo como fué perpetrado y con qué instrumentos;
- 2.º Los nombres de los autores, cómplices y auxiliaadores en el delito, así como de las personas que pudieren tener conocimiento de la perpetración; y
- 3.º Todas las indicaciones que puedan conducir a la comprobación del delito, a la determinación de su naturaleza o gravedad y a la averiguación de las personas responsables.

Art. 116. La denuncia podrá hacerse personalmente o por medio de mandatario con poder especial, por escrito o verbalmente.

Art. 117. La denuncia por escrito deberá firmarse por quien la haga o por otro a su ruego en caso de imposibilidad. El funcionario que la reciba rubricará y sellará todas las hojas en presencia del denunciante quien podrá hacer otro tanto.

Art. 118. La denuncia verbal se hará constar en acta que firmarán el funcionario que la reciba y el denunciante. Si éste no supiere o no pudiere firmar lo hará otro a su ruego.



Art. 119. En caso de denuncia hecha por mandatario se agregará a la denuncia el testimonio del poder.

Art. 120. La identidad de la persona que hace la denuncia, si no constare al funcionario que la recibe, será justificada por la libreta de enrolamiento u otros documentos fehacientes, por testigos o por juramento en último caso.

Art. 121. El denunciante podrá exigir que se le expida un certificado en que conste lo substancial de la denuncia, y la fecha y hora de su presentación.

Art. 122. No se admitirán denuncias de descendientes contra ascendientes, consanguíneos o afines, y viceversa, ni de un cónyuge contra otro, ni de hermano contra hermano.

Esta prohibición no comprende la denuncia por delito ejecutado contra el denunciante, o contra una persona cuyo parentesco con el denunciante sea más próximo que el que lo liga con el denunciado.

Art. 123. Todo empleado público que en ejercicio de sus funciones adquiriera el conocimiento de un delito, que dé nacimiento a la acción pública, estará obligado a denunciarlo. ●

Art. 124. Los médicos, parteras y farmacéuticos y demás personas que profesan cualquier ramo del arte de curar, denunciarán dentro de veinticuatro horas, o inmediatamente en caso de peligro, los hechos delictuosos que hubieren llegado a su conocimiento en razón del ejercicio profesional.

Art. 125. Cuando sean varios los que hayan concurrido a la curación o asistencia de la persona lesionada, todos están obligados a hacer la denuncia prescripta en el artículo anterior.

Art. 126. Se exceptúa de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, el caso en que las personas mencionadas hubieran tenido conocimiento del delito por



revelaciones que les fueren hechas bajo el secreto profesional.

Art. 127. Si durante el viaje de un tren se cometiera un delito, o por algún accidente se produjera muerte o lesión, el jefe del convoy deberá proceder en la forma que se establece para los funcionarios de policía, y denunciar inmediatamente el hecho a la autoridad más próxima.

Art. 128. El denunciante no contrae obligación que lo ligue al procedimiento judicial, ni incurre en responsabilidad alguna, salvo el caso de calumnia.

TÍTULO III

QUERRELLA

Art. 129. La persona ofendida por un delito que no dé lugar a la acción pública, podrá constituirse en querellante y promover en tal carácter el juicio criminal.

El mismo derecho tienen los representantes legales de los incapaces, por los delitos cometidos contra sus representados.

Art. 130. El particular querellante quedará sometido a la jurisdicción del juez que conociere de la causa, en todo lo relativo al juicio y a sus consecuencias legales. Deberá fijar un domicilio, que se considerará subsistente mientras no determine otro.

Art. 131. El querellante, para ausentarse del país o fijar su residencia habitual fuera del lugar de la jurisdicción del juzgado, deberá previamente:

- 1.º Comunicar al juez su propósito, con la anticipación necesaria para que las partes puedan pedir y ejecutar las diligencias de prueba que reclamen su presencia;
- 2.º Prestar la declaración que se le solicite;
- 3.º Designar representante; y



- 4.º Dar la fianza de arraigo que el juez determine, sin recurso alguno. Si no llenase estos requisitos, se le tendrá por desistido de la querella, con costas.

Art. 132. El querellante podrá apartarse de la querella en cualquier estado de la causa, quedando, sin embargo, sujeto al pago de las costas y a las responsabilidades que pudieran resultarle por sus actos anteriores.

Art. 133. Se tendrá por abandonada la querella, cuando por muerte o por haberse incapacitado el querellante, no compareciere ninguno de sus herederos o representantes legales a sostenerla, dentro de los sesenta días siguientes a aquel en que la muerte o incapacidad hubieren ocurrido.

Art. 134. La querella se promoverá por escrito, personalmente o por mandatario con poder especial, y deberá contener:

- 1.º El nombre, apellido y domicilio del querellante;
- 2.º El nombre, apellido, y domicilio del querellado. En caso de ignorarse estas circunstancias, se deberá hacer la designación del querellado, por las señas que pudieran darle á conocer;
- 3.º La relación detallada del hecho, con expresión del lugar, año, mes, día y hora en que se ejecutó, si se supiere;
- 4.º La expresión de las diligencias que deban practicarse para la comprobación del hecho; y
- 5.º La firma del querellante y, si no supiere o no pudiere firmar, la de otra persona a su ruego, puesta en presencia del secretario del juzgado.

El querellante podrá también pedir que se proceda a la detención o prisión del presunto culpable, y al



embargo de sus bienes para cubrir su responsabilidad. Podrá, asimismo, intentar la acción civil, y pedir la citación de terceros responsables.

Art. 135. El querellante intervendrá como parte en todo el procedimiento.

Si los querellantes fueren varios, el juez ordenará que unifiquen la representación, salvo que entre ellos no hubiere identidad de intereses o de acción.

Art. 136. Cuando resultase calumniosa la imputación, el querellante quedará sometido á las responsabilidades consiguientes.

TÍTULO IV

PREVENCIÓN

Art. 137. En los delitos que den nacimiento a la acción pública, los funcionarios de policía tendrán las siguientes obligaciones y facultades:

- 1.º Averiguar los que se cometan en el distrito de su jurisdicción;
- 2.º Recibir las denuncias que se les hicieren;
- 3.º Verificar sin demora las diligencias necesarias para hacer constar las huellas del delito, cuando haya riesgo de que desaparezcan. Si el retardo no ofreciese peligro, se limitarán a tomar las medidas necesarias a fin de que las huellas se conserven, y que el estado de los lugares no sea modificado;
- 4.º Proceder a la detención del presunto culpable, en los casos que este Código lo autoriza;
- 5.º Recoger las pruebas y demás antecedentes que puedan adquirir en los primeros momentos siguientes a la ejecución del hecho, y practicar las diligencias urgentes que se consideren necesarias para establecer su existencia y determinar los culpables;



- 6.º Poner en conocimiento del juez competente, por telégrafo, inmediatamente después de recibidas, las denuncias o informaciones sobre delitos;
- 7.º Proceder a los exámenes, indagaciones y pesquisas que juzguen necesarias, recibiendo las declaraciones de los ofendidos y demás informes, noticias y esclarecimientos;
- 8.º Secuestrar los instrumentos del delito, o cualquier otro objeto útil para los fines de la indagación;
- 9.º Conservar incomunicado al delincuente, si la investigación lo exigiere;
10. Impedir, si lo juzgan conveniente, que ninguna persona se aparte del lugar del delito o sus adyacencias, antes de concluir las diligencias de investigación; y
11. Hacer uso de la fuerza, cuando fuese indispensable para el desempeño de sus atribuciones.

Art. 138. La intervención conferida a los funcionarios de policía en la prevención del sumario, cesará luego que se presente a instruirlo el juez a quien corresponda. La policía, sin embargo, continuará como su auxiliar, si así se ordenare.

Las diligencias practicadas, los instrumentos y efectos del delito y los delinquentes, deberán ponerse en el acto a disposición de dicho juez.

Los jueces de la Capital de la República y los de sección que tengan su sede en el lugar donde se perpetró el delito, deben tomar la dirección del sumario, actuando personalmente, dentro de ocho horas de recibir la comunicación referida en el inciso 6.º del artículo anterior. Los demás jueces procederán del mismo modo, una vez que reciban el sumario de prevención.



Art. 139. Los funcionarios a quienes corresponda la instrucción de las primeras diligencias, podrán ordenar, en caso de urgencia, que les acompañen uno o dos médicos, para prestar los auxilios de su profesión. Los médicos que requeridos, aún verbalmente, se negasen a ello, incurrirán en una multa de cincuenta a doscientos pesos.

Art. 140. Las autoridades encargadas de los edificios y establecimientos públicos a que la policía no tuviese libre acceso, no podrán oponerse a su entrada para los fines del sumario, sino con causa justificada.

Art. 141. Cuando fuere necesario para los mismos fines penetrar en el domicilio de algún particular, deberán recabar del juez competente la respectiva orden de allanamiento.

Art. 142. No se requiere orden de allanamiento:

- 1.º Cuando algún testigo declarase haber visto que una o más personas han penetrado a una casa con manifiesta intención delictuosa;
- 2.º Cuando se introduzca en la casa una persona, a quien se persigue para su detención por un delito; y
- 3.º Cuando se oigan voces dentro de la casa que hagan presumir la comisión de algún delito, o cuando se pida socorro.

Art. 143. El sumario de prevención deberá contener:

- 1.º El lugar, día, mes y año en que se inicie;
- 2.º El nombre, profesión, estado y domicilio de cada una de las personas que en él intervengan;
- 3.º El juramento de los peritos y testigos;
- 4.º La declaración, informe o dictamen de los peritos y del ofendido, deposiciones, informaciones, y resultado de cualquier diligencia tendiente a realizar los objetos del sumario; y
- 5.º La firma de todos los que intervengan en



el proceso, o la mención de los que no supieren ó no pudieren hacerlo.

Art. 144. En el sumario de prevención, se observarán las mismas formalidades que deben llenar los jueces de instrucción, en cuanto fueren aplicables.

Art. 145. Concluidas las diligencias urgentes del sumario de prevención, será remitido en el día al juez competente, si éste no tuviese el asiento de su juzgado en el lugar donde se inicie el proceso.

Art. 146. Cuando los funcionarios de policía no dieren cuenta al juez que corresponda en el acto de tener conocimiento de la perpetración de un delito que dé lugar a la acción pública, o no remitiesen el sumario de prevención inmediatamente después de terminadas las diligencias urgentes, el mismo juez podrá aplicarles una corrección disciplinaria, o formarles proceso, si hubiere mérito para ello.

TÍTULO V

EXCITACIÓN FISCAL

Art. 147. Los representantes del ministerio fiscal que tengan noticia de la perpetración de un delito de carácter público, dentro del territorio en que ejerzan sus funciones, instarán por escrito la formación del sumario, poniendo los hechos en conocimiento del juez, y solicitando las diligencias de prueba pertinentes.

TÍTULO VI

PROCEDIMIENTO DE OFICIO

Art. 148. Los jueces que, por cualquier medio que no sea de los indicados en los cuatro títulos anteriores, tuvieren noticia de la perpetración de un delito públi-



co cuyo juzgamiento les competa, procederán de oficio a la formación del sumario correspondiente.

Art. 149. El auto cabeza de proceso, deberá contener en lo posible:

- 1.º La determinación del hecho punible;
- 2.º El tiempo en que ha llegado a noticia del juez;
- 3.º La designación del lugar en que ha sido ejecutado; y
- 4.º La orden de proceder a las diligencias que se consideren necesarias.

TÍTULO VII

INSTRUCCIÓN

Art. 150. La instrucción del sumario corresponde al juez a quien competa el juzgamiento del delito, con excepción de lo dispuesto para los jueces ordinarios de la Capital de la República. Todas las diligencias serán autorizadas por un secretario.

Art. 151. El juez examinará las diligencias iniciales del sumario y, si lo considera pertinente, decretará su instrucción. Si los hechos que lo motivan no constituyesen delito, o no fuese competente para entender en él, no hará lugar a la formación del proceso. El auto denegatorio será apelable en relación y tendrá la fuerza de un sobreseimiento provisional.

Art. 152. El juez puede ordenar que se ratifiquen total o parcialmente las diligencias del sumario de prevención, cuando hubiere motivo fundado para ello.

Art. 153. De oficio o a petición de parte, el juez dispondrá la realización de las diligencias que reputa convenientes. El auto denegatorio será inapelable.

Art. 154. En los casos de delitos contra la propiedad, el damnificado tendrá intervención en el suma-



rio, aunque no deduzca acción civil, a objeto de hacer constar la propiedad de la cosa y su restitución, cuando fuere posible.

Art. 155. Cuando sea necesario practicar diligencias fuera del lugar en que tenga su asiento el juez, se solicitarán por oficio u exhorto, en el que se consignará que esas diligencias son reservadas para quienes no intervengan en ellas.

Art. 156. Cuando el delito hubiese dejado pruebas materiales, el juez las hará constar en el sumario, conservándolas para el plenario, si fuere posible.

Art. 157. El juez describirá el estado y circunstancias de la persona o cosa objeto del delito, en cuanto tuvieren relación con el hecho punible.

En los casos de muerte por heridas, deberá consignar con intervención de peritos, la naturaleza, situación y número de aquellas, haciendo constar la posición en que se hubiere encontrado el cadáver y la dirección de los rastros de sangre y demás que se notaren.

Art. 158. Si para la apreciación del delito o sus circunstancias, conviniera el reconocimiento de un lugar, el juez hará consignar en los autos su descripción.

Art. 159. El juez procurará recoger, en los primeros momentos, las armas, instrumentos u objetos que puedan tener relación con el delito, extendiendo diligencia que exprese el lugar, tiempo, ocasión en que se encontraren y descripción de los mismos. La diligencia será firmada por la persona en cuyo poder fueren hallados, notificándosele el auto en que se mande recogerlos.

Art. 160. Inmediatamente de hacerse las descripciones prescriptas en los artículos anteriores, serán examinadas las personas que puedan declarar acerca del delito y de las causas de las alteraciones que se observaren en los lugares, armas, instrumentos o



efectos, y acerca de su estado anterior. A tales fines podrá ordenarse que no se ausenten, durante la diligencia de la descripción, las personas presentes en el lugar, y que comparezcan inmediatamente las que se encuentren en cualquier otro.

Art. 161. Los instrumentos, armas y objetos a que se refiere el artículo 159, se sellarán, si fuere posible, ordenándose su conservación. Exceptúanse los objetos que estaban en poder del damnificado o de terceros, los cuales les serán restituidos salvo que la retención sea indispensable. Las reclamaciones sobre devolución de esos objetos se ventilarán sumariamente por cuerda separada y la resolución será apelable.

Art. 162. Cuando fuere conveniente, se levantará el plano del lugar, o se tomará la fotografía de las personas objeto del delito, o el diseño de los efectos o instrumentos del mismo.

Art. 163. Cuando no hayan quedado huellas del delito, el juez averiguará si la desaparición ha ocurrido natural, casual o intencionalmente.

Art. 164. Cuando el delito fuere de los que no dejan huellas, el juez procurará hacer constar la ejecución del hecho y sus circunstancias, y si hubiese tenido por objeto la sustracción o destrucción de una cosa, se hará también constar su preexistencia.

Art. 165. Si la causa fuere por homicidio y la presunta víctima desconocida, se procurará identificarla por medio de testigos. En defecto de éstos, si el estado del cadáver lo permitiere, se expondrá al público antes de practicarse la autopsia, por un término no menor de veinticuatro horas, expresando en un cartel, que se fijará a la puerta del depósito de cadáveres, el sitio, hora y día en que aquél hubiese sido hallado, y el juez que estuviere instruyendo el sumario, a fin de que, quien tuviera algún dato que pueda contribuir a la identificación o al esclarecimiento del delito y sus



circunstancias, lo comunique a la autoridad; todo ello sin perjuicio de los demás medios que se reputen conducentes a esos fines. Cuando a pesar de tales previsiones, no fuera el cadáver reconocido, el juez tomará las medidas pertinentes para que la ropa y demás objetos encontrados, puedan servir oportunamente para hacer la identificación.

Art. 166. En caso de que no aparezca inequívoca la causa de la muerte, se procederá a la autopsia del cadáver en presencia del juez, siempre que fuere posible, por los médicos de los tribunales o en su caso, por los que se designen, los cuales informarán sobre la operación, la naturaleza de las lesiones, el origen del fallecimiento y sus circunstancias.

En todos los casos, sea cual fuere el procedimiento empleado para el reconocimiento de las lesiones, los peritos deben manifestar si, en su opinión, la muerte ha sobrevenido a consecuencia de aquellas, o si ha sido el resultado de causas preexistentes o posteriores, extrañas al hecho consumado.

Art. 167. Tratándose de lesiones, el juez ordenará que los peritos determinen su importancia, la posibilidad y término probable de su curación, los órganos afectados, las consecuencias que puedan producir en la salud del ofendido o en su capacidad para el trabajo y demás circunstancias que contribuyan a determinar la gravedad del delito.

Art. 168. En los casos de infanticidio, el juez hará que los peritos expresen la época probable del parto, declarando si la criatura ha nacido viva, las causas que hayan podido producir la muerte, y si en el cadáver se notan o no lesiones.

Art. 169. En los casos de aborto, se harán constar los signos demostrativos de la expulsión violenta del feto, la época del embarazo, las causas que hayan determinado el delito y si ha sido provocado por la ma-



dre o por algún extraño, de acuerdo o contra la voluntad de aquella.

Art. 170. Cuando aparecieren indicios de envenenamiento, se recogerán las substancias que se presumasen nocivas, y se practicará su análisis por peritos que lo verificarán con asistencia de las personas en cuyo poder se hubiesen hallado, si estas lo solicitaren. Si la víctima hubiere fallecido, se ordenará la autopsia y el análisis de los órganos o substancias que puedan revelar la existencia del veneno.

Art. 171. En los delitos contra la propiedad, deberá comprobarse la existencia anterior y la desaparición de las cosas objeto del delito. En defecto de otra prueba, se admitirá la declaración jurada del dueño, siendo persona de notoria honradez que verosímilmente haya podido estar en posesión de las cosas robadas o substraídas.

Art. 172. Si se trata de hechos cometidos con efraacción, violencia o escalamiento, deberá dejarse constancia de los antecedentes que demuestren esas modalidades, a cuyo fin el juez sumariante deberá practicar una inspección ocular. Esta inspección sólo podrá ser delegada cuando el delito se haya producido fuera del asiento del juzgado.

Art. 173. En los casos de incendio, se hará constar el lugar, la manera y el momento en que se ha cometido, la calidad de las materias empleadas en su ejecución, el mayor o menor peligro para la vida de las personas o para la ruina o deterioro de las propiedades, las desgracias personales que haya producido, el sitio en que empezó el fuego, la causa de su desarrollo y si pudo o no fácilmente extinguirse. Deberá determinarse igualmente la importancia aproximativa de los daños y perjuicios ocasionados.

Art. 174. En los delitos no previstos en los artículos anteriores, que causen daño o pérdida, o entrañen



amenaza de peligro para los bienes, deberá compararse la fuerza o la astucia empleada, los medios o instrumentos de que se hayan servido los delincuentes, la existencia del daño recibido o por recibirse y la gravedad del perjuicio para la propiedad, o para la vida, la salud o la seguridad de las personas.

Art. 175. Cuando para la calificación del delito fuese necesario estimar el valor de la cosa que hubiere sido su objeto, o el importe del perjuicio causado, o que hubiere podido causarse, el juez dispondrá con audiencia del perjudicado el reconocimiento pericial.

Art. 176. La confesión del procesado no eximirá al juez de practicar las diligencias prescriptas en este título.

TÍTULO VIII

DECLARACIÓN INDAGATORIA

Art. 177. Cuando resulten indicios suficientes de la responsabilidad criminal de una persona, el juez procederá a recibirle declaración.

Esta diligencia no podrá delegarse en circunstancia alguna.

Art. 178. Si el presunto culpable estuviese privado de su libertad, el juez recibirá la declaración dentro del término de 24 horas, contado desde el momento en que se encuentre detenido en el lugar donde el juzgado funciona. Este término podrá prorrogarse por otras 24 horas, cuando el procesado lo solicite para nombrar defensor.

Art. 179. Si el procesado se negase a declarar, se hará así constar en el acta respectiva. El silencio del interrogado no hará presunción alguna en su contra.



Art. 180. No se exigirá al procesado juramento ni promesa de decir verdad.

Art. 181. El presunto delincuente será preguntado por su nombre y apellido, sobrenombre o apodo, edad, estado, profesión u oficio, nacionalidad, domicilio, residencia, antecedentes personales y demás pormenores que puedan conducir a descubrir el delito, su ejecución y las circunstancias que le hayan precedido, acompañado o seguido y que sirvan para establecer la gravedad del hecho y la culpabilidad o inculpabilidad. Se le exhibirán en el mismo acto, para su reconocimiento, los instrumentos del delito y objetos que con ellos tengan relación.

Art. 182. Las preguntas serán siempre claras y precisas y no podrá emplearse con el procesado género alguno de coacción, amenaza o promesa.

Art. 183. El juez que infringiere las prohibiciones establecidas en los artículos anteriores de este título será corregido disciplinariamente, sin perjuicio de las sanciones que correspondan si incurriese en mayor responsabilidad.

Art. 184. El juez deberá suspender el examen del procesado, cuando éste se encontrase fatigado, o hubiese perdido la serenidad de juicio necesaria para continuar la declaración.

Art. 185. No se obligará al procesado a contestar precipitadamente. Las preguntas le serán repetidas siempre que parezca que no las ha comprendido.

Art. 186. El procesado tendrá derecho de hacer constar lo que considere conveniente para su descargo o para la explicación de los hechos, y se evacuarán las citas que haga y demás diligencias que proponga, si el juez las estima conducentes.

Art. 187. La declaración indagatoria se escribirá en los términos en que se produzca y, una vez concluida, la leerá el actuario, o el procesado o su defen-



sor, si éstos últimos así lo solicitaren. El juez deberá prevenir al declarante que le asiste ese derecho y el de rubricar las fojas respectivas, o el de pedir al juez que lo haga, si no supiere o no pudiese firmar; de todo lo cual se dejará constancia bajo pena de nulidad.

Art. 188. Si el declarante no se ratifica en sus manifestaciones o tuviere algo que agregar, se consignarán las observaciones al final del acta, sin hacer enmendaturas a lo escrito.

Art. 189. La declaración será firmada por el juez y demás personas que intervengan. Si el interrogado no pudiese o no quisiere firmar, se hará mención de ello, y la declaración valdrá como si hubiere sido firmada.

Art. 190. No se harán enmiendas, raspaduras o correcciones en el acta de la declaración, debiendo salvarse al final las faltas o errores que se hubieran cometido.

Art. 191. Si el interrogado no entendiase el idioma nacional, será examinado por intermedio de un intérprete, que prestará juramento de desempeñar fielmente el cargo. El nombramiento recaerá, siempre que fuere posible, en un perito diplomado.

Art. 192. Si el interrogado fuere sordomudo se le harán por escrito las preguntas, para que las conteste en igual forma. Si no supiere escribir, se nombrará un intérprete, por cuyo conducto se le harán las preguntas y se recibirán sus contestaciones. El nombrado prestará juramento en presencia del sordomudo.

Art. 193. El procesado podrá declarar cuantas veces quiera ante el juez sumariante.

Art. 194. Concluida la declaración indagatoria, o negándose a prestarla, se hará saber inmediatamente al procesado la causa de la formación del proceso o de su detención. Se le hará conocer asimismo el derecho que tiene de nombrar defensor, si no lo hubiere designado con anterioridad. El nombramiento podrá hacerse en el mismo acto.



TÍTULO IX

INCOMUNICACIÓN

Art. 195. La incomunicación podrá ser decretada durante la instrucción del sumario cuando se requiera para los fines de la investigación, lo cual se expresará en la resolución que la ordene. La incomunicación no rige respecto de los defensores.

Art. 196. La incomunicación podrá decretarse por cinco días y prorrogarse por igual término, en auto motivado y bajo la responsabilidad del juez o funcionario que la disponga.

Art. 197. Se permitirá al incomunicado el uso de libros, útiles de escribir y demás objetos compatibles con la incomunicación y seguridad del procesado. Se le podrá permitir igualmente la ejecución de actos jurídicos urgentes, que no afecten su solvencia a los efectos de la responsabilidad civil, ni perjudiquen los propósitos del sumario. La resolución denegatoria será inapelable.

TÍTULO X

CIRCUNSTANCIAS PERSONALES DEL PROCESADO

Art. 198. El juez procurará comprobar las circunstancias personales del procesado que puedan influir en la determinación de su responsabilidad y, a ese fin, podrá pedir y recibir informes sobre la moralidad, conducta y demás antecedentes de éste.

Art. 199. Todo procesado será sometido a examen médico para comprobar el estado de sus facultades. Mientras no exista en los establecimientos de detención, número suficiente de médicos, solo será obligatorio el examen cuando se trate de determinar el grado



de discernimiento de los menores de acuerdo con el Código Penal, o de los mayores de setenta años, cuando los procesados ofrezcan indicios de alteración en sus facultades mentales, cuando se trate de sordomudos, o cuando lo solicitare el defensor o el ministerio fiscal.

Art. 200. Si se comprueba que el procesado se halla afectado de enagenación mental, se hará constar en el informe su calificación científica y si es anterior o posterior al hecho delictuoso.

Art. 201. Si se advirtiesen en el procesado indicios de enagenación mental, el juez suspenderá la declaración indagatoria hasta tanto se practique el informe médico, sin que esto obste a la detención e información.

TÍTULO XI

IDENTIDAD DEL DELINCUENTE

Art. 202. Detenida una persona, se procederá a identificarla.

Art. 203. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el juez ordenará el reconocimiento de todo procesado por quien lo denuncie o acuse, por el damnificado, si fuere posible, y por los testigos de cargo.

Art. 204. Cuando se trate de detenidos cuyo nombre se ignore o fuera común a varios, se observarán en el reconocimiento las siguientes precauciones:

- 1.º Que la persona objeto de él no se desfigure;
- 2.º Que se presente acompañada con otras, vestidas de una manera semejante, en cuanto fuere posible; y
- 3.º Que sus acompañantes sean de una clase social análoga.



Art. 205. Colocadas en fila la persona que deba reconocerse y quienes la acompañen, se hará comparecer al declarante y después de tomarle juramento, se le preguntará:

- 1.º Si persiste en su declaración anterior;
- 2.º Si después de ella ha visto a la persona a quien atribuye el hecho, en qué lugar, por qué motivo y con qué objeto; y
- 3.º Si entre las personas presentes se encuentra la que designó en su declaración o imputación.

Si contesta afirmativamente la última pregunta, se le prevendrá que designe al que tiene por delincuente y que manifieste las diferencias o semejanzas que observe entre el estado actual de la persona señalada y el que tenía en la época a que su declaración o imputación se refirió.

Art. 206. Cuando fueren varios los que hubieren de hacer el reconocimiento, la diligencia deberá practicarse separadamente con cada uno de ellos, sin que puedan comunicarse entre sí hasta que lo haya efectuado el último. Si fueren varios los que hubieren de ser reconocidos por una misma persona, podrá hacerse el reconocimiento de todos en un solo acto.

TÍTULO XII

TESTIGOS

Art. 207. El juez procederá a recibir declaración a las personas indicadas por los que intervengan en el proceso y a las que él creyese que tienen conocimiento del delito.

Si algún testigo de los expresamente indicados no fuese examinado, se dejará constancia de la causa que haya obstado al examen.



Art. 208. Todo habitante del país que no esté legalmente impedido, tendrá obligación de concurrir a declarar en juicio cuanto supiere sobre lo que le fuere preguntado.

Art. 209. El número de los testigos es ilimitado, mientras el juez considere que sus declaraciones son pertinentes a la formación del sumario.

Art. 210. No podrán ser admitidos como testigos:

- 1.º Los eclesiásticos, sobre los hechos que les hayan sido revelados en la confesión;
- 2.º Los empleados civiles y militares, sobre secretos que hayan conocido por razón de su cargo, a menos que fueren autorizados por sus superiores;
- 3.º Los defensores del inculpado sobre lo que les haya sido confiado en tal carácter;
- 4.º Los abogados, mandatarios, médicos, farmacéuticos, parteras y toda otra persona cuando se trate de hechos que les hayan sido revelados en el ejercicio de su profesión;
- 5.º Los que al tiempo de declarar no se encuentren, por su estado físico, moral o mental, en estado de hacerlo conscientemente;
- 6.º Los menores que no hayan cumplido quince años de edad. Sin embargo, podrán ser interrogados para simples indicaciones al solo efecto de la indagación sumaria;
- 7.º El cónyuge del acusado, aun cuando esté legalmente separado;
- 8.º Sus ascendientes y descendientes, legítimos o naturales;
- 9.º Sus hermanos legítimos o naturales;
- 10.º Sus afines hasta el segundo grado; y
- 11.º Los tutores y pupilos, recíprocamente.

Art. 211. Las personas indicadas en los cinco últimos incisos del artículo anterior, podrán, sin embargo,



ser oídas como testigos en favor del procesado o cuando se trate de delito ejecutado contra una persona cuyo parentesco con el testigo sea más próximo que el que liga a éste con el procesado.

Art. 212. La citación de los testigos se hará en la forma determinada en el art. 91.

Art. 213. En los casos de urgencia, y dejándose constancia de ella, pueden citarse verbalmente a los testigos que se hallen en el lugar del juicio y obligarlos a comparecer en el acto. Mediando causas graves, podrán ser detenidos por el término indispensable hasta recibirles declaración.

Art. 214. El testigo sólo está obligado a declarar en el lugar de su residencia. Sin embargo, puede ser llamado al lugar donde se encuentra el juez sumariante:

- 1.º Cuando la distancia sea reducida o los medios de transporte fáciles; y
- 2.º Cuando la importancia de la causa lo haga necesario

Art. 215. Las causas a que se refiere el artículo anterior deberán ser apreciadas prudencialmente por el juez, así como la indemnización que deba darse al testigo, en caso que la reclame, por el tiempo de trabajo perdido y gastos de translación.

Art. 216. Cuando la declaración deba ser tomada fuera de la sede del juzgado, con el exhorto u oficio deberá acompañarse el interrogatorio a cuyo tenor se practicará el examen.

Art. 217. Cuando los testigos no puedan comparecer al juzgado por enfermedad o edad avanzada, la declaración les será recibida en su domicilio.

Art. 218. Serán examinados por oficio, salvo que prefieran serlo ante el juez:

- 1.º El Presidente y el Vicepresidente de la Nación, los ministros nacionales, los gobernado-



res y vicegobernadores de provincia y sus ministros, y los gobernadores de los territorios federales;

- 2.º Los miembros del Congreso y de las legislaturas de provincia;
- 3.º Los miembros del poder judicial de la nación, de las provincias y de los tribunales militares;
- 4.º Las dignidades del clero; y
- 5.º Los ministros diplomáticos y cónsules generales.

Art. 219. También podrán declarar por medio de oficio, los gerentes de banco, ferrocarriles o empresas análogas, cuando se trate de actos u operaciones referentes a los establecimientos que dirigen, si el juez no considerase necesaria la comparecencia.

Art. 220. Cuando el testigo no comparezca ni compruebe justa causa de inasistencia, será condenado al pago de las costas, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el art. 91.

Art. 221. Los testigos deben ser examinados personalmente por el juez en presencia del secretario, bajo pena de nulidad.

Art. 222. Mientras el sumario sea secreto sólo el fiscal podrá asistir a la declaración de los testigos, salvo los casos siguientes:

- 1.º Cuando el testigo sea ciego o no sepa leer ni escribir;
- 2.º Cuando sea mujer soltera;
- 3.º Cuando sea casada y ella o su marido quieran que esté acompañada; y
- 4.º Cuando ignore el idioma nacional o sea sordomudo, o sordo, o mudo simplemente.

En el primer caso, el juez nombrará, para que acompañe al testigo, otra persona que firmará la declaración después que aquel la hubiere ratificado.



En el segundo y tercero, la mujer o su marido podrán elegir persona que la acompañe. La elección no podrá recaer en los dependientes de la secretaría.

En el cuarto, se procederá con arreglo a lo establecido con respecto a la declaración indagatoria.

Art. 223. Antes de que el testigo declare, se le instruirá de las penas en que incurren los que se producen con falsedad.

Art. 224. Los testigos prestarán juramento o prometerán decir verdad en cuanto les fuere preguntado, en la forma autorizada por sus creencias religiosas o por su honor. Esta regla se aplicará a todos los casos en que este Código prescribe el juramento.

Art. 225. Una vez prestado el juramento, el testigo manifestará:

- 1.º Su nombre, apellido, edad, estado, profesión y domicilio;
- 2.º Si conoce o no al procesado y a las demás partes; y
- 3.º La vinculación de parentesco o negocio con el procesado o alguna de las partes, así como el grado de amistad o enemistad y demás circunstancias que puedan influir en el ánimo del testigo.

Art. 226. Hecha la manifestación anterior, el testigo será preguntado, exigiéndosele razón de su dicho:

- 1.º Por las circunstancias del delito, tiempo, lugar y modo como fué cometido;
- 2.º Cuando declare como testigo de vista, si estaban otras personas que también lo vieron y quiénes son; y
- 3.º Cuando declare de oídas, por la persona de quien tuvo la referencia, en qué tiempo y lugar, y si estaban presentes otras personas que también la oyeron y quiénes eran.



Art. 227. Si con motivo de la declaración, el testigo presentase algún objeto que pueda servir para hacer cargo al reo o para su defensa, se dejará constancia de su presentación y se agregará al proceso, siendo posible, o se conservará en la secretaría.

Si presentase algún documento, será rubricado por el juez y por el testigo o por el secretario en caso de que el declarante no supiere o no pudiese hacerlo.

Art. 228. Los testigos no podrán leer declaraciones que lleven escritas, pero podrá autorizárseles, según las circunstancias, a consultar anotaciones o documentos.

Art. 229. No se consignarán en los autos las declaraciones o la parte de ellas que, a juicio del juez, fueren inconducentes para la averiguación de los hechos.

Art. 230. El defensor del procesado y demás partes, cuando el sumario no sea secreto, y el fiscal, en todos los casos, podrán, con autorización y por intermedio del juez, dirigir preguntas a los testigos o solicitar nuevamente su presencia para ser interrogados.

Art. 231. Regirán para las declaraciones de los testigos, las disposiciones relativas a la declaración indagatoria, en cuanto fueren aplicables.

Art. 232. Si hubiere sospechas de que algún testigo se ha producido con falsedad se mandará formar por separado el proceso correspondiente.

Art. 233. Los jueces, al dictar pronunciamiento, apreciarán, según las reglas de la sana crítica, la fuerza probatoria de las declaraciones, teniendo en cuenta las condiciones personales de los testigos y las circunstancias expresadas en el inciso 3.º del artículo 225, en cuanto puedan ellas ser inspiradas por interés, afecto u odio.

Art. 234. Los jueces están facultados para solicitar toda clase de informes tendientes á justificar las condiciones personales de los testigos.

TÍTULO XIII

CAREOS



Art. 235. Cuando los testigos estén en desacuerdo acerca de algún hecho o circunstancia importante, el juez procederá a carearlos.

Art. 236. En el mismo acto sólo podrán carearse dos personas. Prestarán juramento y en seguida se dará lectura a las declaraciones que se reputen contradictorias, para que se expliquen a su respecto.

Art. 237. Se escribirán las preguntas y contestaciones que mutuamente se hicieren los testigos, haciéndose constar, además, las particularidades que sean pertinentes y se firmará por todos el acta respectiva, previa lectura y ratificación.

Art. 238. Si se hallase ausente algún testigo se leerá, al que estuviese presente, la parte de la declaración del otro que no concuerde con la suya y se consignarán las explicaciones que dé u observaciones que haga para confirmar, variar o modificar sus asertos anteriores.

Si subsistiera la disconformidad, se librará exhorto u oficio a la autoridad que corresponda, insertando la declaración del testigo ausente y la parte necesaria de la del presente, con las explicaciones ulteriores, a fin de que se complete la diligencia con las que dé el testigo ausente.

Art. 239. También podrán ser careados los procesados entre sí o con testigos, siempre que los primeros lo soliciten como medio de defensa. No se exigirá á los procesados juramento ni promesa de decir verdad.



TÍTULO XIV

CONFESIÓN

Art. 240. Toda manifestación del procesado por la cual se reconozca autor, cómplice o encubridor de un delito, surtirá los efectos de la confesión, siempre que concurren los requisitos siguientes:

- 1.º Que sea hecha ante juez competente;
- 2.º Que el hecho confesado sea posible, atendiendo a los circunstancias y condiciones personales del procesado; y
- 3.º Que la existencia del delito esté comprobada y la confesión concuerde con los demás antecedentes del proceso.

Art. 241. La confesión no puede dividirse en perjuicio de quien la presta. Los hechos y circunstancias que contenga, no importan excepciones cuya prueba incumba al acusado, salvo cuando por los antecedentes de éste y demás constancias de la causa resulten presunciones graves en su contra.

Art. 242. La confesión puede retractarse en cualquier estado del juicio, antes de la sentencia, siempre que el inculpado justifique que se ha producido por violencia, dádivas, promesas o error.

Art. 243. El incidente sobre retractación, se substanciará en pieza separada, sin que pueda suspender los procedimientos hasta el estado de sentencia.

TÍTULO XV

PERITOS

Art. 244. El juez ordenará el examen pericial, siempre que para apreciar un hecho fueren necesarios conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o industria.



Art. 245. Los peritos serán nombrados por el juez en el número que conceptúe necesario.

Art. 246. El nombramiento deberá recaer en peritos oficiales u oficinas técnicas dependientes de la administración. Solo a falta de éstos podrán designarse peritos que no formen parte del personal administrativo.

Art. 247. Los peritos deberán tener título de tales en la ciencia, arte o industria a que corresponda el punto objeto de la diligencia, si la profesión estuviere reglamentada. Si no lo estuviere o, si estándolo, no hubiese peritos diplomados en el lugar del juicio, podrán nombrarse personas idóneas.

Art. 248. Nadie puede negarse a desempeñar un servicio pericial, si no está legítimamente impedido. Si lo está, deberá manifestarlo en el acto de hacérsele saber el nombramiento.

La aceptación del cargo se hará bajo juramento.

Art. 249. El perito que, sin alegar excusa fundada, dejare de acudir al llamamiento del juez o se negare a prestar el informe, incurrirá en las responsabilidades señaladas para los testigos.

Art. 250. No podrán intervenir como peritos los que se encuentren afectados por alguna de las causas de recusación establecidas para los jueces.

Art. 251. Si el reconocimiento o informe pericial se repitiese en el plenario, los mismos peritos no podrán ser recusados a menos que hubiese causa sobrevenida.

Art. 252. La recusación de los peritos no suspende la diligencia si fuere urgente. En tal caso y si es posible, se designará otro perito acompañante, el cual deberá expedirse por separado.

Art. 253. La parte que intente recusar al perito o peritos nombrados, deberá hacerlo por escrito antes de empezar la diligencia, expresando la causa de la recusación y la prueba que tuviere.



El incidente de recusación se substanciará sumariamente y la decisión que recaiga no será apelable.

Art. 254. Las partes podrán nombrar peritos a su costa, que acompañen a los que el juez haya designado.

Art. 255. El juez fijará a los peritos los puntos sobre que deben informar, y les suministrará los datos que tuviere.

Art. 256. Los peritos desempeñarán conjuntamente su cometido. Las partes pueden concurrir a la diligencia y hacer observaciones, siempre que el juez no resuelva lo contrario.

Art. 257. Los peritos dictaminarán por escrito dentro del término que se les fije. El informe comprenderá, si fuere posible:

- 1.º La descripción de la persona o cosa objeto de la pericia;
- 2.º La relación detallada de las operaciones practicadas y su resultado; y
- 3.º Las conclusiones que formulen.

Art. 258. Cuando el juicio pericial recaiga sobre objetos que se destruyen al ser analizados, los jueces procurarán que se reserve una parte a los fines de un posible análisis ulterior.

Art. 259. Los peritos, con anuencia del juez, podrán consultar las actuaciones, bajo las reservas y las responsabilidades del caso, para imponerse por sí mismos de los antecedentes necesarios.

Art. 260. La fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el juez teniendo en consideración la competencia de los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones, los principios científicos en que se fundan y los demás elementos de convicción que el proceso ofrezca. Si no considerase concluyente ese dictamen, podrá designar nuevos peritos.



Art. 261. Los peritos tendrán derecho a cobrar honorarios, si no tuviesen retribución o sueldo del Estado. El incidente respectivo no paralizará la prosecución de la causa y correrá por cuerda separada.

TÍTULO XVI

PRUEBA INSTRUMENTAL

Art. 262. La fuerza probatoria de los instrumentos públicos o privados se rige por las disposiciones de las leyes civiles.

Art. 263. No podrá obligarse al procesado a reconocer documentos privados.

Art. 264. Los medios de prueba establecidos en materia civil para comprobar la autenticidad de los documentos privados, rigen también en materia criminal, salvo disposición en contrario.

Art. 265. Las cartas de tercero sólo podrán ser presentadas con el consentimiento de sus dueños o en virtud de mandato judicial.

TÍTULO XVII

PRESUNCIONES

Art. 266. La fuerza probatoria de las presunciones será apreciada por el juez conforme las reglas de la sana crítica.

TÍTULO XVIII

INTERCEPTACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Art. 267. El juez podrá decretar la interceptación, apertura y examen de la correspondencia postal y telegráfica que el procesado remitiere o que le fuese dirigida.

Art. 268. Recibida la correspondencia, el juez procederá a su apertura en presencia del secretario, dejando constancia. Leerá en reserva su contenido, y si ella no tuviera relación con el proceso, la remitirá al interesado. Si la tuviere, rubricará las fojas y ordenará la agregación a los autos.



TÍTULO XIX

REGISTRO DOMICILIARIO Y DE LUGARES PÚBLICOS

Art. 269. Los jueces, a instancia de parte o de oficio, pueden decretar el registro del domicilio del procesado o de cualquier otro lugar, cuando haya indicios suficientes para presumir que allí se encuentren el presunto delincuente o antecedentes útiles a los fines del sumario.

Art. 270. No podrán hacerse registros domiciliarios sino desde que sale hasta que se pone el sol. Se exceptúan de esta disposición:

- 1.º Los que deban practicarse en edificios o lugares públicos;
- 2.º Los que no admitan demora en su ejecución sin peligro de hacer ilusoria la diligencia;
- 3.º Los determinados en el artículo 142; y
- 4.º Los realizados con el consentimiento expreso del interesado.

Art. 271. Se consideran edificios o lugares públicos todos aquellos que no son destinados exclusivamente a habitación o residencia particular.

Art. 272. Para practicar registros en templos o lugares religiosos y en edificios públicos de la Nación, de las provincias o de los municipios, deberá darse aviso de atención a las personas a cuyo cargo estuvieren.

Art. 273. La resolución que disponga el registro domiciliario será fundada.



Art. 274. El juez expresará en todo auto que ordene registros, el lugar en que han de practicarse y el funcionario encargado de la ejecución, si delegare su cumplimiento.

Art. 275. Para practicar registros domiciliarios, la orden de allanamiento se notificará al interesado a fin de que pueda presenciarlo; en su ausencia, al representante y, en defecto de ambos, a cualquier persona que se encontrare en el lugar, prefiriendo las de la familia. Si no se hallare a nadie, se procederá a cumplir la diligencia sin más trámite. En todos los casos se dejará constancia del registro, que firmarán quienes lo presencien.

Art. 276. El funcionario que practique el registro recogerá los instrumentos, efectos del delito, libros, papeles y cualquier otra cosa que repunte de utilidad.

Estos objetos se inventariarán y quedarán a disposición del juzgado.

Los libros y papeles serán, además, foliados, sellados y rubricados en sus hojas útiles, por el secretario y también por el interesado o sus representantes así lo solicitasen.

TÍTULO XX

DETENCIÓN Y PRISIÓN PREVENTIVA

Art. 277. Fuera del caso de pena impuesta por sentencia, la libertad personal sólo puede restringirse con el carácter de detención o con el de prisión preventiva.

Art. 278. Procede la detención:

- 1.º En los casos de delito flagrante. A este efecto, el delito solo se considera flagrante respecto del que haya presenciado su perpetración;



- 2.º Cuando existan indicios vehementes de la culpabilidad de persona o personas determinadas;
- 3.º Cuando ocurrido un hecho aparentemente delictuoso, no fuera posible, en el primer momento, individualizar su autor y hubieren dos o más personas sobre quienes recaigan sospechas;
- 4.º Cuando, en el lugar de la ejecución de un delito, se encontrasen varias personas y se creyere necesario impedir que se retiren, hasta que se realicen las diligencias indagatorias que correspondan;
- 5.º Cuando hubiere temor fundado de que se oculte, fugue o ausente un testigo cuya declaración se considere necesaria; y
- 6.º En los demás casos expresamente determinados en este Código.

Art. 279. La detención, en los casos de los incisos 3.º, 4.º y 5.º del artículo anterior, solo podrá durar el tiempo absolutamente indispensable para practicarse la diligencia que la motiva, y no podrá exceder de veinticuatro horas.

Art. 280. La detención solo podrá practicarse por los agentes a quienes la ley faculte al efecto, pero cualquier persona podrá detener:

- 1.º Al que intente cometer un delito, en el momento de empezar a cometerlo;
- 2.º Al que sea sorprendido en delito flagrante; y
- 3.º Al procesado o penado que se fugase, o estuviera en rebeldía.

Art. 281. El conductor o jefe del tren tendrá las mismas facultades de los agentes de policía para detener a los autores de delitos cometidos durante el viaje; pero deberá entregarlos a la autoridad más próxima, con la denuncia respectiva.



Art. 282. Cuando un particular detiene a otro, está obligado a entregarlo inmediatamente al juez o agente policial más próximo.

Art. 283. Si el juez a quien se entregue el detenido no fuere competente, extenderá diligencia donde conste la persona que hubiere efectuado la detención, su domicilio y demás elementos para identificarla, los motivos que han determinado la detención y el nombre y apellido del detenido. Inmediatamente después éste será puesto a disposición del juez competente.

Art. 284. El juez podrá en cualquier momento dejar sin efecto la detención, si considera que no hay motivo para mantenerla.

Art. 285. La prisión preventiva se decretará cuando medien conjuntamente estos requisitos:

- 1.º Que haya indicios vehementes de la existencia de un delito y de la responsabilidad del procesado; y
- 2.º Que se haya tomado a éste declaración indagatoria o se haya negado a prestarla.

Cuando el procesado no concurra al llamado judicial podrá decretarse la prisión preventiva sin este último requisito.

Art. 286. La prisión preventiva se decretará por auto motivado.

Art. 287. La orden de detención o prisión contendrá en lo posible:

- 1.º El nombre del juez que la ordena;
- 2.º La autoridad a quien se comete;
- 3.º El delito porque se procede;
- 4.º El nombre, apellido o sobrenombre del presunto reo, su empleo, profesión, nacionalidad, domicilio y demás elementos de identificación; y
- 5.º El lugar a que se ha de conducir al acusado y si debe o no comunicársele.

Art. 288. Cuando la detención de una persona deba



practicarse en distinta jurisdicción, se llevará a efecto librando oficio o exhorto a la autoridad judicial del lugar donde aquella resida, con transcripción del auto correspondiente. En los casos de urgencia podrá usarse la vía telegráfica.

Art. 289. El juez podrá disponer:

- 1.º Que los menores de quince años cumplan la detención o prisión preventiva en los domicilios de sus padres o tutores o en institutos de reforma oficiales o particulares; y
- 2.º Que las mujeres honestas o en estado de preñez o con hijos en la edad de la lactancia y los ancianos o enfermos, la cumplan en sus respectivos domicilios.

Art. 290. El auto de prisión preventiva será apelable en el solo efecto devolutivo. El superior se pronunciará teniendo a la vista copia del auto y el informe del juez, a menos que reputé indispensable el conocimiento de la causa.

También será apelable, y en las mismas condiciones, el auto de detención, cuando ésta se hubiese prolongado por más de diez días.

TÍTULO XXI

LIBERTAD PROVISIONAL

Art. 291. La libertad provisional puede ser simple o bajo caución.

Art. 292. El juez podrá decretar, de oficio o a solicitud de parte, la libertad provisional simple del procesado por delito que merezca pena que no exceda de un año de privación de libertad. Exceptúanse los casos siguientes:

- 1.º Cuando el inculpado fuese reincidente o tuviere otra causa abierta o en una anterior



hubiese recaído auto de sobreseimiento provisional o no tuviera domicilio en la jurisdicción del juzgado;

2.º Cuando medie reiteración o concurrencia de delitos; y

3.º Cuando los antecedentes o modo de vivir del detenido sean notoriamente inmorales.

Art. 293. La libertad provisional simple se dictará con los informes que demuestren que el caso no es de los exceptuados en el artículo anterior y después de cumplirse estos requisitos:

1.º Que el detenido haya prestado declaración indagatoria; y

2.º Que haya fijado domicilio del cual no le será permitido ausentarse por más de tres días, sin autorización del juez.

Art. 294. El auto que deniegue la libertad provisional simple es inapelable para el procesado; y el que la otorgue, puede ser recurrido por el fiscal o por el querellante en la diligencia de notificación.

Art. 295. La libertad provisional simple se decretará sin los recaudos ni las limitaciones establecidas, cuando se hubiese sobreseído en la causa o el procesado fuere absuelto en primera instancia.

Art. 296. Se decretará la libertad bajo caución a solicitud de parte cuando, por razón del hecho que se impute al procesado, le corresponda pena de privación de libertad que no exceda de tres años. Exceptúanse los casos siguientes:

1.º Cuando el procesado sea reincidente, siempre que la condena anterior no haya sido por culpa o negligencia; y

2.º Cuando medie reiteración o concurrencia de delitos, con la misma salvedad respecto a culpa o negligencia.

Art. 297. El juez podrá denegar la libertad pro-



visional bajo caución cuando el procesado tuviese otra causa pendiente o cuando, en un juicio anterior, hubiese recaído auto de sobreseimiento provisional.

Art. 298. La caución será real y podrá constituirse por el interesado, o por un tercero, con hipoteca o con depósito de dinero, de títulos de la deuda pública o de otros papeles cotizables en la Bolsa de Comercio y aceptados por el juez. Siempre que se trate de títulos, se calcularán por el valor de cotización pero, si no fueren de deuda pública de la Nación o garantidos por ella, la cantidad señalada para la caución se aumentará con un veinticinco por ciento.

Art. 299. Para determinar el monto de la caución se tendrán en cuenta la naturaleza del delito y el estado social y antecedentes del procesado, sin que pueda ser menor de dos pesos ni mayor de cincuenta moneda nacional por día de privación de libertad que pudiera corresponderle como máximo.

Art. 300. La caución garante la comparecencia del procesado al llamado judicial.

Art. 301. El procesado, al solicitar la libertad bajo caución, deberá fijar domicilio. Si citado no compareciere en el término que se le señale, el juez decretará orden de prisión.

Art. 302. Dictada la orden de prisión a que se refiere el artículo anterior, se hará efectiva la fianza, cuyo importe quedará definitivamente perdido para el procesado y adquirido por el fisco y se destinará, en primer término, a la reposición del sellado y pago de las costas producidas por diligencias decretadas de oficio o a petición fiscal y, en seguida, a las indemnizaciones civiles emergentes del delito. Si transcurrido un año, contado desde que se decretó la efectividad de la fianza, existiese un saldo de dinero libre de embargo para responder a estas indemnizaciones, se transferirá a la orden del Consejo Nacional de Educación.



Art. 303. Para hacer efectiva la caución, cuando consista en hipoteca, se procederá a la venta del inmueble en remate público, por el martillero que el juez designe, con la base de la valuación para la contribución territorial y previa publicación de edictos en dos diarios por el término de quince días, observándose, en lo que no esté previsto, lo dispuesto en el código de procedimientos civiles.

Cuando se trate de títulos, se venderán por corredor en la Bolsa de Comercio.

El fiscal intervendrá en el incidente de venta.

Art. 304. Si el procesado compareciese y probare justa causa para no haberlo hecho antes, se revocará el auto que ordenó la efectividad de la caución, siempre que se integren, en el término de tres días, las cantidades de que se hubiese dispuesto y se abonen las costas producidas, sin que puedan modificarse los derechos de terceros.

Art. 305. El pedido de libertad provisional bajo caución se despachará en el término de cuarenta y ocho horas, previa vista fiscal, que deberá evacuarse en el mismo plazo. El auto será apelable en relación dentro de veinte y cuatro horas.

Art. 306. El auto que autorice o deniegue la libertad bajo caución podrá reformarse de oficio o a instancia de parte, durante todo el curso de la causa.

Art. 307. La caución se cancelará:

- 1.º Cuando el procesado fuera constituido en prisión, por haberse declarado improcedente la libertad provisional;
- 2.º Cuando se sobresea en la causa o se absuelva al procesado o, en caso de condenación, concurrese éste al llamado judicial; y
- 3.º Por muerte del procesado.

Art. 308. El incidente sobre libertad provisional se substanciará por cuerda separada.



TÍTULO XXII

EMBARGOS

Art. 309. En el auto de prisión preventiva se decretará el embargo de bienes suficientes del procesado para garantizar la pena pecuniaria, cuando el delito que se le impute la traiga aparejada, y las costas.

Art. 310. En el mismo auto o después de dictado, el juez podrá decretar, a solicitud de la víctima o a petición fiscal, el embargo de bienes del procesado para cubrir sus posibles responsabilidades civiles.

Art. 311. Regirán las disposiciones pertinentes del código de procedimientos civiles en todo lo relativo a embargos, en cuanto no se opongan a lo dispuesto en este título.

Art. 312. Verificado el embargo, se requerirá al procesado para que manifieste si opta porque se enajenen los bienes embargados o porque se conserven en depósito y administración. Si optare por la enajenación, se procederá a la venta en remate hasta cubrir la cantidad señalada.

Art. 313. Los bienes embargados se enajenarán, aun contra la voluntad del procesado, siempre que fueren de conservación difícil o dispendiosa, a menos que el pago de los gastos de conservación, en este último caso, se afiance por el procesado u otra persona a su nombre.

Art. 314. En el caso de administración, el procesado tiene derecho a designar un interventor.

Art. 315. Las diligencias sobre fianzas o embargos se instruirán en pieza separada. Las apelaciones se concederán en el efecto devolutivo.

Art. 316. Las tercerías serán substanciadas en la forma que establece el código de procedimientos civiles.



Art. 317. El embargo se levantará de oficio si recayere sentencia absolutoria o sobreseimiento.

Si fuere condenatoria, los bienes embargados se destinarán, en la cantidad necesaria, a la reposición del sellado y pago de costas de las diligencias decretadas de oficio o a petición fiscal. El remanente se destinará o reservará, según los casos, para la reparación civil o se entregará al interesado si la víctima renuncia a la acción o no la entabla en el plazo de tres meses de dictada la sentencia.

Art. 318. En el incidente sobre venta de los bienes embargados será parte el fiscal.

Art. 319. Se decretará el embargo de bienes de terceros, siempre que concurren las circunstancias siguientes:

- 1.º Que sean civilmente responsables del delito; y
- 2.º Que la parte damnificada lo haya solicitado.

Art. 320. Regirán, respecto de esta clase de embargos, las disposiciones de los artículos precedentes.

TÍTULO XXIII

INTERVENCIÓN DE TERCEROS

Art. 321. Las personas civilmente responsables por delito cometido por otro, podrán intervenir en el juicio e interponer todos los recursos que la ley confiere al procesado.

Art. 322. Las mismas personas podrán ser citadas como parte a instancia del damnificado. La citación solo podrá solicitarse durante el sumario.

Art. 323. Toda persona aludida en un proceso, en forma que afecte su dignidad o su decoro, tiene derecho a salvaguardarlos presentando las explicaciones o pruebas que juzgue necesarias. El incidente correrá por cuerda separada.



TÍTULO XXIV

ARTÍCULOS DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO

Art. 324. Las excepciones en forma de artículo de previo y especial pronunciamiento, sólo podrán oponerse durante el sumario y serán únicamente estas:

- 1.º Falta de jurisdicción;
- 2.º Falta de personería en el querellante o su mandatario;
- 3.º Falta de acción;
- 4.º Cosa juzgada;
- 5.º Litis-pendencia;
- 6.º Renuncia o desistimiento del ofendido en los delitos que no dan lugar a la acción pública; y
- 7.º Prescripción de la acción o de la pena.

Art. 325. Si concurrieren dos o más de las excepciones mencionadas, deberán proponerse conjuntamente.

Art. 326. Al oponerse las excepciones deberán presentarse los documentos en que se funden o indicarse el archivo, oficina o lugar donde se encuentren.

Art. 327. De la excepción se correrá vista al fiscal y traslado a las partes por el término de tres días.

Art. 328. Si el juez lo creyere necesario, recibirá a prueba el artículo, designando la audiencia en que deba producirse. La fecha de esa audiencia será señalada entre los diez y los quince días siguientes al auto que la ordene. Las diligencias probatorias serán solicitadas dentro de los cinco primeros días.

Art. 329. En la misma audiencia las partes podrán alegar sobre el mérito de la prueba.

Art. 330. El juez dictará resolución dentro de tercero día, pronunciándose previamente sobre la falta de jurisdicción y la litis-pendencia, si hubieran sido opuestas.

En caso de declararse competente o rechazar la



litis-pendencia, resolverá al mismo tiempo sobre las demás excepciones. ■

Si se considerase incompetente, mandará remitir el proceso al juez a cuya jurisdicción corresponda.

Art. 331. Cuando se declare procedente cualquiera de las excepciones perentorias enumeradas en el artículo 324, se declarará definitivamente cerrada la causa, mandándose poner en libertad al procesado.

Art. 332. El incidente sobre excepciones no impedirá que se continúen las diligencias del sumario.

Art. 333. Durante el plenario el procesado podrá reproducir como medios de defensa las excepciones perentorias que se hubiesen desestimado.

TÍTULO XXV

CONCLUSIÓN DEL SUMARIO

Art. 334. Practicadas las diligencias tendientes a llenar los objetos del sumario, el juez lo declarará clausurado.

Art. 335. La clausura del sumario tendrá también lugar, aun cuando haya diligencias pendientes, siempre que el juez no las repunte indispensables para los fines de la instrucción o se trate de medidas relativas a la reparación civil, que puedan solicitarse en el plenario.

Art. 336. El auto de clausura dispondrá que la causa pase en vista al ministerio fiscal, por el término que el juez señale y que no podrá exceder de diez días, para que formule la acusación.

Dispondrá, también, si hubiere parte civil, que, después de la acusación, se le dé vista sin más trámite por el término perentorio de cuarenta y ocho horas. La parte damnificada, al evacuar la vista, podrá:

1.º Ampliar o modificar la acción promovida; y



2.º Suplir cualquier deficiencia de forma en que haya podido incurrir al iniciar la demanda, la cual deberá quedar revestida de las solemnidades prescriptas por las leyes de procedimiento civil.

Art. 337. Llenados los trámites del artículo anterior, el proceso pasará a plenario.

Art. 338. Cuando el ministerio fiscal no encuentre mérito para acusar, el juez, si estuviere de acuerdo con sus conclusiones, sobreseerá en la forma que corresponda. Si no estuviere de acuerdo, pasará la causa al fiscal de la cámara de apelación respectiva y si este funcionario participase de la opinión del agente o procurador fiscal, se decretará el sobreseimiento; en el caso contrario, se pasarán los autos al reemplazante del agente o procurador fiscal, a fin de que deduzca la acusación.

Art. 339. Cuando el sumario no hubiera concluido dentro del mes de iniciado, el juez deberá informar al tribunal superior sobre las causas que hayan impedido su terminación. Este informe será repetido cada ocho días.

Art. 340. Si resultase durante el sumario que el delito corresponde a otra jurisdicción, se dispondrá de oficio que el proceso pase al juez competente. El auto será apelable en relación y en ambos efectos.

TÍTULO XXVI

SOBRESEIMIENTO

Art. 341. En cualquier estado del sumario podrá el juez decretar el sobreseimiento.

Art. 342. El sobreseimiento puede ser definitivo o provisional.

Art. 343. Será definitivo:



- 1.º Cuando resulte que el delito no ha sido perpetrado;
- 2.º Cuando el hecho no constituya delito; y
- 3.º Cuando los procesados resulten exentos de responsabilidad.

Art. 344. Será provisional:

- 1.º Cuando los medios de justificación acumulados en el proceso no sean suficientes para demostrar la perpetración del delito; y
- 2.º Cuando comprobado el hecho no resulten pruebas bastantes para determinar sus autores, cómplices o encubridores.

Art. 345. El sobreseimiento definitivo es irrevocable. Cierra el juicio de una manera absoluta en los dos primeros casos del artículo 343 y en el tercer caso, respecto de los procesados en cuyo favor se decreta.

Art. 346. En los casos de sobreseimiento definitivo, deberá hacerse la declaración de que la formación del sumario no perjudica el buen nombre y honor de los procesados.

Art. 347. El sobreseimiento provisional deja abierto el juicio hasta la aparición de nuevos datos o pruebas. Transcurridos tres años o antes si la prescripción se operase en menor término, el juez decretará la clausura definitiva del proceso.

Art. 348. Durante el término señalado en el artículo anterior, el procesado podrá pedir las diligencias de prueba que juzgue necesarias para justificar su inculpabilidad, a objeto de que el sobreseimiento pueda convertirse en definitivo. El auto denegatorio será apelable en relación.

Art. 349. Durante el mismo término, y siempre que se hubiesen producido nuevas pruebas sobre la culpabilidad del procesado, el juez de oficio o a petición de parte podrá dejar sin efecto el auto de sobre-

seimiento provisional, procediendo en este caso, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 334 y siguientes.

Art. 350. Antes de decretarse el sobreseimiento, será oído el ministerio fiscal o querellante, según el caso, el cual deberá expedirse dentro de tercero día.

El auto que ordene el sobreseimiento será apelable en relación.



LIBRO TERCERO

PLENARIO

TÍTULO I

PRUEBA Y DISCUSIÓN

Art. 351. Elevada la causa a plenario se recibirá a prueba. Si las partes renuncian a producirla, se dejará sin efecto el auto, corriéndose traslado de la acusación y de la demanda civil, en su caso, para que se formule la defensa en el término de nueve días, con lo que quedará la causa en estado de sentencia.

Art. 352. Si la parte civil no estuviera conforme con la prosecución de la causa con prescindencia de la prueba, tendrá derecho, dentro de tercero día de serle notificada la providencia que ordena el traslado, a retirar la demanda de la jurisdicción criminal y deducirla ante el juez que corresponda.

Art. 353. Dentro del término de diez días de notificado el auto de prueba, deberán solicitarse todas las diligencias probatorias e indicarse el nombre, profesión y domicilio de los testigos para que sean oportunamente citados. Los interrogatorios podrán reservarse hasta el día de la audiencia.

Vencido dicho plazo no se admitirá otro pedido de prueba que el destinado a justificar las tachas de los testigos. Estas últimas pruebas podrán solicitarse den-





tro de los cinco días de vencido el término señalado en la primera parte de este artículo.

Art. 354. Transcurrido el término de diez días, si las partes no hubiesen solicitado diligencias de prueba, se subsanciará la causa como en el caso de renuncia. Si hubieren solicitado, el juez, dentro de tercero día, designará la fecha en que tendrá lugar la vista de la causa. La audiencia respectiva se señalará con intervalo que no podrá exceder de cuarenta días, ni ser menor de diez.

Art. 355. Si hubiera que practicar diligencias de prueba fuera de la República, la parte que las solicite deberá hacerlo expresando el nombre y la residencia de los testigos, los documentos que hayan de testimoniarse, con indicación de los archivos o registros donde se encuentren y manifestando qué hechos se propone justificar.

Art. 356. Del escrito en que se soliciten diligencias en el extranjero se dará traslado por tres días perentorios a las otras partes, las que, a su vez, podrán solicitar medidas análogas.

Art. 357. Si las peticiones estuviesen en forma y las pruebas versasen sobre hechos conducentes, el juez proveerá de conformidad y, en tal caso, designará para la vista de la causa, una fecha con intervalo suficiente para que dentro de él puedan realizarse las diligencias decretadas. Ese intervalo no podrá, en ningún caso, ser mayor de ciento veinte días.

El auto que acuerde o deniegue la petición será apelable en relación y el superior resolverá sin subsanciación alguna.

Art. 358. La recepción de la prueba en el extranjero podrá ser encomendada directamente a los cónsules de la República.

Art. 359. Con excepción de la prueba testimonial y de confesión, todas las diligencias deberán ejecutarse antes de la vista de la causa.



Las pruebas en el plenario se registrarán por las disposiciones pertinentes del sumario y en la de confesión se observarán las reglas del procedimiento civil en cuanto fueren aplicables.

Art. 360. La audiencia deberá ser presidida por el juez bajo pena de nulidad y será pública siempre que por razones de decoro no se disponga lo contrario.

Es esencial la asistencia del defensor, y del agente o procurador fiscal, cuando sea parte. Si no asistieren se señalará nuevo día, pudiéndoseles aplicar correcciones disciplinarias. Si el inasistente fuere el defensor particular, el juez podrá, además, separarlo de la defensa y designar de oficio su reemplazante. La inasistencia de las demás partes no obstaculizará la celebración de la audiencia.

El procesado detenido será conducido a la audiencia.

Art. 361. Abierto el acto, se dará cuenta de lo actuado desde la acusación fiscal hasta ese momento procediéndose en seguida a recibir la prueba de confesión si se hubiese solicitado en tiempo o el acusador o parte civil se encontrara en la audiencia, y a tomar declaración a los testigos llevados por las partes o citados al efecto.

Art. 362. Si se hubiese producido prueba pericial, las partes o el juez podrán exigir de los peritos las explicaciones que juzguen necesarias.

Art. 363. El juez podrá interrogar al procesado y lo invitará, en todos los casos, a que exponga lo que considere necesario, sin perjuicio de la defensa que se produzca en su favor.

Art. 364. El secretario consignará en acta lo que se juzgue pertinente de la prueba oral. Los jueces podrán hacer tomar por taquígrafos las exposiciones de las partes y de los testigos y peritos. El taquí-



grafo deberá presentar la versión dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la audiencia.

Art. 365. Terminada la prueba, se concederá la palabra al fiscal o acusador o damnificado en su caso, para que aleguen sobre el mérito de aquélla y al defensor para que formule la defensa. Mientras no haya taquígrafos, se permitirá al defensor que presente dentro de tercero día un memorial que la contenga.

En la misma audiencia se citará a las partes para sentencia, sin perjuicio de las diligencias que pueda ordenar el juez para mejor proveer.

TÍTULO II

SENTENCIA

Art. 366. Dentro de los treinta días de la citación, el juez dictará sentencia. En ella consignará:

- 1.º El lugar y la fecha del fallo, los hechos que hubieren dado origen a la formación de la causa, los nombres y apellidos de los actores particulares, si los hubiere, y de los procesados, expresando los sobrenombres o apodos con que éstos sean conocidos, su estado, nacionalidad, domicilio, oficio o profesión, y todas las demás circunstancias con que hubiesen figurado en la causa;
- 2.º Los hechos que considere probados y que se relacionen con el punto o puntos que debe abrazar el fallo;
- 3.º Las conclusiones definitivas de la acusación y de la defensa;
- 4.º La calificación legal de los hechos que considere probados;
- 5.º La calificación legal de la participación que



en los referidos hechos hubiese tenido cada uno de los procesados;

6.º La calificación legal de las circunstancias atenuantes y agravantes;

7.º La calificación legal de los hechos probados con relación a la responsabilidad civil en que hubiesen incurrido los procesados o terceros oídos en la causa; y

8.º Las disposiciones legales que considere aplicables.

El fallo condenará o absolverá al procesado o procesados imponiendo en el primer caso la pena que corresponda.

Art. 367. La sentencia resolverá igualmente:

1.º Todas las cuestiones referentes a la responsabilidad civil, que hubieren sido objeto del juicio;

2.º El pago de las costas procesales; y

3.º La calificación del carácter de la acusación, declarándola calumniosa, si lo hubiere pedido el acusado y así procediese.

Art. 368. Los autos interlocutorios que decidan algún artículo o causen gravamen irreparable serán fundados.

Art. 369. En los delitos de lesiones, no se dictará sentencia condenatoria mientras no se hayan definido los efectos de esas lesiones en la salud, la vida y la capacidad para el trabajo.

Sin embargo, si transcurridos seis meses desde que se causó la herida, ésta no se hubiese curado o producido consecuencias definitivas, a juicio de los peritos, el juez dictará sentencia.

Art. 370. Una vez pronunciada y notificada la sentencia, concluye la jurisdicción del juez y no puede hacer en ella variación o modificación alguna.

Puede, sin embargo, de oficio o si se lo pidiere al-



guna de las partes, dentro del día siguiente a la notificación, corregir errores materiales, aclarar conceptos oscuros, sin alterar lo substancial de la decisión, y suplir omisiones en que hubiese incurrido sobre cuestiones deducidas y discutidas en el juicio.

TÍTULO III

REPOSICIÓN

Art. 371. El recurso de reposición tiene lugar contra los autos interlocutorios, a efecto de que el mismo juez que los haya dictado los revoque por contrario imperio.

Art. 372. Debe interponerse por escrito dentro de tercero día, pero cuando se trate de resoluciones dictadas en las audiencias, verbalmente y en el mismo acto.

En el primer caso, el juez resolverá dentro de tercero día; en el segundo, en la misma audiencia.

Si lo juzgare necesario, oirá á la parte contraria.

Art. 373. La resolución que recaiga hará ejecutoria, a menos que el recurso de reposición fuese acompañado del de apelación en subsidio.

Art. 374. Los jueces y tribunales pueden revocar de oficio sus propias resoluciones interlocutorias mientras no hayan quedado consentidas.

TÍTULO IV

APELACIÓN

Art. 375. El recurso de apelación solo se otorgará de las sentencias definitivas y de las interlocutorias que por este Código se declaren apelables.



El término para apelar será de cinco días para las primeras y de tres para las segundas.

El damnificado por el delito podrá únicamente interponer el recurso con respecto á la indemnización y cuando la sentencia sea condenatoria.

Art. 376. La apelación se interpondrá por escrito o ante el juez que hubiere dictado la sentencia o verbalmente ante el actuario; en el acto de la notificación.

El juez proveerá sin más substanciación.

Art. 377. La apelación de sentencia definitiva, salvo disposición en contrario, se otorgará libremente y en ambos efectos, a no ser que el interesado pida que se le conceda en relación.

La de autos interlocutorios se concederá en relación y también en ambos efectos, si la ley no dispone que deba otorgarse sólo en el devolutivo.

Art. 378. Cuando se otorgue el recurso en ambos efectos, por la misma diligencia se mandarán remitir los autos originales al superior.

La remisión se hará por el primer correo siguiente a la concesión del recurso, tratándose de sentencias dictadas por los jueces que funcionan fuera de la sede del tribunal de apelación.

Tratándose de las sentencias de los demás jueces, la remisión se efectuará dentro de las veinticuatro horas. La falta de reposición de sellos no será causa para demorar la remisión de los autos.

Art. 379. Si se concediere la apelación en el solo efecto devolutivo, se mandará sacar testimonio de las piezas de autos que señale el apelante, con las adiciones que el coligante hiciere y las que el juez estime necesarias, y ese testimonio será remitido al superior dentro de tercero día.

Art. 380. Transcurridos los términos expresados sin interponerse la apelación, quedarán consentidas las sentencias, salvo el caso de consulta.



Art. 381. Si el juez denegase la apelación, el interesado podrá ocurrir directamente al superior, dentro de tercero día pidiendo que se le otorgue el recurso. Al hacerlo deberá acompañar copia de la providencia recurrida y de los recaudos, autorizada por el secretario en papel común.

No se suspenderá la tramitación del juicio mientras el superior no conceda la apelación, lo que deberá hacer saber al inferior dentro de veinticuatro horas de resuelto.

TÍTULO V

NULIDAD

Art. 382. El recurso de nulidad procede cuando, en la tramitación que sirve de base a la sentencia, se hayan omitido las formas substanciales o se haya incurrido en algún defecto o vicio de los que por expresa disposición de este Código anule las actuaciones.

Art. 383. El recurso de nulidad se interpondrá siempre con el de apelación y en la misma forma y términos.

Cuando no proceda el recurso de apelación, tampoco procederá el de nulidad.

Art. 384. La nulidad quedará subsanada, cuando no se reclame la reparación de los defectos de procedimiento en la misma instancia en que se hayan cometido.

Si fuese procedente, se declarará nulo todo lo obrado desde la actuación que dió motivo a ella y se pasarán los autos a otro juez para que conozca.

Art. 385. Ningún defecto u omisión de la sentencia podrá dar lugar al recurso de nulidad.



TÍTULO VI

DENEGACIÓN O RETARDO DE JUSTICIA

Art. 386. Cuando transcurridos los términos fijados para dictar autos o sentencias, el juez no se hubiese pronunciado, podrá ser requerido por escrito por cualquiera de los interesados.

Art. 387. Si pasasen diez días desde la fecha del requerimiento, sin haberse expedido la sentencia, el litigante podrá ocurrir en queja ante la cámara respectiva, acompañando una copia en papel común del escrito de interpelación.

Art. 388. Presentada la queja, la cámara dispondrá que el inferior se expida dentro del término de diez días, notificándole la resolución por medio de oficio.

Art. 389. En caso de que el juez desobedeciese la orden, incurrirá en una multa de cien a mil pesos.

Art. 390. Si ocurriese que un mismo juez fuera multado tres veces en el término de un año, la respectiva cámara pondrá el hecho en conocimiento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Art. 391. Las disposiciones contenidas en los artículos anteriores, son aplicables a los vocales de las cámaras que demoren el estudio de los expedientes que les hayan sido entregados.

TÍTULO VII

PROCEDIMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA

Art. 392. Cuando el recurso se hubiere concedido libremente, el presidente del tribunal ordenará que los autos pasen a secretaría para que el apelante exprese agravios dentro del término de nueve días.



Art. 393. Cuando sean varios los apelantes el término será común.

Art. 394. Del escrito de expresión de agravios se dará traslado por el mismo término de nueve días. El fiscal de la cámara, al evacuarlo, podrá adherirse al recurso, en cuyo caso se dará traslado de la adhesión por igual término.

Art. 395. Si el apelante no expresara agravios dentro del término, acusada la rebeldía, se declarará decaído el derecho. Si el apelante fuere el ministerio fiscal o el procesado, la instancia continuará su curso. En cualquier otro caso, se tendrá por desistido al recurrente de la apelación interpuesta.

Art. 396. Si el apelado no contestase el escrito de agravios dentro del término señalado, no podrá hacerlo en adelante y, previa anotación del secretario, la instancia seguirá su curso.

Art. 397. El fiscal podrá retirar los autos de la secretaría para expedirse en la expresión de agravios o su contestación. Mientras el proceso se halle en su poder, no correrán los términos señalados en los artículos precedentes.

Art. 398. El orden en que deberá oírse al ministerio fiscal, será el siguiente:

En primer término, cuando la apelación haya sido interpuesta por el funcionario que represente al ministerio en primera instancia;

En segundo, cuando el recurso fuere promovido por cualquier otra parte que no sea el procesado; y

En último, cuando el apelante fuera el procesado.

Art. 399. El damnificado por el delito solo es parte en cuanto a la indemnización. Si él fuese el único apelante, el ministerio fiscal no tendrá intervención en la instancia.

Art. 400. Presentados los escritos de expresión de



agravios y contestación, se llamarán los autos para sentencia salvo el caso de prueba.

Art. 401. Las partes podrán presentar, bajo juramento, antes de notificarse la providencia de autos para definitiva, los documentos de que no hubiesen tenido conocimiento hasta entonces o que no hubieren podido proporcionárselos en tiempo oportuno.

De los que cada parte presente, se correrá traslado a la contraria, la cual deberá evacuarlo dentro del término perentorio de tres días.

Art. 402. El procesado o su defensor podrá dirigir posiciones al acusador particular o a la parte civil, antes de la citación para sentencia, siempre que no versen sobre los mismos hechos que hayan dado lugar a la presentación de otras en la primera instancia.

Art. 403. Podrá pedirse que la causa se reciba a prueba:

- 1.º Cuando se alegue algún hecho nuevo que pueda influir en la solución del proceso, ignorado antes o posterior al término de prueba en primera instancia; y
- 2.º Cuando no se hubiere practicado la prueba ofrecida por el solicitante, por causas ajenas a su voluntad.

Art. 404. Regirán para la segunda instancia las disposiciones sobre prueba y su discusión establecidas para la primera.

Art. 405. En las audiencias llevará la palabra el presidente del tribunal; pero los demás vocales, con su venia, podrán hacer las preguntas u observaciones que estimen oportunas.

Art. 406. El tribunal podrá comisionar a uno de sus miembros para la recepción de la prueba que deba practicarse fuera de su sala de audiencias. Para la que haya de recibirse fuera de la ciudad donde tiene



su sede, la comisión será conferida a la autoridad que corresponda.

Art. 407. Dentro de tercero día de dictada la providencia de autos o en la diligencia de notificación, las partes, en caso de no haber habido prueba, podrán pedir se les señale audiencia para informar *in voce*.

Art. 408. Producidos los informes *in voce* o vencido el término en que pudieron solicitarse o terminada, en su caso, la discusión de la prueba, el expediente pasará sin más trámite al acuerdo. Los vocales del tribunal se informarán cada uno privadamente del proceso, pudiendo retenerlo en su poder durante el tiempo que el presidente les señale, dentro del fijado para pronunciar el fallo.

Art. 409. En las secretarías de las cámaras de apelación se llevará un libro, que podrá ser examinado por los litigantes o sus abogados, en el cual se hará constar la fecha de remisión de los expedientes a los vocales y la en que éstos los devuelvan estudiados.

Art. 410. Cuando todos los vocales se encuentren conformes con la sentencia apelada, tanto en la parte dispositiva, como en las razones en que se basa, podrá ser confirmada «por sus fundamentos», prescindiéndose de la formalidad del acuerdo. Esta disposición no rige en caso de pena de muerte.

Art. 411. Las resoluciones de las cámaras serán pronunciadas por mayoría absoluta de votos. Cuando la sentencia de primera instancia fuere absolutoria y hubiese mayoría de un voto por la revocación, se suspenderá la publicación del fallo y se integrará el tribunal con otro vocal o conjuez. Si resultase empate prevalecerán los votos favorables al acusado.

Art. 412. Las cámaras dictarán sentencia dentro de treinta días contados desde que el expediente se halle en estado.

Art. 413. La sentencia no podrá modificar la de primera instancia en sentido desfavorable para el procesa-



do, si no hubiese sido apelada por el ministerio fiscal o el querellante, salvo el caso de adhesión al recurso.

Art. 414. Sin perjuicio de la facultad del tribunal de hacer comparecer al reo, en todos los casos, para escuchar sus explicaciones, no podrá dictarse sentencia sin esa formalidad cuando la causa sea por delito que merezca pena que exceda de diez años de privación de libertad.

Art. 415. Cuando el recurso se conceda en relación, se llamará *autos* inmediatamente. Las partes pueden, dentro de tercero día de notificadas, presentar un memorial relativo al recurso interpuesto.

Vencido dicho término, la cámara dictará resolución, sin necesidad de proceder en forma de acuerdo.

Art. 416. Si el apelante pretendiese que el recurso ha debido otorgársele libremente, podrá solicitar, dentro de tercero día de la providencia de autos, que así se declare y se le dé término para expresar agravios. El tribunal resolverá esta petición sin tramitación alguna.

Art. 417. En caso de recurso directo por apelación denegada, el tribunal resolverá de plano. Si lo juzgase necesario para mejor proveer, pedirá informe al juez de la causa u ordenará la remisión de los autos.

Art. 418. Si se hubiesen interpuesto los recursos de apelación y nulidad, el tribunal conocerá de ambos al mismo tiempo y por los mismos trámites.

Art. 419. Las providencias interlocutorias que se dicten en el curso de la instancia de apelación podrán ser objeto del recurso de reposición.

TÍTULO VIII

CONSULTA

Art. 420. Las sentencias de primera instancia que impongan pena de muerte, o privación de libertad por

más de seis años serán elevadas en consulta a la cámara de apelación respectiva, cuando no hubiesen sido recurridas.

Art. 421. El procedimiento será el determinado para la apelación en relación sin que pueda el tribunal agravar la pena.



TÍTULO IX

RECURSO DE REVISIÓN

Art. 422. El recurso de revisión procede contra las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada, en los casos siguientes:

- 1.º Cuando conste, de un modo indudable, que ha sido uno solo el ejecutor del delito y, sin embargo, aparezcan como reos, en dos o más sentencias ejecutoriadas, diversas personas;
- 2.º Cuando la sentencia contenga condenación por homicidio y se llegare a comprobar que vive la supuesta víctima;
- 3.º Cuando la condenación se funde en un documento que, con posterioridad, haya sido declarado falso, por sentencia en causa criminal; o cuando el condenado presentase documentos decisivos en su favor;
- 4.º Cuando se compruebe posteriormente en causa criminal la falsedad de los testimonios o pericias que fundaren la condena; y
- 5.º Cuando una ley posterior haya suprimido o disminuido la pena correspondiente al delito que dió lugar al juicio.

Art. 423. El recurso de revisión podrá promoverse por el condenado o por su cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos y por el ministerio fiscal.

La muerte del condenado no impide que se deduz-



ca para rehabilitar su memoria o procurar el castigo del verdadero culpable.

Art. 424. Conocerá del recurso el tribunal de última instancia en la jurisdicción respectiva y procederá oyendo a las partes y recibiendo las pruebas que considere necesarias para mejor proveer.

Art. 425. En el caso del inciso 1.º del artículo 422, el tribunal anulará las diversas sentencias y dispondrá que la causa se instruya de nuevo por el juez a quien corresponda.

En el caso del inciso 2.º, anulará la sentencia y ordenará que se ponga inmediatamente en libertad al condenado.

En los casos de los incisos 3.º, 4.º y 5.º, pronunciará sentencia en única instancia.

Art. 426. Para que sea admisible el recurso, deberán acompañarse, al deducirlo, los documentos y pruebas en que se funde y el testimonio de la sentencia recurrida. En caso contrario, será desechado de plano.

TÍTULO X

EJECUCIÓN DE SENTENCIA

Art. 427. Corresponde al juez que haya conocido en primera instancia dictar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia.

Art. 428. En el caso de pena capital se facilitarán al reo los medios de otorgar testamento, se le prestarán los otros auxilios que pidiere y se le permitirá recibir visitas, procediéndose, en lo demás, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Penal.

Art. 429. Los condenados a muerte serán fusilados, mientras el poder ejecutivo no determine otra forma de ejecutar la pena.

Art. 430. Las penas que entrañen privación de li-



bertad se harán saber a las autoridades encargadas de los establecimientos en que deban cumplirse, con inclusión de un testimonio de la sentencia. Ese testimonio se remitirá dentro de tercero día, bajo pena de destitución del secretario.

Art. 431. En los casos de destierro y deportación se comunicarán los fallos al P. E. para su cumplimiento.

Art. 432. Si la pena fuere de inhabilitación, deberá publicarse la sentencia en un periódico del lugar en que tenga su asiento el juzgado y en el Boletín Oficial.

Si el procesado estuviere ejerciendo algún empleo o cargo público, aunque proceda de elección popular, se comunicará al cuerpo, autoridad o jefe respectivo.

Art. 433. Las penas de destitución o suspensión se comunicarán a las autoridades superiores del condenado.

Art. 434. La pena de sujeción a la vigilancia de la autoridad se pondrá en conocimiento de la policía.

Art. 435. La condenación al pago de cantidades de dinero, se hará efectiva según las reglas establecidas por las leyes de procedimientos civiles, para la ejecución de sentencias.

Art. 436. Si el condenado a la pena de multa no la pagase en el término que se señale, se dictarán las órdenes necesarias para la aplicación de la pena corporal equivalente.

Art. 437. Cuando se haya declarado la falsedad de instrumentos públicos, se ordenará que se hagan las anotaciones que correspondan en el registro o archivo respectivos.

Art. 438. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, toda sentencia condenatoria será comunicada al Ministerio de Justicia a los fines de la formación del Registro de Reincidentes.

LIBRO CUARTO

JUICIOS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

TÍTULO I

JUICIO CORRECCIONAL

Art. 439. El juicio correccional se substanciará por los mismos trámites del juicio criminal, con las modificaciones contenidas en este título.

Art. 440. El sumario nunca será secreto para las partes, ni podrá durar más de quince días, salvo las demoras consiguientes a la producción de prueba fuera del asiento del juzgado.

Art. 441. La acusación deberá formularse en el término de tres días.

Art. 442. En el caso del párrafo segundo del artículo 338, el fiscal de la cámara de apelación será substituido por el reemplazante del agente o procurador fiscal y, si en definitiva se dedujere acusación, el juez se inhibirá del conocimiento de la causa y la remitirá a quien corresponda.

Art. 443. De la acusación se dará traslado a las demás partes por tres días prorrogables.

Art. 444. Si en la acusación o en la defensa no se hubieren solicitado diligencias de prueba, se llamará autos para sentencia.

Art. 445. Si se hubiesen solicitado diligencias de prueba, se señalará audiencia para la vista de la cau-





sa y, dentro de los cinco días del auto respectivo, las partes podrán solicitar nuevas diligencias.

Art. 446. Recibida la prueba en la audiencia señalada, las partes podrán informar *in voce* sobre su mérito, dejándose constancia en el acta de lo que expresamente solicitaren y el juez creyere pertinente.

Art. 447. La sentencia se dictará dentro de los diez días de la citación. No está sujeta a formalidad alguna, pero debe ser fundada.

Art. 448. De la resolución definitiva podrá apelarse en relación en el término de tres días.

Art. 449. Los jueces federales y de los territorios observarán las disposiciones de este título en los procesos a que den lugar las infracciones previstas en el artículo 25 y cuyo juzgamiento les compete.

TÍTULO II

JUICIO SOBRE FALTAS

Art. 450. El procedimiento ante las autoridades policiales y municipales será sumario. Los interesados podrán presentarse por escrito o verbalmente, labrándose acta en este último caso. Si el infractor se hallare detenido, el proceso deberá terminar dentro de las cuarenta y ocho horas de iniciado.

Art. 451. Cuando la falta o contravención tenga pena de multa, no podrá ser privado de libertad el infractor que la satisfaga. El pago no impide los recursos que correspondan.

Art. 452. El recurso de apelación se interpondrá dentro del término de veinticuatro horas para ante el juez correccional o letrado de los territorios.

Art. 453. El juez resolverá el recurso en el término de cinco días. Dentro de los dos primeros podrán presentar un memorial el apelante y el asesor o procurador de la Policía o Municipalidad.

TÍTULO III

JUICIOS DE CALUMNIA E INJURIA

Art. 454. Deducida una querrela por calumnia o injuria, se convocará a quien la inicia y al acusado a un comparendo de conciliación.

Art. 455. Si no compareciese el querellante, sin justa causa, se le tendrá por desistido con costas. Si no compareciese el acusado o si no se llegara a un avenimiento, se le dará traslado de la acusación por el término de seis días.

Art. 456. No se dará curso a la querrela por calumnia o injuria escrita si no se acompaña el instrumento que la contenga.

Art. 457. Si el acusado no contesta la querrela en el término establecido, se le nombrará un defensor.

Art. 458. El defensor deberá expedirse sobre la acusación dentro de un plazo igual al señalado en el Art. 455

Si durante este plazo el acusado contesta la querrela o en cualquier oportunidad comparece a estar a derecho, se entenderán con él las ulteriores actuaciones, sin que las rebeldías posteriores puedan dar lugar a nombramiento de defensor ni a suspensión de procedimiento.

Art. 459. Si se dedujere reconvencción o se presentaren documentos por el querrellado se dará traslado al querellante por seis días.

Art. 460. En la contestación deberán oponerse todas las excepciones y defensas de que pueda hacer uso el querrellado y el juez se pronunciará sobre ellas en la sentencia. Sin embargo, la cuestión relativa a la jurisdicción se resolverá inmediatamente de ser propuesta, previa vista fiscal.

Art. 461. Cuando las partes no estuviesen de acuer-





do sobre los hechos o cuando la querella no fuese contestada en el caso del artículo 458, se recibirá la causa a prueba, aplicándose las reglas del plenario, salvo que la vista de la causa podrá celebrarse con las partes que concurran.

Art. 462. En las causas de calumnia o injuria no se decretará la detención o prisión preventiva del procesado, sino cuando hubiere motivos fundados para presumir que trata de ausentarse del país y no diere fianza suficiente.

Art. 463. Solo son apelables en este juicio el auto sobre competencia y la sentencia definitiva.

TÍTULO IV

AMPARO DE LIBERTAD

Art. 464. El recurso de amparo de la libertad o de *habeas corpus* se otorga contra toda orden o procedimiento de un funcionario que restrinja, sin facultades, la libertad de una persona.

Art. 465. Procede también el recurso de amparo cuando una autoridad provincial, sea o no competente, haya restringido la libertad de personas:

- 1.º Que gocen de inmunidades, en los casos en que éstas se hallen expresamente reconocidas por la Constitución o las leyes nacionales; y
- 2.º Por actos realizados en comisión o como empleados del Gobierno federal.

Art. 466. Serán competentes para conocer del recurso:

- 1.º Los jueces federales o de territorio de la jurisdicción que corresponda, cuando la orden o procedimiento que lo motiva haya emanado de un funcionario nacional o cuando el recurrente se encuentre comprendido en las disposiciones del artículo anterior; y



2.º Los jueces del crimen de la Capital cuando su causa derive de autoridad local de la misma.

Art. 467. La petición puede ser deducida por el interesado o por otra persona a su nombre, sin necesidad de justificar personería, y expresará:

- 1.º Las circunstancias que determinan la restricción de libertad, con indicación de la autoridad que ha impartido la orden, si fuere conocida;
- 2.º La causa o pretexto de la restricción de libertad, según las noticias que tenga el recurrente;
- 3.º Si la detención o prisión se ha ejecutado en virtud de mandamiento o providencia, acompañándose, en este caso y siendo posible, el original o un testimonio; y
- 4.º Los fundamentos de la ilegalidad del acto que motiva el recurso.

Art. 468. El juez, de oficio o a excitación fiscal, puede también amparar la libertad de una persona en los casos en que proceda el recurso.

Art. 469. Si considera fundado el recurso, el juez solicitará inmediatamente del funcionario autor o ejecutor de la restricción de la libertad, un informe sobre las causas que la hayan producido, el cual deberá evacuarse dentro del término que se fije y que no podrá exceder de doce horas.

Art. 470. Si el juez lo considera necesario, dispondrá que, sin perjuicio del informe ordenado, sea traída a su presencia la persona a cuyo favor se ejercite el recurso, siempre que el autor de la restricción de libertad no tuviera, por razón de su cargo, facultades para imponerla.

Art. 471. La orden de *hábeas corpus* se notificará al funcionario a quien se dirige, o a aquel bajo la guarda o autoridad de quien se encuentre el individuo en cuyo favor ha sido expedida.



Cuando el funcionario, autor de la orden de detención, residiese fuera del pueblo donde tiene su asiento el juez que conoce del recurso, el informe podrá requerírsele por telegráfo, sirviendo de notificación del auto de *hábeas corpus* el recibo de entrega de la comunicación.

Art. 472. Si el funcionario requerido rehusa recibirlo, se le informará verbalmente de su contenido; si se oculta o impide la entrada a la persona encargada de la notificación, la orden será fijada ante dos testigos, en sitio visible de su residencia o del lugar en que la persona detenida se encuentre.

Art. 473. El funcionario requerido, deberá expresar en su informe:

- 1.º Si ha restringido o no la libertad del recurrente;
- 2.º En caso afirmativo, en mérito de qué facultades y por qué razones lo ha hecho;
- 3.º Si ha procedido en virtud de alguna orden, auto o resolución, en cuyo supuesto deberá acompañarlo en original o en copia; y
- 4.º Si ha tenido bajo custodia al interesado y si lo ha puesto a disposición de otro funcionario, que mencionará, indicando, además, por qué causa, en qué tiempo y por qué autoridad se ha realizado la entrega.

Art. 474. Si el funcionario requerido no cumpliera estrictamente lo mandado, en la forma y término establecidos, sin alegar justa causa, incurrirá en multa de doscientos a quinientos pesos. El juez requeriente deberá además disponer su detención inmediata hasta que devuelva el auto con el informe pedido y obedezca las órdenes que se le hayan dado.

Art. 475. Cuando no pueda cumplirse la orden relativa a la presentación del recurrente, por enfermedad de éste deberá acompañarse un certificado médi-



co junto con el informe respectivo. El juez requeriente, en tal caso, podrá trasladarse al lugar donde se encuentra el detenido o resolver el recurso, sin más trámite.

Art. 476. Producido el informe, el juez resolverá el recurso dentro del término de cuarenta y ocho horas, previa vista fiscal. Si lo declarase procedente decretará la libertad inmediata del interesado, y hará cumplir su resolución. Si fuera desobedecido dará cuenta a la autoridad ante la cual, por la Constitución o las leyes, el funcionario sea responsable por delitos o faltas en el cumplimiento de sus deberes, para que proceda según corresponda.

Art. 477. La sentencia será apelable; y, cuando sea ordenada la libertad, la apelación solo se concederá en el efecto devolutivo, debiendo interponerse el recurso dentro del término de veinticuatro horas.

Art. 478. Las costas del recurso, en caso de ser denegado, serán a cargo del peticionante, y siendo otorgado, a cargo del funcionario autor de la detención ilegal.

Art. 479. La falta de sellos o reposiciones necesarias, no obstará en caso alguno a la tramitación y resolución del recurso de amparo de la libertad.

TÍTULO V

EXTRADICIÓN

Art. 480. El procedimiento para la extradición de delinquentes, sea que se solicite por la República o que deba otorgarse por ella a solicitud de otra nación, se regirá por los tratados y, en su defecto, por las disposiciones de este Código:

Art. 481. Cuando la extradición se solicite por la República, el pedido deberá iniciarse por el juez o tri-



bunal que conozca de la causa. El auto respectivo será fundado y apelable en relación, si lo hubiere dictado un juez de 1.ª instancia.

Art. 482. La solicitud de extradición se gestionará por la vía diplomática, a cuyo efecto el juez de la causa se dirigirá al P. E. por intermedio del Departamento de Relaciones Exteriores.

Con la comunicación, se acompañará testimonio del auto que resuelva sobre la extradición y además:

- 1.º La sentencia de condenación o mandato de prisión, según el caso, con indicación del hecho juzgado o imputado y el lugar y fecha en que ha sido cometido;
- 2.º Copia de las disposiciones penales aplicables;
- 3.º Filiación, en cuanto sea posible, de la persona reclamada y demás datos relativos a su identidad; y
- 4.º Cualquier otro recaudo que se exija por la Nación requerida.

Art. 483. El Poder Ejecutivo oír al Procurador General en caso de no existir tratado.

Si la resolución fuese denegatoria, devolverá la requisición al juez o tribunal de que proceda, con copia del decreto recaído y de los dictámenes en que se funde.

Si fuere favorable a la requisición, hará las gestiones del caso ante el gobierno del país donde se halle el delincuente y lo avisará al juez de la causa.

Art. 484. Cuando la extradición deba otorgarse por la República a solicitud de otra nación, el pedido se gestionará por la vía diplomática ante el P. E., el cual si lo considera procedente, lo pasará al juez federal o letrado de territorio en cuya jurisdicción se encuentre la persona reclamada y, en caso de duda, al juez federal de la Capital.

Art. 485. El pedido de extradición deberá contener los recaudos establecidos en el artículo 482.



Art. 486. El juez ordenará la detención del re-fugiado y le tomará declaración dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Art. 487. Si resultare justificada, cuando menos por indicios vehementes, la identidad del detenido, se le intimará que nombre defensor en el término de tres días bajo apercibimiento de ser designado de oficio.

Art. 488. El defensor tendrá seis días para presentar su defensa, de la cual se concederá vista, por otros seis, al procurador fiscal, quien será parte en el juicio de extradición.

Art. 489. Si hubiere necesidad de comprobar algunos hechos, se recibirá la causa a prueba, observándose respecto a ésta y sus términos, lo prescripto en este Código para el juicio criminal.

Art. 490. En el término de diez días después de la audiencia de prueba, el juez fallará el incidente declarando si hay o no lugar a la extradición.

Art. 491. La sentencia será apelable en relación en el término de cinco días. El proceso original se pasará al Ministerio de Relaciones Exteriores a los fines de la sentencia, dejándose en el juzgado constancia de las piezas principales.

Art. 492. En el juicio de extradición, el debate solo podrá versar sobre los siguientes puntos:

- 1.º Identidad y nacionalidad de la persona;
- 2.º Formas extrínsecas de los documentos presentados;
- 3.º Competencia de los tribunales que han pronunciado la sentencia o el auto de prisión;
- 4.º Prescripción de la acción penal o de la pena, según la ley de cualquiera de los dos países que resulte más favorable al reo; y
- 5.º Si el delito, la pena o la persona del presunto delincuente autorizan la extradición, de acuerdo con los tratados o la ley.



Art. 493. Si por delito anterior al hecho que motivó la extradición, pero descubierto con posterioridad, se pidiese autorización para procesar al individuo ya entregado, la solicitud deberá venir acompañada de las piezas del proceso en que consten las observaciones del acusado y será sometida al juez que hubiere atendido en la demanda de extradición.

Art. 494. La orden de extradición comprende la entrega de los objetos fruto del delito que se hallen en poder del acusado al tiempo de arrestarle, y los que puedan servir de prueba. Los demás papeles y objetos que se le hubiesen secuestrado se entregarán o no según lo resuelva el juez.

Art. 495. Si el individuo reclamado se hallase enjuiciado o condenado por crimen o delito cometido en la República, la extradición será aplazada hasta que concluya el juicio o termine su condena.

Art. 496. Cuando el delito tenga una pena menor en la República, no se entregará al procesado sino a condición de que los tribunales del país que lo reclama no le impondrán una pena mayor.

Art. 497. Si el criminal fuese reclamado por más de un estado al mismo tiempo, será atendido con preferencia aquel en cuyo territorio hubiese cometido el delito más grave, y siendo de igual gravedad aparente, el que lo hubiese reclamado primero.

Art. 498. En caso de urgencia, los tribunales podrán ordenar el arresto provisorio de un extranjero, a solicitud directa de las autoridades judiciales de otro país ligado con la República por tratado de extradición, siempre que se invoque la existencia de una sentencia o de una orden de prisión, se determine con claridad la naturaleza del delito condenado o perseguido, y la extradición aparezca procedente.

El pedido podrá hacerse por medio del correo o del telégrafo, debiéndose dar al mismo tiempo aviso



por la vía diplomática al Ministro de Relaciones Exteriores.

Los tribunales que hubieren practicado el arresto lo pondrán inmediatamente en conocimiento del mismo Ministro.

Art. 499. El extranjero arrestado en virtud de las disposiciones del artículo anterior, será puesto en libertad si el Poder Ejecutivo declarase que no es caso de extradición o si en el término de quince días, tratándose de un país limítrofe, y de sesenta tratándose de otros, no recibiese el gobierno el pedido de extradición en debida forma.

Art. 500. El arresto provisorio de un extranjero podrá ordenarse también a pedido de un Ministro diplomático, hasta tanto lleguen los documentos necesarios para presentar el pedido de extradición, y serán aplicables a este caso las disposiciones de los dos artículos precedentes.

Art. 501. Toda persona arrestada en virtud de un pedido de extradición, podrá solicitar su libertad provisional bajo fianza en las mismas condiciones que si el delito imputado hubiese sido ejecutado en la República.

Art. 502. Los jueces concederán la extradición del procesado o condenado que les sea solicitada por otros jueces o tribunales competentes del país, cuando a la solicitud se acompañe copia legalizada del auto de prisión o de la sentencia.

Recibida la solicitud y previa vista fiscal, se ordenará la detención del procesado o condenado. Una vez realizada y probada la identidad del detenido, se mandará entregar éste al juez requeriente. El auto que recaiga será apelable en relación.



TÍTULO VI

ACUMULACIÓN DE CAUSAS

Art. 503. Si durante el sumario, el encausado cometiese otros delitos, se acumularán los respectivos procesos ante el juez que corresponda, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en los artículos 32 a 34.

Art. 504. Si la causa estuviere en plenario, continuará el procedimiento hasta la citación para sentencia y se acumularán los procesos cuando ambos se encuentren en el mismo estado.

No se suspenderá el procedimiento de la primera causa, cuando en ella la acusación hubiere solicitado pena de diez años de privación de libertad por lo menos, y la segunda lo fuese por delito que merezca pena que no exceda de tres años.

Art. 505. Si la primera causa se hallare en segunda instancia no se suspenderá el procedimiento, pero la sentencia que recayere quedará sujeta a revisión por el mismo tribunal para el caso en que hubiere condena en la segunda causa, a fin de aplicar una sola pena por todos los delitos cometidos.

El mismo procedimiento se observará en el caso del segundo inciso del artículo anterior.

Art. 506. No serán acumuladas las causas cuando en una o en ambas hubiere más de un procesado y no se tratase de delitos conexos, pero las sentencias que se dicten contra el procesado en los dos juicios quedarán sujetas a la revisión establecida en el artículo precedente.

Art. 507. Cuando las causas se ventilen ante jurisdicciones distintas, la pena definitiva será fijada por el tribunal de última instancia de la ju-

jurisdicción a que hubiere correspondido el conocimiento de todos los juicios, aun cuando no hubiese sido apelada ninguna de las sentencias.



TÍTULO VII

VISITA DE CÁRCELES

Art. 508. Los jueces que ejerzan la jurisdicción criminal y correccional deberán visitar individualmente, por lo menos cada seis meses, las cárceles de los detenidos existentes en la sede del juzgado. La visita tendrá por objeto conocer el estado de los presos y oír las reclamaciones que hagan sobre el tratamiento que reciban y las peticiones que formulen sobre la causa.

Los jueces federales en cuya sede no existiese cámara de apelación y los jueces letrados de territorios deberán efectuar la visita una vez cada dos meses.

Art. 509. Los jueces darán cuenta al superior cuando encuentren atendibles las reclamaciones o pedidos de los presos, y no estuviere en la órbita de sus atribuciones resolverlas por sí mismos.

Art. 510. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, cada tres meses se hará una visita de cárceles por las cámaras a la cual deberán concurrir los jueces, el ministerio fiscal y los defensores de los procesados.

Art. 511. Las visitas a que se refiere el artículo anterior, además del objeto que se señala a las de los jueces en el artículo 508, tendrán el de averiguar el estado de las causas e indagar la razón de las demoras que se noten en el procedimiento.

Art. 512. El tribunal tomará las medidas necesarias para el pronto despacho de las causas, haciendo uso de sus facultades legales.

Art. 513. El tribunal pondrá en conocimiento del Ministerio de Justicia, todas las faltas y defectos que note en la administración de las prisiones.



TÍTULO VIII

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Art. 514. Los incidentes que no obstan a la prosecución del juicio, se substanciarán por cuerda separada y serán formados con las piezas de autos o sus testimonios que las partes indiquen y el juez crea necesarias.

Art. 515. Los incidentes se substanciarán por los trámites establecidos para las excepciones de previo y especial pronunciamiento.

Art. 516. Los términos que no estuviesen señalados en este Código, serán fijados por el juez según las circunstancias del caso.

Art. 517. Los defensores oficiales no podrán abogar en causas criminales, bajo pena de destitución.

Art. 518. Los defensores oficiales o particulares que fueren negligentes en el cumplimiento de los deberes de su cargo serán corregidos disciplinariamente, pudiendo ser separados de la defensa si fuera manifestamente perjudicial para el procesado.

Art. 519. Si el término fuere perentorio, se tendrá por decaído el derecho de que se hubiese dejado de usar, por su solo transcurso.

Art. 520. Si no fuere perentorio, y no se hubiera solicitado prórroga en tiempo, se dará por decaído el derecho no ejercitado después de transcurridas cuarenta y ocho horas de su vencimiento, háyase o no acusado de rebeldía.

Art. 521. La rebeldía podrá acusarse verbalmente ante el actuario, quien asentará en los autos la nota correspondiente, firmándola con el interesado.



Art. 522. Los jueces y tribunales tienen el deber de mantener el decoro y buen orden en los juicios y de hacer respetar sus resoluciones, pudiendo al efecto imponer correcciones disciplinarias a las partes, funcionarios y demás personas que intervengan.

Art. 523. Se entenderán por correcciones disciplinarias:

- 1.º El apercibimiento o prevención;
- 2.º La reprensión;
- 3.º La multa, que no podrá exceder de quinientos pesos;
- 4.º La detención que no pase de quince días; y
- 5.º La suspensión por un término que no exceda de seis meses.

No son apelables los autos que impongan correcciones disciplinarias, excepto cuando se trate de suspensión que exceda de un mes.

El recurso se otorgará en el solo efecto devolutivo.

TÍTULO IX

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 524. Las disposiciones contenidas en este Código son aplicables después de treinta días de la fecha de su promulgación, tanto a los asuntos que se promuevan, cuanto a los pendientes, con excepción de los trámites o diligencias que hayan empezado a ejecutarse, los cuales se regirán por las leyes anteriores.

Art. 525. Quedan derogadas las disposiciones anteriores sobre materias regidas por este Código, con excepción de los procedimientos establecidos por leyes especiales.

Errata notable

Página 61, art. 288, inc. 1, dice: «... los menores de quince años . » y debe decir: «... los menores de diez y ocho años...»





ÍNDICE

Páginas

Nota dirigida al Sr. Ministro de Justicia e Instrucción Pública

Proyecto de Código de Procedimientos en lo Criminal

Libro primero

DISPOSICIONES COMUNES

<i>Título</i>	<i>I.</i> —Reglas generales.....	7
•	<i>II.</i> —Acciones que nacen de los delitos.....	8
•	<i>III.</i> —Jurisdicción y competencia.....	9
•	<i>IV.</i> —Cuestiones de competencia.....	12
•	<i>V.</i> —Recusaciones.....	16
•	<i>VI.</i> —Ministerio fiscal.....	20
•	<i>VII.</i> —Notificaciones, citaciones y emplazamientos...	21
•	<i>VIII.</i> —Costas procesales.....	24
•	<i>IX.</i> —Rebeldía o contumacia.....	25

Libro segundo

SUMARIO

<i>Título</i>	<i>I.</i> —Disposiciones generales.....	26
•	<i>II.</i> —Denuncia.....	28
•	<i>III.</i> —Querrela.....	30
•	<i>IV.</i> —Prevención.....	32
•	<i>V.</i> —Excitación fiscal.....	35
•	<i>VI.</i> —Procedimiento de oficio.....	35
•	<i>VII.</i> —Instrucción.....	36
•	<i>VIII.</i> —Declaración indagatoria.....	41





<i>Título</i>	<i>Páginas</i>
IX.—Incomunicación	44
X.—Circunstancias personales del procesado.....	44
XI.—Identidad del delincuente.....	45
XII.—Testigos.....	46
XIII.—Careos.....	52
XIV.—Confesión.....	53
XV.—Peritos.....	53
XVI.—Prueba instrumental.....	56
XVII.—Presunciones.....	56
XVIII.—Intercepción de la correspondencia.....	56
XIX.—Registro domiciliario y de lugares públicos....	57
XX.—Detención y prisión preventiva	58
XXI.—Libertad provisional.....	61
XXII.—Embargos.....	65
XXIII.—Intervención de terceros.....	66
XXIV.—Artículos de previo y especial pronunciamiento..	67
XXV.—Conclusión del sumario.....	68
XXVI.—Sobreseimiento.....	69

Libro tercero

PLENARIO

<i>Título</i>	<i>I.—Prueba y discusión.....</i>	<i>72</i>
	<i>II.—Sentencia.....</i>	<i>75</i>
	<i>III.—Reposición.....</i>	<i>77</i>
	<i>IV.—Apelación.....</i>	<i>77</i>
	<i>V.—Nulidad.....</i>	<i>79</i>
	<i>VI.—Denegación o retardo de justicia.....</i>	<i>80</i>
	<i>VII.—Procedimiento en segunda instancia.....</i>	<i>80</i>
	<i>VIII.—Consulta.....</i>	<i>84</i>
	<i>IX.—Recurso de revisión.....</i>	<i>85</i>
	<i>X.—Ejecución de sentencia.....</i>	<i>86</i>

Libro cuarto

JUICIOS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

<i>Título</i>	<i>I.—Juicio correccional.....</i>	<i>88</i>
	<i>II.—Juicio sobre faltas.....</i>	<i>89</i>

<i>Título</i>	<i>Páginas</i>
<i>III.</i> —Juicios de calumnia e injuria.....	90
• <i>IV.</i> —Amparo de libertad.....	91
• <i>V.</i> —Extradición.....	94
• <i>VI.</i> —Acumulación de causas.....	99
• <i>VII.</i> —Visita de cárceles.....	100
• <i>VIII.</i> —Disposiciones complementarias.....	101
• <i>IX.</i> —Disposiciones transitorias.....	102

